



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*inhumanos y/o degradantes (Protocolo de Estambul)".*

- Respecto a [REDACTED], informó que el procesado no otorgó su consentimiento para ser examinado por peritos pertenecientes a la Procuraduría General de la República, pero que se encontraba en trámite su desahogo a cargo de expertos designados por el Consejo de la Judicatura Federal.

- En relación al quejoso [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], se indicó que tampoco autorizó ser examinado por peritos de la Procuraduría General de la República, que desde el seis de abril de dos mil diecisiete se habían estado realizado las gestiones pertinentes para que el Consejo de la Judicatura Federal, designe peritos que puedan practicar dichos estudios, sin que a la fecha se hubiera autorizado la cotización propuesta por los peritos.

PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DOS  
MIL  
DIECISÉIS  
Y  
SIETE  
LIPAS

- En cuanto a [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] se practicaron los dictámenes respectivos, en fechas dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis y siete de febrero de dos mil diecisiete, respectivamente, en los cuales se

concluyó que no existía correspondencia entre la evidencia médica y los alegatos de tortura, sino que sus lesiones concordaban en un alto grado de posibilidad con maniobras de aseguramiento y sujeción<sup>289</sup>.

- En el caso de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en el dictamen de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se concluyó que no se encontraron indicios ni evidencia física, congruente con sus alegatos de posible tortura física<sup>290</sup>.

- Mientras que, referente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en el dictamen de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, se determinó que no presentaba lesiones físicas demostrables y correspondientes con las producidas por métodos de tortura física<sup>291</sup>.

717. En el caso se debe destacar que respecto del quejoso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sus intervenciones ante el Ministerio Público de la Federación, así como ante el juez de la causa, datan de abril de dos mil quince, por lo que al veintidós de marzo de dos mil dieciocho, fecha en que el juez de la causa, rindió el informe mencionado, ya habían pasado casi tres años,

<sup>289</sup> Anexo de pruebas fojas 84 163 258

<sup>290</sup> Idem, foja 323

<sup>291</sup> Idem, foja 359



sin haberse desahogado el correspondiente dictamen conforme al Protocolo de Estambul.

718. En similares términos, a la fecha del mencionado informe, tampoco se había practicado el dictamen respectivo a Gildardo [REDACTED].

719. Mientras que, respecto a los restantes quejosos de los expedientes relacionados, los dictámenes se habrían practicado entre el veinticinco de julio de dos mil dieciséis al siete de abril de dos mil diecisiete.

720. Es decir, entre la fecha en que existieron indicios o denuncias de actos de posible tortura, y el momento de la práctica de la pericial respectiva, transcurrieron, en el mejor de los casos, **veintiún meses**; alrededor de **veinticuatro meses** en otros tres; y **veintiséis meses** en uno más.

721. Ahora, como previamente se indicó, las normas convencionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los criterios asumidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que la **investigación sobre actos de tortura debe ser inmediata**.

722. Al efecto, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (Protocolo de Estambul), se establece que **quince meses resultan excesivos** para efectos de dicha investigación, al señalar lo siguiente:

*"Órganos y Mecanismos de las Naciones Unidas*

*a) El Comité contra la Tortura*

*11. El Comité contra la Tortura supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está compuesto de diez expertos elegidos por su gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos'*

*[...]*

*14. Entre las inquietudes expresadas por el Comité en sus informes anuales a la Asamblea General figura la necesidad de que los Estados Partes cumplan los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura para conseguir que se emprendan investigaciones prontas e imparciales sobre todas las quejas de tortura. **Por ejemplo, el Comité ha señalado que considera que una demora de 15 meses en la investigación de una queja de tortura e excesiva y no satisface las exigencias del artículo 12.** El Comité ha señalado además que el artículo 13 no exige la presentación formal de*



*una denuncia de tortura sino que 'basta la simple alegación por parte de la víctima para que surja la obligación del Estado de examinarla pronta e imparcialmente'.*" (Lo resaltado no es de origen).

723. En el caso se insiste, transcurrieron **veintiuno, veinticuatro y veintiséis meses**, respectivamente, desde que existieron indicios y/o denuncia de actos de posible tortura, a la fecha de práctica de los mencionados estudios.

724. Por lo que, bajo los criterios del propio Protocolo de Estambul, queda claro que se está frente a una demora excesiva, lo que impide considerar que se haya observado la prontitud en la investigación.

725. Aunado a lo anterior, y más importante aún, como se ha dicho, es que la investigación sobre la tortura sea **imparcial e independiente**.

726. Sobre el tema, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 8, dispone:

#### **"Artículo 8**

*Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.*

*Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.*

*Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.” (Lo resaltado no es de origen).*

727. Del mismo modo, en los artículos 12 y 13 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se señala:

### **“Artículo 12**

*Todo Estado Parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, **las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.***

### **“Artículo 13**

*Todo Estado Parte velará porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción*



tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea **pronta e imparcialmente** examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado." (Lo resaltado no es de origen).

728. Ahora, como se vio previamente, la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**, se pronunció en relación al tema, entre otros, en el **Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México**, e indicó que la investigación sobre la tortura debe ser "**imparcial, independiente y minuciosa**".

729. Por lo que, al tratarse de un asunto donde contendió el Estado mexicano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta vinculante.

730. Máxime, que atendiendo a dicha jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en Pleno, como en su Primera Sala, establecieron los criterios **1a. LVII/2015 (10a.)**, y tesis **P. XXI/2015 (10a.)**, ya invocados, en similares términos a los del tribunal interamericano.

OS  
ADO  
NTO  
IPAS

731. Así, el que la práctica de los dictámenes corra a cargo de personal independiente, es una exigencia esencial, no excusable.

732. Toda vez que en el **Protocolo de Estambul**, se señala lo siguiente:

*"20 [.] En el informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura del 12 de enero de 1995, el Relator Especial Nigel Rodley formuló una serie de recomendaciones. En el párrafo 926 g) del informe observaba:*

*'Cuando un detenido o un familiar o un abogado presenta una denuncia por tortura, siempre debe realizarse una investigación. [...] Deben establecerse autoridades nacionales independientes, como una comisión nacional o un ombudsman con facultades de investigación y/o procesamiento, para que reciban e investiguen las denuncias. **Las denuncias de torturas deben ser tramitadas inmediatamente e investigadas por una autoridad independiente que no tenga ninguna relación con la que esté investigando o instruyendo el caso contra la presunta víctima***

*[...]*

74. El derecho internacional obliga a los Estados a **investigar con prontitud e imparcialidad** todo caso de tortura que se notifique. Cuando la información disponible lo





*justifique, el Estado en cuyo territorio se encuentra una persona que presuntamente haya cometido actos de tortura o participado en ellos, deberá bien extraditar al sujeto a otro Estado que tenga la debida jurisdicción o bien someter el caso a sus propias autoridades competentes con fines de procesar al autor de conformidad con el derecho penal nacional o local. Los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura son competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad. Estos elementos pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deberán orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura."* (Lo resaltado no es de origen).

733. Así, a fin de determinar si se satisfacen los principios de **imparcialidad e independencia** en la investigación, uno de los aspectos sobre los que es necesario recapitular, es respecto a quién o a quiénes se atribuyen los actos de tortura.

734. En autos se cuenta con la siguiente información:

• [REDACTED]  
(declarante 14 y 15), en su ampliación de

declaración preparatoria, de catorce de enero de dos mil quince<sup>292</sup>, narró lo siguiente:

*“El veintisiete de octubre fue mi detención, me detuvieron en la casa de la maestra [REDACTED] ahí me encontraba trabajando aproximadamente entre las nueve o nueve y media, entraron gente armada, civiles, tumbando la puerta y pateando cosas que se les atravesaba en el camino, yo me encontraba en el baño, cuando entró esa gente armada, de ahí llegaron al baño y me tiraron al suelo dándome golpes en todo el cuerpo patadas. y cuando estaba yo tirado alcé poquito la cabeza y me dieron un culatazo en la ceja izquierda y me reventaron, me empezó a salir sangre y me siguieron golpeando. preguntándome que dónde estaban las armas y la gente que vivía ahí, yo les contesté que yo no sabía que nomás vivía ahí la maestra [REDACTED], la que me contrató para trabajar, de ahí me di cuenta que en toda la casa revisaron los cuartos buscando las armas que me preguntaban. pasó como unos veinticinco a treinta minutos cuando estaba yo tirado en el suelo y me levantaron y me sacaron de la casa y me subieron a una camioneta, ya de ahí me tiraron al piso de la camioneta y de ahí me trasladaron a un lugar pero en todo el camino me iban dando electricidad con un*

<sup>292</sup> Tomo de pruebas remitido en el amparo en revisión 204/2017 relacionado con el presente, fojas 4 a 6



aparato en todo el cuerpo, y preguntándome por las armas, yo les contestaba que no sabía de cuáles armas me decían y de ahí se subieron encima de mí y una persona se subió encima de mí y me daba electricidad en mis huevos, y me decía que dijera la verdad porque si no me iban a matar, y yo les contestaba que yo no sabía lo que buscaban que yo solamente era una persona que me alquilaba para trabajar, me decía que no me hiciera pendejo que yo sabía en dónde estaban las armas, yo les contestaba que yo no sabía nada que yo solamente era un trabajador de ahí que yo no sabía qué pasaba, aproximadamente como una hora que me trasladarlo (sic) de camino, sentí que se metieron a una terracería porque iba yo boca abajo, y en cuanto llegamos escuchaba que trabajaba gente escarbando, pasó como unos veinte minutos de ahí gritaron que se retiraran y que alzarán las cosas, y que no dejaran evidencias que uno gente ahí (sic) y de ahí subieron las cosas y arrancaron la camioneta, ya en cuanto salimos de esa terracería entramos al pavimento a carretera, en el transcurso del camino me amarraron las manos cruzadas con una venda, me vendaron los ojos, y me decían que dijera todo lo que sabía y que me iban a dejar ir, pero yo les decía que no sabía de lo que me hablaban, de ahí me seguían dando toques en la cabeza y en todo el

LOS  
ADO  
ITO  
PAS

cuerpo, de ahí me trasladaron a un lugar y me metieron a un cuarto, y de ahí me quitaron las vendas de las manos y que me quitara toda la ropa por completo, en cuanto me quité la ropa me volvieron a vendar las manos. y los pies de las rodillas para abajo, me tiraron al suelo y me empezaron a echar agua fría, y me empezaron a dar electricidad abajo en las plantas de los pies y en los huevos, en cuanto me ponían electricidad en los huevos, me echaban agua en la cara, pasó como aproximadamente como unos veinte minutos, me empezaron a hacer preguntas diciéndome que dónde estaban las armas, que yo sabía, yo les contestaba que no sabía y ellos me decían, no hay problema si no quieres decir nada yo no me voy a cansar de hacerte cosas, me decían que tenían todo el día por completo para estarme torturando que si eso quería yo, de ahí escuché que pidieron mi playera y me la pusieron entre la nariz y la boca, me empezaron a echar agua encima de la playera, varias personas me agarraban el cuerpo para que no me moviera, en cuanto ellos miraban que yo me ahogaba, me dejaban de echar el agua, con el pie de una de esas personas me ponía el pie en el pecho para que yo arrojara el agua que yo había inhalado de las narices y la boca, como no podía yo respirar con la playera mojada y echándome agua fría, de ahí llegó un señor y me empezó a nacer



preguntas, me empezó a decir que si no quería cooperar, iban a ir a traer a mi familia, yo les contesté que dejaran en paz a mi familia, ya me dijo el que me hacía las preguntas que entonces ahorita iba a mandar traer a mi familia, de ahí me empezaron a dar electricidad en todo el cuerpo, en los huevos y atrás en la cola, después me sentaron como unos veinte minutos y me mostraron un teléfono donde venía una fotografía de mi esposa, mis dos niñas y de un hermano, me dijeron que si no cooperaba yo que los iban a matar e iban a violar a mis niñas y a mi esposa y que les iban a meter el tubo del cañón en el ano a mis niñas y que las iban a enterrar para que no las encontraran de todos modos nadie se dio cuenta cuando las detuvieron, en cuanto yo vi la foto de mis familiares yo les dije que me dejaran en paz que qué querían que hiciera para que no les hicieran nada y me dijeron que les entregar las armas y que les pusiera a gente armada que yo conociera y yo les dije que no conocía nadie y que no sabía de armas, de ahí me dejaron y me quitaron la venda de los ojos y me dejaron ahí en paz como una media hora sin hacerme cosas, después que se me acercan y me empezaron a decir que si no quería que le pasara nada malo a mi familia que dijera lo que ellos me iban a decir, y que les dijera que era yo sicario del Cártel Guerreros Unidos, y de ahí

LOS  
RACOS  
ITO  
PAS

me subieron otra vez a una camioneta y nos trasladamos de treinta a cuarenta minutos, y me subieron a un helicóptero, en el transcurso del camino me di cuenta que iban varias personas detenidas como yo, de ahí la gente que iba adentro del helicóptero me empezaron a pegar en la cabeza con un objeto duro y de ahí me agarraron de las orejas y me empezaban a juntar con otra persona como a cabezazos porque me dolía mucho, y me daban de palmadas en las orejas, de ahí con su pie me aplastaban los pies y gritaba yo y ellos más me pegaban, de ahí pasó como unos cuarenta minutos de vuelo y que aterrizó, ya de ahí que me bajan y les decía yo que venía bien mareado y como venía vendado no me daba cuenta en qué lugar era, me metieron a una casa, llegó una persona y me dijo que cerrara los ojos, porque me iba a quitar la venda de las manos y de los ojos, me limpió mi cara porque traía sangre y yo le dije que me dolía la cabeza y me sentía mareado, me inyectó y ahí me di cuenta que era la marina que me tenía detenido y me sentó y me dijo que me relajara que se me iba a quitar y de ahí escuchaba que torturaban a alguien más, me subieron a un cuarto, donde había personas con botas color café, me quitaron mi ropa por completo y me amarraron las manos hacia atrás y me volvieron a vendar los ojos, me tiraron al suelo y puse mi cabeza



entre en medio de los pues (sic) de una persona y me dijeron que si no cooperaba yo que me iban a matar a mi familia y a mí que de todos modos nadie se había dado cuenta cuando me habían agarrado y yo les dije que sí que iba a cooperar con ellos pero que dejaran en paz a mi familia y ellos me dijeron eso está bien, pero mientras, te vamos a dar una ayudadita para que te salgan bien las cosas, de ahí me empezaron a poner una bolsa entre la boca y las narices, me la ponían varios minutos hasta que yo sentía que me ahogaba, de ahí llegó una persona con una chicharra y me empezaba a dar toques en la cabeza, después en todo el cuerpo, me daban electricidad yo les gritaba que ya no me hicieran nada que yo iba a cooperar lo que ellos me dijeran, de ahí me preguntaron que de qué cártel era yo y yo ya me habían dicho que les dijera eso, les dije que era yo de los Guerreros Unidos que era yo sicario, de ahí me sentaron y me quitaron la venda de las manos, me dijeron que iba yo a hacer todo lo que me iban a decir, me preguntaron que si sabía yo leer rápido y les dije que no que no, sabía leer muy bien, me volvieron a limpiar del cuerpo y de la cara, después de veinte minutos y llegaron dos personas y me dijeron que me iba a aprender todo lo que ellos me iban a decir, que yo era una persona que participé en la desaparición de

98297

los normalistas y que no se me olvidara decir siempre que era yo sicario de Guerreros Unidos, y yo le dije que sí que estaba bien, de ahí me movieron de ese lugar, en cuanto yo llegué a ese lugar había una mesa y que si podía firmar les dije que sí, me acercaron unas fotos y que pusiera que sí los conocía y me hicieron firmar varias cosas, me fui a sentar ahora sí, ya va a empezar lo que vas a decir, me leyeron una hoja de lo que tenía que decir, que decía que yo recibí a los normalistas que me los habían entregado los policías de Iguala, y que pusiera yo gente de ahí del pueblo. y te voy a dar una lista de ellos para que tú los pongas, y me decía que si yo conocía el basurero de Cocula, yo les dije que no pero que más o menos sabía por dónde era, ellos me dijeron si no conoces ahorita vas a conocer, de ahí en cuanto me dijeron que siguiera diciendo que era yo sicario de los Guerreros Unidos y que yo participé en la desaparición de los normalistas, me dijo que no se me olvidara nada de lo que él me estaba diciendo que porque me iban a hacer un video y unas grabaciones, de ahí les dije que yo me voy a meter en problemas y ellos me dijeron que no, que eso lo hacían nomás para que se calmaran los familiares de los normalistas, que para que ya no anduvieran chingando en las caminatas y haciendo desmadres en los lugares, que de





PROCURADURÍA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

2-8

todos modos nunca iban a encontrar a los normalistas y que yo nomás siguiera las indicaciones que ellos me estaban dando y que dijera en el video que yo había asesinado de tres a seis personas de los normalistas, después de dos horas dándome explicaciones de los hechos que iba yo a decir y de ahí me tomaron una grabación de voz, diciendo todo lo que me había dicho de los normalistas, y de ahí me volvieron a decir todo lo mismo que eso lo tenía que repetir varias veces porque tenía que salir bien ese video y la grabación, que porque con esas grabaciones y video que me iban a hacer se iban a quitar arto peso de encima de los normalistas y me hicieron otros dos o tres videos por todos fueron como cuatro videos de voz y de ahí me dijeron que ya estaba yo listo para que me hicieran la grabación en video, me dijeron que tenía que mencionar al presidente de Cocula que también estaba involucrado y me tomaron el video y pasó aproximadamente como unas dos horas con el video y como salió mal al último ellos me decían que eso no era un juego que si yo quería la vida, que tenía que hacer las cosas exactamente como ellos me lo dijeron, de ahí cuando pasó del video me volvieron a llevar a un cuarto, de ahí me ataron otra vez las manos hacia atrás, pero antes me quitaron la ropa, y me vendaron los ojos y me dieron electricidad atrás en la cola, me metieron

*la chicharra en la cola, y ellos me decían nomas para que no se te olvide lo que tienes que decir, me subieron a una camioneta antes de eso me limpiaron la cara y me di cuenta que era SEIDO, me metieron a una oficina unas personas me dijeron que tenía que firmar, yo no declaré nada más firmé con fotografías y papeles en blanco y me tomaron las huellas de manos, es todo lo que deseo manifestar "*

735. Como se ve, los hechos a que alude el **declarante 14-15**, atribuye los actos de tortura a elementos de la Marina, pero también refiere que dos personas que llegaron después, le indicaron que se tenía que aprender lo que iba a declarar, y le hicieron firmar varias cosas, que le hicieron grabaciones de audio y video, después lo subieron a una camioneta y lo llevaron a las oficinas de SEIDO, donde solamente firmó hojas en blanco, así como unas fotografías, pero que él no declaró.

• En la misma diligencia, [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
(declarante 16)<sup>293</sup>, señaló:

*"... el día veintisiete de octubre fui detenido en Apetlanca, Guerrero, aproximadamente de nueve a diez de la mañana, me encontraba trabajando para la*

<sup>293</sup> Tomo de pruebas remitido en el amparo en revisión 204/2017, relacionado con el presente fojas 7 y 8



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

maestra [REDACTED], cuando llegaron unos hombres con armas largas diciéndome que me tirara al suelo que no hiciera ningún solo movimiento y me preguntaron que cómo me llamaba y les respondí que Jonatan, cuando llegó otro de los hombres y me comenzó a patear en el suelo diciéndome que me iba a cargar la chingada que porque ellos eran los rojos, de ahí me levantaron entre dos poniendo la camisa sobre la cabeza sacándome del lugar subiéndome a una camioneta desconozco, me tiraron en el piso de la camioneta, y me comenzaron a pegar preguntándome que quién mas estaba conmigo y les dije que estaba solo en ese momento y dijo el que me preguntó le dijo al chofer que se arrancara y en el camino me iban pegando diciéndome que si pertenecía a Guerreros Unidos, y yo les respondía que no que me encontraba trabajando, después de ahí me preguntaron que en qué trabajaba y les respondí que era campesino y también me alquilaba para ayudante de albañil, me trasladaron como una hora aproximadamente, hasta que llegamos a un lugar en donde no me bajaron de la camioneta, de ahí escuché que me iban a tomar fotos en eso se subió una mujer y me preguntó por mi nombre y que cómo me decían y yo le contesté que me llamo Jonatan y no tengo apodo sólo me dicen Jona, de ahí me subieron a otra camioneta y me

49891

comenzaron a pegar y me decían que quién era mi líder y yo le decía que no sabía de qué me hablaban, en esa camioneta me trasladaron a otro lugar en donde llegamos y me bajaron y me subieron a un helicóptero en eso uno de los que me llevaba agarrado del cuello, le dijo que cerrándose la puerta del helicóptero me iba a cargar la chingada y que en cuanto se elevara me iba a aventar para ver cómo volaba, en eso me vendó de las manos y de los ojos con las manos hacia atrás y me sentaron y en eso uno de los que iba a bordo comenzó a aplaudir y apegar en las orejas, y en los testículos, diciéndome que cuando llegáramos a donde me iban a llevar me iban a golpear y de ahí me iban a decir cosas que ellos escucharon cuando llegué ahí me bajaron y me metieron a una como casa, vendado de los ojos y de las manos me pegaron hacia la pared, estuve como media hora así hasta que llegó otro de los sujetos y me agarró del hombro y me preguntó que si quería agua, y yo le dije que sí, en eso acercó una cubeta y me acostaron boca arriba y me la comenzó a echar en la cara, diciéndome que ahí estaba mi agua que quería, me sentaron y me comenzaron a dar bolsa y toques con un aparato, en el cuello y arriba de la cabeza, diciéndome que apenas estaba comenzando la fiesta, llegó uno y me dijo a ver cabrón te voy a levantar la venda y te voy a enseñar unas fotos



con apodos y te los vas a comenzar a aprender y yo le decía que sí, en eso me alzaron la venda y me enseñaron las fotos y yo les decía que yo no los conocía a los de las fotos, y me golpeaban me decían pues ahora los tienes que conocer y te los tienes que aprender y me comenzaban otra vez a dar bolsa y toques, y me pegaban de patadas en las costillas, en las piernas, hasta que llegó un momento en que me bajaron los pantalones a las rodillas y el calzón y me empezaron a dar toques en mis partes genitales, amenazándome que si no les decía lo que ellos querían que dijera, que me iban a tener así toda la tarde y toda la noche, que como quiera nadie sabía que ellos me tenían, sacaron una mesa y me enseñaron un mapa de Cocula, Guerrero, y de Iguala, me dijeron lo que tenía que decir, que era en donde supuestamente ellos me dijeron, me señalaron las indicaciones que tenía que hacer diciéndome que los municipales nos habían pasado a los estudiantes que eran en dos camionetas de ahí sobre el mismo mapa me enseñaron por dónde tenía que señalar el camino que agarramos según ellos, y me volvían a repetir que eso me lo tenía que aprender si yo no quería que mi familia le pasara lo mismo y yo les decía que sí, que me lo iba a aprender, me volvieron a enseñar las fotos y me volvían a preguntar que si ya me

LOS  
TOS

*había aprendido los nombres de las personas y yo les decía que sí, asimismo, en SEIDO, me ofrecieron dinero y nos dijeron que ellos no nos iban a torturar que ellos usaban métodos científicos, es todo lo que deseo manifestar*

*El defensor de oficio de esta adscripción, expresa: es mi deseo interrogar al inculcado, de la siguiente manera:*

*A la uno. Que diga el inculcado el lugar exacto donde fue detenido por los elementos de la marina. Calificada de legal.*

*Contestó. no fui detenido por la marina, los que me detuvieron me entregaron con la marina, e iban vestidos de civiles."*

736. De lo que se sigue que [REDACTED] [REDACTED] atribuyó la tortura tanto a personas vestidas de civil, que previo a entregarlo a los marinos, le dijeron lo que tenía que declarar, que se lo tenía que aprender, o de lo contrario, afectarían a su familia. También refiere que en SEIDO le ofrecieron dinero, y que le dijeron que ahí no lo torturarían, porque "ellos usaban métodos científicos".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

• En la misma audiencia, [REDACTED]

[REDACTED]  
(declarante 17)<sup>294</sup>, manifestó:

“... el día veintiséis de octubre estaba durmiendo en mi casa con mi esposa y con mi hijo, cuando escuché que pateaban la puerta y entonces al abrir me comenzaron a apuntar y me dijeron al suelo al suelo, entonces yo me tiré al suelo, me comenzaron a preguntar que en dónde estaban las armas y la droga, entonces yo les contestaba que cuáles que yo no sabía nada, comenzaron a revisar toda mi casa y a tirar las cosas, después le pusieron la pistola a mi hijo y a mi esposa, de ahí me levantan y me esposan con las manos hacia atrás y la cabeza hacia abajo, me llevan caminando hacia a donde estaban sus camionetas y en ese camino me iban preguntando que en dónde estaban los estudiantes y yo les dije que cuáles que yo no sabía nada, y me iban pegando en la cabeza, llegando me subieron a sus camionetas y me comenzaron a torturar, me comenzaron a dar bolsa, a torturar, me desmallé tres veces, me revivieron con toques y me preguntaron que en dónde había estado el veintiséis de septiembre, y yo les contesté que había estado con mi suegra cenando y que ahí me había quedado a dormir toda la noche, de ahí me llevaron en sus

<sup>294</sup> Tomo de pruebas, remitido en el amparo en revisión 204/2017, relacionado con el presente, fojas 9 y 10.

camionetas a una casa pero no sé a dónde, me comenzaron a enseñar unas fotos, diciéndome que si yo conocía esas personas, yo les dije que no conocía a nadie, me comenzaron a decir nombres y apodos, yo les contestaba que no sabía nada ningún nombre ni apodo, luego me preguntaron que si me decían "El Chéfi", yo les contesté que no tenía ningún apodo que solo me decían "Chéfi" o "El Chéfi", y entonces ahí me dijeron que yo tenía que decir que había participado en los hechos y yo les decía que por qué si no sabía nada de eso, y me dijeron que yo tenía que decir lo que ellos me estaban diciendo, que si no ahorita iban a traer a mi esposa y a mi hijo y los iban a matar entonces yo les decía que por qué si no había hecho nada malo, me dijeron que a ellos no les importaba si había estado o no había estado que tenía que decir lo que ellos me habían dicho, entonces yo les dije voy a decir lo que ustedes dicen pero no les hagan nada a mi esposa y a mi hijo ya no me sigan angustiendo, de ahí me llevaron a SEIDO, y me volvieron a repetir lo mismo, que tenía que decir lo que me habían dicho, que yo había participado en la desaparición de los normalistas y que era del cartel de "Guerreros Unidos", que si no decía eso me iban a sacar de ahí y me iban a volver a torturar y me iban a hacer lo que ya me habían dicho a mi esposa y a mí, entonces comienzo a





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 55

379

*declarar ahí en SEIDO, me dan unas hojas para que las firme sin saber lo que decía, de ahí me pusieron unas fotos y tenía que decir que los conocía, me hicieron declarar en una cámara y salí en las noticias, sin mi consentimiento me sacaron en las noticias violando mis derechos, de ahí pasó un día en SEIDO y me llevaron a mi pueblo, me subieron al helicóptero y me iban diciendo que tenía que decir que había participado tirando las bolsas al río y si no me iban a torturar nuevamente, entonces llegando a mi pueblo, hago lo que ellos me dijeron, cuando llego ya tenían las bolsas y todo eso, y hago como que las estaba tirando, como ellos me dijeron y nuevamente salgo en las noticias; siendo todo lo que deseo declarar."*

RECIBIDO  
106  
LATO  
JTD  
IPAS

737. Así, aunque en dichas alegaciones de tortura no se precisa la corporación a la que pertenecen las personas que lo detuvieron y que inicialmente lo torturaron, sí se señala que en las oficinas de la SEIDO le reiteraron lo que tenía que declarar, y que lo hicieron firmar un documento, sin saber lo que decía.

- Mientras que [REDACTED] [REDACTED] (declarante 18)<sup>295</sup>, señaló:

*"... El día de mi detención fue el veintiséis de octubre, me encontraba yo en Cuernavaca,*

<sup>295</sup> Tomo de pruebas remitido en el amparo en revisión 204/2017, relacionado con el presente, foja 3

Morelos, en la casa de mi hermana, íbamos a cenar cuando afuera gritaron que va una revisión y entró la marina, entraron sin identificarse sin ninguna orden de cateo y sin orden de aprehensión, nos sacaron, ellos empezaron adentro a tirar todas las cosas y mi hermana le preguntaba que qué buscaban, ellos decían que buscaban armas pero no tenía, me preguntaron que de dónde era, les dije que era de Cocula. Guerrero, y entonces ellos me agarraron y me llevaron hacia la camioneta, me empezaron a decir que dónde estaban los estudiantes, yo les dije que yo no sabía, me contestaron cómo de que no hijo de tu puta madre si tú eres de haya (sic), les contesté que no por ser de Cocula, tenía que haber sido yo el de los hechos, me esposaron, me vendaron los ojos y me empezaron a dar bolsa, de ahí que me tenían que presentar a un M.P. y que me tenían que echar culpa, les dije que yo no quería que porque yo no sabía nada de eso y que yo me había dirigido a Cuernavaca a buscar trabajo, porque mi señora ya se iba a aliviar, entonces agarraron y me subieron a un Jeep rojo, me dijeron que ahora sí me iba a cargar la verga, de ahí no sé a dónde me hayan trasladado escuché que había dicho que me llevaban a una vereda, de ahí me bajaron y me aventaron contra el suelo, se subió (sic) de la marina en mi pecho y otro me agarraba los pies,



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

mientras otro me pisaba la cabeza, de ahí me decía que yo tenía que decir que yo conocía unos señores, traían una lista, y que les tenía que aceptar el trato que ellos me iban a proponer, que si yo no llegaba a aceptar iban a matar e (sic) mi familia, entonces yo les dije que no que no lo hicieran y que no iba a aceptar su trato, me empezaron a dar bolsa a darme toques eléctricos y golpes en los genitales, de ahí hasta que me dijeron pues que si no aceptaba su trato no me iban a dejar de golpear, me decían también que ya tenía ubicada a mi señora, que la iban a violar y que le iban a tumbar la criatura que traía y ya me siguieron torturando ya no aguanté la tortura y acepté el trato que de todos modos aunque la aceptara se iban a traer a mi familia conmigo, me empezaron a enseñar fotografías de personas que yo no conozco, de ahí me enseñaron una lista con apodos que me la tenía que a prender, de ahí uno de los de la marina me empezaba a preguntar lo de los apodos que si ya me los había aprendido, cada vez que yo fallaba un apodo me daban un golpe en la cabeza o me daban un chicharrazo, de ahí me subieron otra vez al Jeep, me trasladaron a un lugar que desconozco, solo sé que un señor se me acercó y me dijo si ya te aprendiste lo que tienes que decir ahorita me lo vas a decir, que si no de todos modos ya tenían a mi familia ahí

*con ellos. de ahí me llevaron hacia una mesa y me pusieron fotografías. de ahí me dijo que estos eran por apodos los que tenía que describir. como no me los aprendía me pusieron a firmar hojas en blanco yo les dije que no y me golpearon. de ahí me siguieron torturando y me siguieron dando golpes, hasta que firmé, de ahí fue cuando me trasladaron a la SEIDO. al entrar había un señor que me dijo que sí ya me había aprendido lo que me habían dicho porque ya lo tenía que decir ante los medios, nunca me dijeron que tenía que declarar, y que me llevaban hojas sin dejarme leerlas a mí de la hora de mi detención fue a las diez de la noche domingo. y me entregaron a la una de la tarde en la SEIDO..."*

738. De lo que se obtiene que dicho declarante atribuyó los actos de tortura a los elementos de la Marina. pero también asevera que le dijeron lo que tenía que declarar. y como no se lo aprendía, lo hicieron firmar hojas en blanco, e incluso señala que al llegar a las oficinas de la SEIDO, le preguntaron si ya se había aprendido lo que le habían dicho.

739 Como se ve, de acuerdo a las mencionadas alegaciones sobre los actos de tortura. ese tratamiento se habría extendido a las oficinas de SEIDO, o al menos habría sido conocido y consentido por su personal.



740. A lo anterior se suma que, como se vio, de los veintiún medios de prueba en que se apoyó la autoridad responsable para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, diecinueve son declaraciones, de las que dieciséis contienen autoincriminaciones, y tres no admiten los hechos criminosos, pero formulan imputaciones contra otros coimputados.

741. Es decir, se está ante una situación sumamente inusual, en la que casi toda persona que es detenida o localizada y presentada en relación con la averiguación previa, "espontáneamente" reconoce su participación, o al menos, formula imputaciones contra otros coimputados.

742. Pero destaca que de los declarantes sobre los que se cuenta con las constancias sobre su integridad física<sup>296</sup>, se aprecian lesiones, y también una demora en la puesta a disposición.

743. Respecto a las lesiones, se aprecia que éstas se registran:

- Desde su arribo a las instalaciones ministeriales, en los casos de [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

<sup>296</sup> Respecto a los declarantes 4 al 11, en autos no obran las constancias relativas a su integridad física, ni sobre la oportunidad en su puesta a disposición.

[REDACTED]

(declarantes 1, 2, 5, 6 y 20).

- Una vez que son puestos a disposición de la SEIDO, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

(declarante 3, 16, 17 y 19), pues previamente habrían sido dictaminados sin lesiones.

- Desde su llegada a las instalaciones ministeriales, pero además, se incrementan mientras se encuentran a disposición de la SEIDO, en los casos de [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 14-15, 18 y 21).

744. Tales circunstancias, de que la mayoría de las personas examinadas termine aceptando los hechos que se les atribuyen, y quienes no lo hacen, formulen imputaciones a otros coacusados; amerita un cuidadoso análisis, pues no resulta explicable que prácticamente todos ellos, a pesar de tener derecho a no declarar o no autoincriminarse, terminen



haciéndolo y aceptando los hechos que se les atribuyen.

745. Además, como se vio, muchos fueron presentados con demora ante el Ministerio Público, y en algunos casos, se insiste, una vez que estuvieron bajo custodia de la SEIDO, existen dictámenes médicos que constatan el deterioro de su integridad física.

746. La única persona que no aceptó los hechos en su primera declaración, fue [REDACTED] [REDACTED] sin embargo, luego fue nuevamente sujeto a una nueva "ampliación de declaración", diligencia que ni él ni su defensa solicitaron.

747. Peor aún, en la nueva declaración, no estuvo presente el defensor que previamente había designado, y al respecto, como se vio, la autoridad ministerial sólo indicó que el abogado no había podido comparecer, pero no justificó que le hubiera notificado en torno a la realización de la diligencia, y tampoco se acreditó en autos la alegada imposibilidad de asistir por parte de su defensor.

748. Con tal proceder, se violentó gravemente su derecho fundamental a una defensa adecuada, pues en diligencia previa ya había designado un defensor, y no presentó algún escrito en el que manifestara su intención de

revocarlo, por lo que no resulta ajustado a derecho que se le hubiera designado un distinto abogado, máxime que, se insiste, no se acreditó que su patrocinador tuviera alguna imposibilidad para acudir a la ampliación de declaración

749.        Motivos por los que se estima que deberá analizarse si se respetó el derecho fundamental a una adecuada defensa, pues como se vio, se suscitaron aspectos sumamente inusuales, tales como confesiones espontáneas, que no encuentran explicaciones razonables.

750.        Así es, en algunos casos, a pesar de que las detenciones ocurren por la portación de armas o posesión de narcóticos, los indiciados "espontáneamente" deciden declarar sobre hechos distintos, como lo es lo relativo a lo supuestamente ocurrido a los estudiantes hoy desaparecidos.

751.        Llama la atención que se asiente en autos que sostuvieron una entrevista previa con sus defensores, pues no resulta razonable que sus patrocinadores les hubieran dejado de advertir o aconsejar, en su caso, sobre la legítima posibilidad de apegarse a su derecho a no declarar

752.        Además, como se vio, no se trata de casos aislados, sino como se vio, de los veintiún medios de prueba en que se apoyó la autoridad





responsable para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, diecinueve son declaraciones, de las que dieciséis contienen autoincriminaciones, y tres no admiten los hechos criminosos, pero formulan imputaciones contra otros coimputados.

753. Aunado a lo anterior, la mayoría de ellos presentó lesiones, en las circunstancias antes descritas, sin que se aprecie que se hubieran planteado argumentos para evidenciar o denunciar tales situaciones.

754. Tampoco se advierte que se hayan formulado alegatos respecto a los retardos en la puesta a disposición o en las presentaciones, ni en la circunstancia de que éstas, hubieran rebasado los términos para los que se dictaron, pues en lugar de recabar las declaraciones de las personas, se les dictó auto de retención.

755. Sobre el particular, el 5 de octubre de 2015, al resolver el **Caso Ruano Torres y otros contra El Salvador**, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló:

*"164. En atención a lo anterior, la Corte considera que, para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó*

*una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. En esta línea, la Corte procederá a realizar un análisis de la integralidad de los procedimientos, a menos que determinada acción u omisión sea de tal gravedad como para configurar por sí sola una violación a la garantía.*

*[...]*

166. Además, es pertinente precisar que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, como se mencionó, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia la anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas:

- a) No desplegar una mínima actividad probatoria.*
- b) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado.*
- c) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal.*



- d) *Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado.*
- e) *Indebida fundamentación de los recursos interpuestos.*
- f) *Abandono de la defensa."*

756. Por tanto, deberá considerarse si se suscitó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta, en el proceder de los defensores.

757. Del mismo modo, llama la atención que en la posibilidad de realizar una llamada telefónica se haya satisfecho una vez concluidas las respectivas declaraciones ministeriales.

758. Al respecto, el 7 de septiembre de 2004, al resolver el **Caso Tibi contra Ecuador**, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó la importancia de que se permita a la persona detenida, antes de rendir su primera declaración, establecer contacto con una tercera persona, como un familiar, un abogado.

759. Al respecto, en dicho fallo, se indicó:

"112. Por otra parte, el detenido, al momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. La notificación a un familiar o allegado

*tiene particular relevancia, a efectos de que éste conozca el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda proveerle la asistencia y protección debidas. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse de una verdadera defensa. En el caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul "podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión" Esto no ocurrió en el presente caso."*

760. Así es, en el presente caso, se hizo constar que se permitió a los detenidos efectuar una llamada telefónica, pero hasta que concluyeron sus respectivas declaraciones ministeriales, con lo que se imposibilitó el acceso a un abogado diverso a los asignados por la propia institución ministerial

761. Todas estas circunstancias dan cuenta de que se está ante un **cuadro manifiesto de graves irregularidades**, muchas de ellas, ocurridas cuando los detenidos se encontraban



ya a disposición de la autoridad ministerial, en concreto, de la **Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO)**.

762. Ahora, en relación a la independencia de quienes practican la pericial médica psicológica, el Protocolo de Estambul, señala lo siguiente:

75. Cuando los procedimientos de investigación sean inadecuados por falta de recursos o de pericia, falta de imparcialidad, un cuadro manifiesto de abusos u otras razones sustanciales, los Estados procederán a las investigaciones valiéndose de una comisión de indagación independiente o algún otro procedimiento similar. Los miembros de esa comisión serán seleccionados a título personal por su imparcialidad, competencia e independencia reconocidas.

En particular, deberán ser independientes de toda institución, agencia o persona que pueda ser objeto de la indagación.

[...]

79. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y eficacia las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá

*iniciarse una investigación si existen otros indicios de eventuales torturas o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional, y sus conclusiones se harán públicas." (Lo resaltado no es de origen).*

763. Como se ve, la imparcialidad conlleva que los investigadores sean independientes de los presuntos autores de los actos de tortura, y del organismo a que éstos pertenezcan.

764 En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además, se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha unidad.

765. Es decir, además de los indicios que se extraen de dichas alegaciones de tortura, también existen otros indicios que se desprenden de los propios dictámenes médicos,



que dan cuenta de la alteración que presenta la integridad física de los detenidos.

766. Ahora, si la SEIDO pertenece a la Procuraduría General de la República, entonces, la práctica de la pericial conforme al Protocolo de Estambul, no podía encomendarse a expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales, pues este organismo también pertenece a la referida Procuraduría.

767. Al no advertir lo anterior, se dejaron de satisfacer los inexcusables requisitos de la **independencia e imparcialidad**, a que se refiere el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que reconocen tanto la jurisprudencia nacional como la interamericana.

768. Corroborar lo expuesto, la circunstancia de que, como lo informó el juez de la causa<sup>297</sup>, el quejoso [REDACTED], al igual que [REDACTED], manifestaron que no deseaban que la Procuraduría General de la República practicara esos dictámenes; y en el caso de [REDACTED], no otorgó su

<sup>297</sup> Mediante oficio 2013/2018-3-II, visible a foja 69 del cuaderno de revisión.

consentimiento para ser examinado por un perito psicólogo de dicha institución.

769. Pues bien, tal situación debió ser advertida tanto por el juez de la causa, como por el Magistrado responsable, y congruente con ello, se hacía indispensable que se ordenara el cese de la asignación encomendada a los peritos de la Procuraduría General de la República, para dar paso a la intervención de especialistas totalmente independientes a dicha institución, así como de cualquier otra corporación policiaca o ministerial.

770. Al haberse inadvertido lo anterior, se transgredieron los derechos fundamentales del quejoso.

771. En reparación a lo anterior, debe concederse el amparo, a fin de ordenar se lleven a cabo las acciones que se precisarán más adelante.

772. No obstante, cabe precisar desde este momento, que dado el contexto de la violación a los derechos fundamentales, y su naturaleza, incluso será necesario que el Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, **ordene al Juez de Distrito reponer el procedimiento de la preinstrucción, de modo que se deje insubsistente todo lo actuado con**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

posterioridad a la declaración preparatoria  
del quejoso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], y  
ordene la suspensión del plazo constitucional, a  
fin de que el agente del Ministerio Público de la  
Federación, en un término no mayor a diez días  
naturales, contado a partir de la notificación a la  
Fiscalía adscrita al Juzgado de Distrito,  
presente un dictamen médico psicológico,  
practicado conforme al Protocolo de Estambul,  
esto es, que cumpla cabalmente con las  
exigencias y lineamientos ahí establecidos.

773. Cabe precisar que existen varios  
supuestos en los que se justifica la suspensión  
del procedimiento de la preinstrucción, y se  
considera que en el caso que nos ocupa se dan  
condiciones que también ameritan tal proceder.

774. Entre esos supuestos, se da aquel en el  
que la persona no ha quedado formal y  
materialmente a disposición del juez, para que  
se recabe su declaración preparatoria, por estar  
internado en un lugar de reclusión diverso al de  
la residencia del juzgador.

775. Sobre ese tema, es ilustrativa la **tesis 1a.  
CI/2001**, emitida por la Primera Sala de la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible  
en el Semanario Judicial de la Federación, bajo  
el **Registro 188294**, que es del rubro siguiente:

**"AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. SU CÓMPUTO INICIA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PONE AL INCUPLADO, FORMAL Y MATERIALMENTE, A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN QUE SE UBIQUE EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE ÉSTA."**

776. Otro supuesto se da cuando el indiciado se encuentra imposibilitado por algún motivo, para rendir su declaración preparatoria.

777. Es aplicable al respecto la **tesis I.2o.P.127 P**, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 174339**, que es del contenido siguiente:

**"SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL. DEBE ORDENARSE SI EL INDICIADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA RENDIR DECLARACIÓN PREPARATORIA.**

*Aunque si bien es verdad el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no contiene precepto alguno que disponga la suspensión del procedimiento en el caso en que exista imposibilidad material para el desahogo de la declaración preparatoria del indiciado, procede tal medida suspensiva hasta en tanto desaparezca la causa que la origine a fin de que en su oportunidad se recabe ésta con las formalidades legales y hecho lo anterior, se resuelva la situación jurídica de aquél, pues'to que de dictar la formal prisión, sin desahogar tal diligencia, se violan las formalidades esenciales que rigen el procedimiento de preinstrucción, cuya infracción afecta las defensas del justiciable, así como se vulnera su garantía de*



*seguridad jurídica, contenida en la fracción III del apartado A del numeral 20 y las del párrafo segundo del artículo 19, ambos constitucionales."*

778. En este asunto, la teoría del caso de la Fiscalía se sustenta preponderantemente en declaraciones autoincriminatorias, y como se vio, en gran parte de las pruebas tomadas en cuenta en la emisión del acto reclamado, se advierte la existencia de lesiones en los declarantes, además de diversas irregularidades que ya fueron destacadas en su oportunidad.

779. Dichas situaciones dan pie a justificar que en casos como el presente, se suspenda el plazo constitucional, a fin de que, mediante el desahogo de las pruebas pertinentes, se tenga la certeza de que las declaraciones autoincriminatorias no fueron arrancadas a base de tortura.

780. Es decir, no se trata de invalidar las declaraciones en automático, por el hecho de que los declarantes presenten lesiones, pero sí debe buscarse un mecanismo para cerciorarse de que no se haya suscitado tortura, tomando en cuenta que no sólo se da la existencia de dichas lesiones, sino de diversas irregularidades en la investigación ministerial, como previamente se destacó.

LOS  
IADO  
JITO  
IPAS

781. Ahora, como es al Ministerio Público a quien corresponde acreditar que no existió alguna situación de tortura, entonces debe exigírsele a la Fiscalía tal demostración, bajo pena de que se presuma que las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.

782. No obstante, para ello debe dársele a la Fiscalía un plazo de al menos diez días naturales, para que presente un dictamen practicado de forma independiente, imparcial y minuciosa.

783. Es importante señalar que de acuerdo al referido protocolo, en el presente caso, el dictamen deberá ser elaborado por profesionales independientes de la Procuraduría General de la República, y desde luego, cumplir con los extremos y exigencias que prevé dicho instrumento.

784. El aludido dictamen deberá ser practicado a todas aquellas personas cuya integridad física presente alteración y cuyas declaraciones fueron empleadas en la emisión del acto reclamado.

785. Para mayor claridad, se especifica que el dictamen que deberán practicar los profesionales independientes, deberá ocuparse de: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 1), [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED].



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

[REDACTED] (declarante 2), [REDACTED]  
[REDACTED]  
(declarante 5), [REDACTED]  
[REDACTED] (declarante 3), [REDACTED]  
[REDACTED]  
(declarante 6), [REDACTED]  
[REDACTED] (declarante 14-15), [REDACTED]  
[REDACTED] declarante 16),  
[REDACTED]  
(declarante 19), [REDACTED]  
[REDACTED] (declarante 17), [REDACTED]  
[REDACTED] (declarante 18),  
[REDACTED] z [REDACTED] z [REDACTED] declarante 21), e  
[REDACTED] (declarante 20).

OS  
ADD  
JTO  
PAS.

786. No pasa inadvertido que a dichas personas no les asiste el carácter de quejosos dentro del presente amparo en revisión; sin embargo, ello no constituye impedimento alguno para que se emprendan las acciones necesarias para el esclarecimiento sobre la existencia o no de los actos de tortura, máxime, que sus declaraciones fueron tomadas en cuenta en la emisión del acto reclamado por el quejoso [REDACTED]  
[REDACTED] por lo que de modo alguno se trastoca el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo.

787. Es aplicable al respecto, por similitud de la hipótesis que se aborda, la tesis I.7o.P.62 P

(10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2013911**, que es del contenido siguiente.

**“ACTOS DE TORTURA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO AL QUEJOSO QUE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ORDENA LA INVESTIGACIÓN DE AQUÉLLOS A FIN DE DESCARTAR O ESTABLECER SU EXISTENCIA, EN RELACIÓN CON SU COINCULPADO, QUIEN REFIRIÓ HABERLOS SUFRIDO Y LO INCRIMINÓ EN LOS HECHOS DELICTIVOS POR LOS QUE FUE SENTENCIADO.** Al advertirse que el coinculpado del quejoso quien lo incriminó en los hechos delictivos por los que fue sentenciado, refirió ser víctima de tortura, ya que fue amenazado psicológicamente para declarar en su contra, lo que motiva que se ordene la investigación de tales actos, a fin de descartar o establecer su existencia, pues trascenderá al resultado del fallo respecto del impetrante, ya que fue considerada una declaración rendida por el coacusado que posiblemente fue obtenida mediante actos de tortura; entonces, debe concederse la protección constitucional para el efecto de que la responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia y **ordene reponer el procedimiento de primera instancia, a fin de que el Juez de la causa invalide su determinación de cierre de instrucción, con el objeto de que exija la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos**



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*vinculados con la tortura alegada por el coinculpado del quejoso, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva en relación con el quejoso, para determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico, en la eficacia de la testimonial de los agentes captores señalados como perpetradores de esas conductas violatorias de los derechos humanos y, en su caso, del depuesto del propio justiciable si se hubiese emitido con motivo de la tortura que dijo haber sufrido, pues la respuesta dependería del resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con el acto de tortura denunciado; 3. Instruya al Juez del conocimiento dar vista al agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa a fin de determinar si se acredita el acto de tortura cometido en agravio del coinculpado del quejoso, pues este aspecto es autónomo al que realizará el Juez; y, 4. Con las restantes pruebas que no resultaron afectadas de nulidad, determine fundada y motivadamente, si se encuentra acreditada la materialidad del delito que se imputa al quejoso y la plena responsabilidad en su comisión; resolución que podrá ser en el mismo sentido que la anterior, o bien, en uno diverso si así lo considera, en el entendido de que no deberá agravar las penas impuestas." (Lo resaltado no es de origen).*

DS  
ADO  
ITO  
PAS

788. Expuesto lo anterior, una vez que el juez de la causa reciba todos esos dictámenes, podrá reanudar el plazo constitucional, en el entendido de que hasta el momento del desahogo de la declaración preparatoria, se habían consumido **dos horas con cincuenta**

**minutos**<sup>298</sup>, por lo que al término constitucional le restarán **sesenta y nueve horas con diez minutos**.

789. Cabe precisar que si pasados diez días naturales, aún no se reciben las periciales practicadas conforme al Protocolo de Estambul entonces deberá levantarse la suspensión del procedimiento, y proseguir con la secuela de la preinstrucción.

790. En la inteligencia de que, al resolver la situación jurídica, de no haberse presentado los dictámenes practicados conforme al Protocolo de Estambul, tendrá que partirse de la base de que, como recae en el Ministerio Público la carga de la prueba de que dichas personas no fueron torturadas, entonces, al no aportarse los dictámenes correspondientes, deberá concluirse que sus declaraciones fueron emitidas bajo tortura.

791. De presentarse los dictámenes, deberán valorarse con libertad de jurisdicción, y al efecto, habrá de tomarse en cuenta no sólo las conclusiones, sino que será necesario que se analice su metodología y consideraciones, a fin de determinar si se han satisfecho o no as

<sup>298</sup> De acuerdo al acta visible en el tomo 78 a fojas de la 597 a 604 la declaración preparatoria in oio a las once horas del dieciocho de abril de dos mil quince, y en ese mismo momento se levantó la suspensión del procedimiento en tanto que la diligencia concluyó a las trece horas con cincuenta minutos del mismo día.





exigencias que prevé el referido Protocolo de Estambul.

792. Es importante señalar que ciertamente, la suspensión del plazo constitucional, implica un desfase temporal en la resolución de la situación jurídica del quejoso.

793. Sin embargo, además del derecho fundamental a una justicia pronta, que atañe a todas las partes; para el propio quejoso es de especial importancia que se observe su derecho fundamental a una adecuada defensa; y, para todos, es de suma trascendencia la observancia del debido proceso.

794. Es aplicable al respecto la tesis 2a. LXV/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 178190, que es del contenido siguiente:

**"JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA.** Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una **administración de justicia pronta, como lo**

*manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones.” (Lo resaltado no es de origen).*

795. También debe aclararse que no se ordena la práctica del referido dictamen al quejoso [REDACTED] el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], porque al menos de los autos que obran hasta la preinstrucción del presente asunto, no se incluye alguna declaración autoincriminatoria, ya que en la etapa de la averiguación previa no se advierte que hubiera intervenido, y ante el Juez de Distrito se acogió al derecho que tiene de no declarar.

796. Es aplicable al respecto la **jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.)**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2015603**, que es del contenido siguiente:

**“TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS**



PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO.** En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: 'ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.', se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de

IS  
DO  
TO  
AS

*excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación inculminatoria del inculcado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos."*

797. ► Vinculado a lo anterior, no puede dejar de tomarse en cuenta en el caso, que derivado de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes, es incuestionable la lesión a su derecho humano a la libertad, y desde luego, resulta muy probable la afectación a su integridad física, y otros derechos fundamentales conexos.

798 No pasa inadvertida la jurisprudencia P./J 5/2016 (10a.), de rubro **"DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL**



PODERE JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.”**, en la que se indica que no es factible analizar violaciones que no forman parte de la litis constitucional.

799. No obstante, se estima que en el caso, como al ejercer acción penal, la autoridad ministerial involucró el tema de la desaparición de los estudiantes, entonces esto último forma parte de los aspectos que deben ser analizados, más aun cuando el tribunal unitario de amparo, al dictar la sentencia que aquí se revisa, incorporó la temática de las víctimas.

OS  
ADO  
ITO  
PAS

800. Lo anterior obliga a visualizar los derechos que les asiste a quienes ya se les reconoció el carácter de víctimas en esta ejecutoria.

801. Al respecto, es necesario acudir al texto del artículo 20 constitucional, apartado B, en su redacción aplicable al presente caso, que señala lo siguiente:

**“Artículo 20.** En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

**B. De la víctima o del ofendido.**

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos



casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

*VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio."*

802. Como se ve, hay derechos que están enfocados para la etapa de averiguación previa, y otros para el proceso penal, pero también hay derechos que atañen a ambas etapas.

803. Por lo tanto, en la fase del proceso penal, es necesario que el juez de la causa dé la intervención que corresponde a quienes ya se ha reconocido el carácter de víctimas, o bien, a quienes se les reconoció en esta ejecutoria, en la inteligencia de que su actividad no necesariamente se desplegará por conducto del Ministerio Público, sino que podrán actuar en su calidad de parte autónoma.

804. Por esos motivos, tomando en cuenta que como se precisó previamente, la autoridad responsable debe ordenar al Juez de Distrito la reposición del procedimiento, entonces resulta pertinente que a las víctimas se les notifique, para que estén en posibilidad de acudir a la propia etapa de preinstrucción, intervenir, ofrecer pruebas y en general, hacer valer lo que a su derecho convenga.

805. Así, toda aquella persona a la que ya se le haya reconocido la calidad de víctima en

la propia averiguación previa, deberá ser notificada.

806. Del mismo modo, **por también asistirles la calidad de víctimas**, como se dijo ampliamente en el considerando cuarto de esta ejecutoria, deberán quedar notificados **los familiares de los normalistas desaparecidos, de las seis personas fallecidas, así como de quienes resultaron con lesiones de tal gravedad**, que no sea posible que acudan por sí mismos al procedimiento.

807. A las **demás personas lesionadas también les reviste el carácter de víctimas**, por lo que también debe notificárseles, para que estén en aptitud de comparecer al procedimiento, desde la etapa de preinstrucción.

808. De igual manera, si el Juez de Distrito advierte que **a alguna otra persona, no contemplada previamente** en esta ejecutoria, le asistiera la calidad de víctima, también deberá notificarlo, para que se integre al procedimiento, desde la preinstrucción.

809. Por tal motivo, el Juez de Distrito deberá tomar las medidas pertinentes, a fin de ubicar a las referidas víctimas o bien a sus representantes legales, para lo cual si en los autos que integran la causa penal, no encuentra





la información suficiente, podrá incluso considerar las constancias de diversos expedientes relacionados con el presente, que ante él se tramiten; o bien, girar los oficios que estime pertinentes, por ejemplo, al Ministerio Público que actualmente se encuentra a cargo de la indagatoria, o a los demás Juzgados ante quienes se instruya diversa causa penal, vinculada a los mismos hechos.

810. Tales gestiones podrán realizarse incluso cuando el plazo constitucional se encuentre suspendido, con la finalidad de que, llegado el momento, al reanudarse el término constitucional, las víctimas ya se encuentren en aptitud de participar en el procedimiento, si lo consideran pertinente.

811. Sin embargo, en el supuesto de que no sea posible la notificación, o incluso la ubicación de la totalidad de las víctimas, ello no deberá ser obstáculo para la reanudación del plazo constitucional, una vez transcurridos los diez días naturales a que se aludió con anterioridad (para que el Ministerio Público entregue los dictámenes periciales conforme al Protocolo de Estambul).

812. De ese modo, una vez resuelta la situación jurídica, si alguna de las víctimas aún no es

notificada, deberán realizarse las gestiones conducentes para lograrlo.

813. En el escenario de que la preinstrucción se resuelva con el dictado de un auto de formal prisión, se entenderá que la notificación tiene como efecto que la víctima se incorpore al procedimiento desde la fase de la instrucción, para que esté en aptitud de ejercer sus derechos.

814. Por el contrario, si el auto de término constitucional fuera un auto de libertad, éste no quedará firme, hasta en tanto todas las víctimas queden notificadas de dicha resolución, a fin de respetar la posibilidad de que la impugnen, mediante el recurso correspondiente.

815. ► Por otro lado en cuanto a la etapa de la averiguación previa, la intervención de la víctima guarda estrecha relación con los actos de investigación que realiza el Ministerio Público.

816. Entonces de acuerdo al texto constitucional, las víctimas tienen derecho a participar activamente en la investigación, tan es así que se destaca no sólo su derecho a coadyuvar, sino también a ofrecer pruebas, a que éstas sean recibidas, y desahogadas; e incluso la negativa de admitirlas debe en su caso ser fundada y motivada por el Ministerio



Público; de mismo modo, tienen derecho a recibir asesoría jurídica, ser informados del desarrollo del proceso penal; recibir atención médica, psicológica, medidas para su seguridad y auxilio; así como a la reparación del daño.

817. Además de lo anterior, la Corte Interamericana ha puntualizado el deber del Estado de investigar toda situación relativa a la violación de derechos humanos que protege la Convención Americana. Así se desprende de la sentencia de 16 de noviembre de 2009, dictada en el **Caso González y otras ("Campo Algodonero") contra México**, en la que sostuvo lo siguiente:

*"... 288. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía:*

*[el] Estado está [...] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o*

grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

289. **El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.** La obligación del Estado de investigar **debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.** En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.

290. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben **iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva** por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

291. De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene **'cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares,**



*pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado'." (Lo resaltado no es de origen).*

818. En similares términos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, a fin de garantizar el goce de los derechos humanos.

819. Así se desprende de la tesis 1a. CCCXLI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2010421, que es del contenido siguiente:

**"DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL HECHO.** De la obligación general de garantía de los derechos humanos deriva la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que las autoridades tengan conocimiento del hecho. El alcance del deber de investigar es parte del deber de garantía de las normas sustantivas violadas con un hecho en particular, como parte del derecho a las garantías y protección judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a violaciones de

OS  
ADO  
JITO  
PAS

*derechos humanos. Estos recursos deben sustanciarse con base en las garantías de debido proceso. Esta Primera Sala destaca que, en el marco de la obligación de garantía, se debe llevar a cabo la investigación de las alegadas violaciones a los derechos humanos con la finalidad de evitar la impunidad y restablecer, en la medida de lo posible, la plenitud de los derechos humanos."*

820. En el caso concreto, es evidente la violación a los derechos humanos de los estudiantes desaparecidos, y esa sola circunstancia conllevaría la obligación del Estado, de emprender la investigación correspondiente

821. Pero además de lo anterior, de acuerdo a la teoría del caso sostenida por la propia Fiscalía, en la afectación de los estudiantes hoy desaparecidos, hubo participación de elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como de Cocula.

822. Entonces, no sólo se está frente a un caso de violación a los derechos humanos, sino además, de desaparición forzada de personas.

823. El artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, establece lo siguiente:

***"Artículo 12***



1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.

LOS  
ESTADOS  
UNIDOS  
MEXICANOS  
PAS

2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo:

a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la

documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;

b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.

4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación."

824. Como se ve, ante una denuncia, o la mera sospecha de que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada debe emprenderse sin demora una investigación exhaustiva e imparcial.

825. Al efecto, en la sentencia de 23 de noviembre de 2009, dictada en el **Caso Radilla**





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Pacheco contra México**, el tribunal interamericano señaló lo siguiente:

"116 [...] En este sentido, la Corte observa que para resolver los distintos casos sometidos a su conocimiento ha requerido tomar en cuenta el contexto, pues el entorno político e histórico es determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso, comprendiendo tanto la naturaleza de las violaciones a la Convención como las correspondientes reparaciones. Por esta razón, **el análisis de la supuesta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no puede aislarse del medio en el que dichos hechos supuestamente ocurrieron**, ni se pueden determinar las consecuencias jurídicas respectivas en el vacío propio de la descontextualización, en tanto existen alegatos conforme a los cuales la presunta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no se produjo como un caso aislado en México.

[...]

138. Como se mencionó en el capítulo sobre excepciones preliminares de la presente Sentencia, **el fenómeno de la desaparición forzada de personas requiere de un análisis sistémico y comprensivo**, por lo cual este Tribunal considera adecuado reiterar el fundamento jurídico que sustenta la necesidad

OS  
ADP  
ITO  
PAS

de una perspectiva integral de la desaparición forzada en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos protegidos por la Convención.

139. En el derecho internacional la jurisprudencia de este Tribunal ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de la desaparición forzada de personas. La Corte ha reiterado que ésta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano, y su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.

143. En definitiva, **toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación.** Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de



desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. Esto es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Sin perjuicio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente. La obligación de investigar persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos.

[...] 146. En tal sentido, el análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribunal en el presente caso. Sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de **considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias**, teniendo en cuenta el corpus

OS  
ADD  
ITO  
PAS

*juris de protección tanto interamericano como internacional.* (Lo resaltado no es de origen)

826. Pues bien, de ambas condenas impuestas al Estado Mexicano, se sigue que:

**1) Toda situación relativa a la violación de derechos humanos que protege la Convención Americana, debe ser investigada por el Estado**

**2) Siempre que haya motivos para considerar que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada, debe iniciarse una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva; y**

**3) La investigación debe extenderse al contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de enfocar integralmente sus consecuencias.**

827. Entonces, el Estado mexicano ya ha sido condenado anteriormente, derivado de la ausencia de investigación en casos de violación a los derechos humanos, y además, específicamente en tratándose de asuntos que involucran la desaparición forzada de personas, se ha resaltado la necesidad de que tal investigación sea oficiosa, sin dilación, seria, imparcial y efectiva.

828. Tales precedentes obligan a este tribunal colegiado a emprender un análisis sobre la



actuación de la autoridad ministerial, en la búsqueda de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos.

829. Al efecto, como se vio, el fenómeno de la desaparición forzada de personas exige un análisis sistémico, de modo que no debe desfragmentarse la investigación, en relación a los hechos que conforman su contexto integral.

830. Sobre ese punto, resulta ilustrativo el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, en el que se alude a los escenarios de los diferentes ataques sucedidos en Iguala, Guerrero, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en los términos siguientes<sup>299</sup>:

**"[...] 3. Escenarios de los diferentes ataques: actuación coordinada y compleja**

*Como ha sido señalado, los ataques y persecución que se dieron esa noche fueron al menos nueve en distintos lugares y momentos, y algunos de ellos se prolongaron en el tiempo. Los distintos ataques directos fueron:*

*1. Escenario de la calle Galeana, persecución policial con disparos primero al aire y luego contra los autobuses y normalistas que tratan de salir de la ciudad. 21:30 h del día 26 de septiembre de 2014.*

<sup>299</sup> Páginas 314 y 315 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI.

2. Cruce entre Juan N Álvarez / Periférico norte. Con cierre de las calles por patrullas policiales en una distancia corta, con concentración de 3 autobuses (dos Costa Line y un Estrella de Oro) y unos 70 normalistas que se encuentran entre dos fuegos de al menos diez patrullas policiales delante y detrás de los autobuses, con participación de policías de Iguala y de Cocula. En dicho escenario se atacó de manera indiscriminada a normalistas que trataban de mover una patrulla para poder salir, hiriendo de extrema gravedad a un normalista y a otros dos de forma grave. Del tercer autobús, [REDACTED] fueron detenidos y posteriormente desaparecidos cerca de 25 normalistas. La acción duró de las 21:45 a las 22:40 h aproximadamente. El informe de balística señala que en este caso los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.

3. Salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Un autobús, [REDACTED] normalistas es detenido y destrozado por policías municipales de Iguala, y sus ocupantes golpeados, obligados a bajar del bus, detenidos y desaparecidos posteriormente. Según un testigo se disparó contra uno de los normalistas. La acción duró aproximadamente 45 min-1 h, desde las 21:40 h del día 26, es decir en un



POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

escenario simultáneo al ataque en Juan N. Álvarez y Periférico norte.

4. Salida de Iguala a Chilpancingo, un poco antes del Palacio de Justicia. Un autobús, Estrella Roja que había sido tomado por un grupo de 14 normalistas es detenido y sus ocupantes amenazados por la policía que no llega a disparar. Posteriormente son perseguidos hasta que se esconden en un cerro, y una hora después nuevamente son perseguidos cuando tratan de bajar a la carretera. Los hechos se dan entre las 22:00 y las 23:00 h del día 26.

5. Ataque contra autobús, de Los Avispones, en el cruce de Santa Teresa, a 15 km de Iguala en la carretera a Chilpancingo y contra varios vehículos más. Resultan muertos dos ocupantes, al menos cuatro heridos muy graves, y varios heridos graves. Otra mujer resulta muerta, y varios ocupantes de dos taxis heridos. Aproximadamente se dio a las 23:30 h del día 26. El informe de balística señala que los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.

6. Después, en un segundo ataque en el mismo lugar, otro taxi y un camión son baleados produciéndose varios heridos de gravedad. A las 23:40 h del día 26.

7. Carretera de entrada a Iguala y Periférico persecución de normalistas hasta

DOS  
HADO  
UITO  
IPAS

Colonia 24 de febrero Un grupo de 14 normalistas es perseguido en la noche cuando tratan de agruparse con sus compañeros, y son objeto de intentos de atropellamiento, amenazas, pedradas y disparos hasta que se esconden en una casa (10 normalistas) y un cerro (4 normalistas) Se da entre las 23:15-24:00 h del día 26.

8. Ataque en Juan N. Álvarez y Periférico norte contra rueda de prensa de normalistas donde hay periodistas y maestros que llegaron a apoyar a los estudiantes. Tiempo antes, patrullaje de policía municipal y de protección civil. **Dos normalistas resultan muertos por disparos a quemarropa**, un herido grave que se refugia en la clínica "████████████████████" junto con 24 normalistas y un maestro, pasando casi 1:45 h desde el ataque hasta ser trasladado para ser atendido en el hospital de Iguala. El ataque se dio a las 00.30 h del día 27. **Otras personas** que fueron a atender a los normalistas **resultan heridas**, y las ráfagas suponen un ataque directo contra la vida de muchas personas más que se encontraban presentes.

9. **Muerte de un normalista que es torturado y ejecutado** en el escenario del camino del Andariego, en la Zona Industrial de Iguala. El hecho se dio en las horas de la madrugada, probablemente entre 01:00 y 02:00 h am del día 27." (Lo resaltado no es de origen).





831. Así, una investigación en los términos delineados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, necesariamente debe comprender lo relativo a todos esos escenarios.

832. Precisamente, en el marco de ese análisis integral, se advierte que en el contexto de los lamentables hechos sucedidos en Iguala, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, además de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes, también ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, al menos de seis personas.

833. En efecto, como se señaló previamente, en el cruce Santa Teresa, fueron privados de la vida, el pequeño David Josué García Evangelista, el chofer del camión de los "Avispones de Chilpancingo", señor [REDACTED], así como la pasajera de un taxi, la señora [REDACTED].

834. Mientras que en uno de los ataques perpetrados en Juan N. Álvarez y Periférico norte, perdieron la vida los normalistas [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

835. En tanto que en la zona industrial de Iguala, fue encontrado el cuerpo sin vida del estudiante [REDACTED].

DIOS  
GANDO  
CULTO  
JLIPAS.

836. Al respecto, el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como "Protocolo de Minnesota", adoptado en mil novecientos noventa y uno, por la Organización de las Naciones Unidas<sup>300</sup> considera que se está frente a una ejecución extrajudicial o arbitraria en *"los casos de privación de la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia..."*.

837. Del mismo modo, el mencionado Protocolo de Minnesota, considera que se actualiza el supuesto de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en cualquiera de los siguientes casos:

- *Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.*

- *Muerte como consecuencia de un ataque por agentes del Estado en operaciones militares o policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por el derecho internacional.*

<sup>300</sup> Página 8 del documento disponible en <http://www.hchr.org.co/publicaciones/publicaciones/Libros/protocolo%20de%20minnesota.pdf>



- Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho el deber de garantía del Estado. Si esa privación de la libertad es ilegal se estaría ante un concurso entre una detención arbitraria y el homicidio.

- Muerte como resultado de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, así no aparezca el cuerpo de la víctima o sólo si aparecen algunos de sus restos. En esta situación la ejecución concurre con la desaparición forzada en concurso de delitos entre la desaparición y el homicidio.

- Muerte como resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perpetrada por agentes del Estado. Aquí también se produce otro concurso de delitos entre la tortura y el homicidio."

838. No pasa inadvertido que en dos mil dieciséis, la ONU adoptó el *Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas*, a fin de revisar y actualizar especialmente los aspectos técnicos contenidos en la versión anterior; sin embargo, en la propia presentación de dicho documento<sup>301</sup>, se precisó que el *Protocolo de Minnesota* de mil novecientos noventa y uno,

<sup>301</sup> Disponible en la siguiente liga:

[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol\\_SP.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf)

RECIBIDO  
LEGADO  
RECIBIDO  
JULIAS

seguía constituyendo parte importante de la normatividad jurídica internacional; y que la función de la versión actualizada, era su complementación<sup>302</sup>.

839. Precisado lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando los agentes estatales utilizan la fuerza estatal contra personas que no plantean una amenaza, se constituye una ejecución extrajudicial.

840. Así se desprende de la sentencia de 4 de julio de 2007, dictada en el **Caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador**, en la que el referido tribunal interamericano expuso:

*"108. [...] Bajo los parámetros señalados, en casos en que agentes estatales usen la fuerza letal contra individuos que ya no plantean una amenaza, como por ejemplo individuos que se encuentran bajo custodia de las autoridades, constituiría una ejecución extrajudicial en violación flagrante del artículo 4 de la Convención."*

841. En el caso, de acuerdo al material probatorio que obra en autos, varios de los ataques que se suscitaron el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

<sup>302</sup> Página v del referido documento



habrían sido perpetrados por agentes policiacos.

842. Ello dio lugar a que la Fiscalía ejerciera acción penal en contra de diversos policías municipales de Iguala y de Cocula.

843. En el mismo fallo a que se hizo referencia previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que siempre que agentes estatales hayan hecho uso de la fuerza, y que ésta provoque la muerte o lesiones a una o más personas, el Estado debe proveer una explicación satisfactoria y convincente al respecto.

844. Para mayor claridad se reproduce la parte conducente de dicha sentencia:

*"108. Sin embargo, y respecto de los alcances que en opinión del Estado tendría la falta de una decisión judicial interna (supra párr. 100), además de lo señalado anteriormente (supra párrs. 88 a 90), este Tribunal ha considerado que "en todo caso de uso de fuerza [por parte de agentes estatales] que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos*

OS  
LADO  
JITO  
IPAS.

*probatorios adecuados". Ciertamente en los procesos sobre alegadas violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Además, no existe evidencia de que los agentes de las fuerzas armadas que participaron en el operativo hayan intentado otro mecanismo menos letal de intervención en el caso específico de las presuntas víctimas y el Estado no ha probado que la actuación de sus cuerpos de seguridad fuera necesaria y proporcional en relación con la exigencia de la situación..." (Lo resaltado no es de origen).*

845. Cabe decir que en el diverso **Caso de la "Masacre de Mapiripán" contra Colombia**, el 15 septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se había pronunciado respecto a las características que debía considerar una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, al señalar lo siguiente:

*"219. En efecto es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria,*



imparcial y efectiva. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. En este caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en ausencia. Además, la reducida participación de los familiares en los procesos penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo." (Lo resaltado no es de origen).

846. Más recientemente, al dictar la sentencia de 16 de febrero de 2017, en el **Caso Favela Nova Brasilia contra Brasil**, la Corte Interamericana abundó sobre las características

de la investigación que debe emprenderse cuando se alegan ejecuciones extrajudiciales.

847. En dicho fallo, se indicó lo siguiente:

***“B.1. Estándares relativos a debida diligencia y plazo razonable en casos de alegadas ejecuciones extrajudiciales.***

174. La Corte ha expresado de manera reiterada que los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).

175. Este deber de “garantizar” los derechos implica la obligación positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico de que se trate.

176. ***Esa obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal por parte de agentes fatales. Una vez que se tenga conocimiento de que los agentes de***





**seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado también está obligado a determinar si la privación de la vida fue arbitraria o no.** Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones.

177. En casos en que se alega que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales **es fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva** de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos. **Este deber se hace más intenso cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales** que detienen el monopolio del uso de la fuerza. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

178. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o

LOS  
GUAYOS  
QUITO  
IPAS

como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.

179. El cumplimiento de la **obligación de emprender una investigación seria, imparcial y efectiva de lo ocurrido**, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo de dicha investigación y de 'los medios legales disponibles' a los familiares de la víctima fallecida, para garantizar que sean escuchados, así como que puedan participar durante el proceso de investigación." (Lo resaltado no es de origen).

848. Como se ve, el uso de la fuerza letal en contra de una persona, debe dar lugar a una **investigación seria, imparcial y efectiva**, y con mayor intensidad, si están o pueden estar involucrados agentes estatales.

849. El tribunal interamericano de igual forma ha señalado que la investigación también adquiere matices particulares, si las víctimas son niños, dada su condición de vulnerabilidad inherente.

850. Así lo determinó en la sentencia de 26 de septiembre de 2006, emitida al resolver el **Caso**



PROSECUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Vargas Areco contra Paraguay, en la que señaló lo siguiente:

*"77. En este sentido, la Corte ha añadido que en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho. Dicha obligación debe materializarse de un modo particular cuando se tratare de una ejecución extrajudicial de un niño, dada su condición de vulnerabilidad inherente, especialmente si éste se encuentra bajo la custodia o tutela del Estado." (Lo resaltado no es de origen).*

NO  
DOS  
BIADO  
UITO  
IPAS

851. ► En ese orden de ideas, este tribunal colegiado debe llevar a cabo un escrutinio estricto de las actuaciones que integran la averiguación previa, a fin de determinar si se están observando los parámetros establecidos por el tribunal interamericano, y en caso negativo, dictar las medidas que sean necesarias para la reconducción de la investigación.

852. Previamente, cabe decir que no pasa inadvertido que los criterios aludidos han sido emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pudiera generar la

idea de que corresponde sólo a ese tribunal internacional, pronunciarse sobre los temas tratados.

853. Sin embargo, este tribunal colegiado observa precisamente, que dicha Corte Interamericana ya ha establecido que la vía idónea para determinar lo ocurrido es una investigación de los hechos a nivel interno.

854. Así se determinó en el mencionado **Caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador**, en el que se indicó lo siguiente:

*"109. Por último, la vía idónea para determinar lo ocurrido era un adecuado control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza mediante una investigación de los hechos a nivel interno (supra párrs. 67, 88 a 90 y 94). Además, la Corte entiende que, de los hechos establecidos en los párrafos anteriores y conforme a lo estipulado en los artículos 1.1 y 4 <sup>1</sup> de la Convención Americana, surgió la obligación estatal de investigar la muerte de los señores Zambrano Vélez, Marcelo Cobena y Carcedo Cobena. La evaluación acerca de la obligación de garantía del derecho a la vida por la vía de una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido, se hará en el Capítulo VIII de esta Sentencia. Para los efectos de la determinación de la violación del artículo 4 de la Convención, basta señalar que en este caso el Estado no ha*



*garantizado efectivamente el derecho contenido en esta disposición.*" (Lo resaltado no es de origen).

855. Al efecto, como se vio, en la teoría del caso se ha considerado que en los hechos de la desaparición de los estudiantes, intervinieron policías municipales de Iguala y de Cocula.

856. Sin embargo, de las actuaciones se desprende que la presencia de fuerzas del orden, no se limitó a policías municipales, como se explica enseguida.

857. En efecto, este tribunal no está asegurando que otras corporaciones necesariamente hayan participado en la afectación de las personas que fallecieron o que resultaron heridas, o bien, en la desaparición de los estudiantes; sin embargo, lo cierto es que la participación de otras fuerzas del orden, sí debe ser analizada puntual y exhaustivamente.

858. Esto es, la sola circunstancia de que las corporaciones policiacas de Iguala y Cocula, hayan intervenido en la afectación de las diversas víctimas, detona la necesidad de una investigación bajo los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que no debe descartarse la participación de otras corporaciones policiacas o fuerzas armadas.

ERACION  
25 MARRDOS  
EGADO  
RCUATO  
ULIPAS

859. Pues se insiste, los hechos que atañen a la lesión de los derechos humanos, exigen una investigación exhaustiva por parte del Estado, máxime que como se señaló, se vislumbra un caso de desaparición forzada de personas, y además, la actualización de varias ejecuciones extrajudiciales.

860. Así, de acuerdo a la información que obra en autos en el Centro de Cómputo, Comando, Control y Comunicaciones (en adelante C-4) los reportes de auxilio y/o emergencia fueron canalizados no solo a la Policía Municipal sino también a diversas corporaciones como la Policía Estatal y la Policía Federal.

861. Como muestra de ello se transcribe un fragmento de los registros del referido sistema del C-4, a continuación<sup>303</sup>:

Inc.	Notas	Fecha	Hora
13	REPORTA QUE HAY COMO 40 JÓVENES LOS CUALES	26/09/14	21 25 28
14	SE QUIEREN LLEVAN (SIC) UN AUTOBÚS CON PASAJEROS	26/09/14	21 25 33
15	PIDE EL APOYO DE LAS AUTORIDADES	26/09/14	21 25 37
16	<u>EN APOYO A ESTE REPORTE SE TRASLADA PERSONAL DE</u>	26/09/14	21 25 59
17	<u>LA FUERZA ESTATAL AL MANDO DEL OFICIAL JOSÉ ADAMF</u>	26/09/14	21 25 59
18	<u>BAUTISTA, COORDINADOR OPERATIVO DE LA ZONA</u>	26/09/14	21 25 59
19	NORTE. SE CONTINUARÁ INFORMANDO	26/09/14	21 25 59

<sup>303</sup> Tomo 3 fojas 248, 254 y 257 de la causa penal



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Inc	Notas	Fecha	Hora
46	INFORMO PERSONAL DE LA FUERZA ESTATAL, QUE EN	27/09/14	02:21:07
47	RELACIÓN A ÉSTE REPORTE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE	27/09/14	02:21:07
48	AYOTZINAPA FUERON DETENIDOS POR PARTE DE LA	27/09/14	02:21:07
49	POLICÍA MUNICIPAL, POR CAUSAR DISTURBIOS EN	27/09/14	02:21:07
50	DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE IGUALA,	27/09/14	02:21:07
51	ESTUDIANTES DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO	27/09/14	02:21:07
52	DESCONOCEN SUS GENERALES	27/09/14	02:21:07

Fecha: 26/09/2014

8	<u>EN RELACIÓN A ÉSTE REPORTE TAMBIÉN SE LE HIZO DE CONOCIMIENTO A LA COMISARIA DE LA POLICÍA FEDERAL SECTOR CAMINOS DE IGUALA, RECIBIÓ EL OFICIAL EZQUIVEL, EL CUAL MANIFIESTO QUE MANDARÁ A UNA DE SUS UNIDADES A VERIFICAR EL REPORTE.</u>	23:44:39
9	-----	23:44:44
10	SE PONE SIMBOLICAMENTE LA UNIDAD 062 PERO LA CORPORACIÓN QUE CUBRE EL INCIDENTE ES LA UT 01	23:57:23
11	INFORMA FRANCO DE LA QUE NO SE ENCONTRÓ NADA	00:20:03
12	<u>CON ESTA HORA SE LE REALIZÓ UNA LLAMADA A LA</u>	00:39:01
13	<u>POLICÍA FEDERAL SECTOR CAMINOS, CONTESTANDO EL</u>	00:39:01
14	<u>SUBOFICIAL EZQUIVEL EL CUAL MANIFIESTA QUE EN</u>	00:39:01
15	<u>RELACIÓN A LOS REPORTES QUE SE LE APASADOS (SIC) POR</u>	00:39:01
16	<u>PARTE DE LA POLICÍA ESTATAL NO TIENEN COMUNICACIÓN</u>	00:39:01
17	<u>CON SUS UNIDADES LAS CUALES SE TRASLADARON A LA</u>	00:39:01
18	<u>DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA PARA VERIFICAR EL DATO</u>	00:39:01

Fecha: 26/09/2014

- 1 SE RECIBE UNA LLADA (SIC) DE C-4 CHILPO 23:51:46  
OPERADORA 3
- 2 INDICA QUE LE PASARON DEL 088 A UN 23:52:04  
REPORTANTE QUE
- 3 UN TAXI QUE VIENE DE CHILPO A IGUALA, LE 23:53:42  
DISPARARON A UN CONDUCTOR
- 4 SOLICITA QUE SE LE MANDE LA UNIDAD DE 23:53:56  
LA CRUZ ROJA
- 5 El Tipo de incidente ha sido modificado de "150" 23:56:14  
a "5017"
- 6 El incidente fue Cancelado por : ick (911) a Las 00:04:12  
00:04:12 en 27/09/2014.

- 7 La llamada ha sido transferida a SE LE PASÓ EL  
REPORTE A LA COMISARIA DE LA POLICÍA  
FEDERAL SECTOR CAMINOS DE IGUALA 00:04:2  
RECIBIENDO EL OFICIAL ARISPE, EL CUAL  
MANIFIESTO QUE YA SE TRASLADAN SUS  
UNIDADES, al sector PERN (POLICÍA ESTATAL  
REGIÓN NORTE).

(Lo resaltado no es de origen).

862. Lo anterior da cuenta de que la intervención policiaca no se limitó a los cuerpos de seguridad municipales, pues se insiste, los propios reportes del C-4, hacen referencia a que ciertos eventos eran canalizados para su atención a corporaciones, tales como la Policía Estatal y la Policía Federal.

863. Pero además en autos obra información de la que se deduce que el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, también existió presencia del Ejército Mexicano, en labores de seguridad pública.

864. Así se desprende por ejemplo, de la declaración del cuatro de diciembre de dos mil catorce, del Teniente de Infantería del Vigésimo





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Séptimo Batallón, Joel Gálvez Santos<sup>304</sup>, quien señaló:

"... el día viernes veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, me desperté a las seis de la mañana ya que vivo en estas instalaciones desde el primero de abril del dos mil once, ya que me desempeño como teniente de Infantería en la 27° Batallón de Infantería ubicado en Periférico Oriente esquina con Colegio Militar sin número Iguala de la Independencia Guerrero, me desempeño en el Centro de Información Instrucción y Operaciones, lugar en donde mis labores entre otras son recibir y remitir informes que recibo del C-4 Centro de computación, comando y control que pertenece al Gobierno del Estado, el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, me dediqué a realizar un informe durante gran parte del día ya que se había volteado una pipa que trasladaba sustancias químicas altamente peligrosas, por lo que mi día transcurrió sin novedad y aproximadamente a las diecinueve treinta horas del día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, recibí una llamada proveniente del C-4 en específico del Sargento Cano del cual no recuerdo su nombre completo pero era la persona que se

<sup>304</sup> Tomo 20, fojas 339 a 341 del duplicado de la causa penal.

encontraba trabajando en el C-4 ese día, me informó que dos autobuses con estudiantes, específicamente normalistas de Ayotzinapa, provenientes de Chilpancingo Guerrero, habían arribado a esta ciudad, uno de los dos autobuses se encontraba en el cruce de carreteras conocido como Rancho del Cura, mismo que se encuentra a quince minutos de este municipio, el segundo autobús estaba en la caseta de cobros número tres del tramo carretero Iguala – Puente de Ixtla, de inmediato como en todas y cada una de las llamadas que recibo informé a mi superior quien ese día se encontraba laborando siendo el [REDACTED] y al Cuartel General de la 35 Zona Militar la cual mencioné los hechos reportados por el Sargento Cano quien se encontraba en el C-4, la segunda llamada la recibí aproximadamente a las veintiuna horas mediante la cual el Sargento Cano me informó que el camión que se encontraba en la caseta de cobros número tres del tramo carretero Iguala – Puente de Ixtla, se había dirigido a la terminal de autobuses estrella blanca la cual se ubica en el cruce de las calles Ignacio Manuel Altamirano con Salazar, lugar en el que los estudiantes se habían apoderado de dos autobuses de pasajeros y destruyendo otro, inmediatamente informé con el parte



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

informativo al coronel José Rodríguez Pérez  
de la misma forma a la 35 Zona Militar antes  
 mencionada, la tercera llamada la recibí  
entre las veintiuna horas con treinta minutos  
y las veintidós horas en la que el Sargento  
Cano me informa que personal de la policía  
municipal de Iquala y normalista tenían  
confrontamiento, los normalistas les  
estaban tirando piedras a los policías, por lo  
que le ordena al soldado de nombre Eduardo  
Mota Esquivel que realizara un recorrido en  
el periférico, informándome vía telefónica  
aproximadamente a las veintidós horas con  
treinta minutos, que frente al nuevo Palacio  
de Justicia había un autobús con los  
normalistas a bordo, el cual estaba rodeado  
por varias patrullas de la policía municipal  
quienes estaban encapuchados en  
camionetas rotuladas y el uniforme de  
policías municipales, asimismo que los  
policías ordenaban con groserías a los  
normalistas que se bajaran del camión de  
pasajero, haciendo caso omiso dichos  
normalistas por lo que elementos de la policía  
municipal arrojaron gas lacrimógeno, de la  
misma forma le informé al [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] de los hechos de los cuales  
me había informado vía telefónica el soldado  
Mota, informé inmediatamente al personal de  
la 35 Zona Militar, la quinta llamada la recibí

LOS  
LADO  
QUITO  
IPAS

aproximadamente a las veintitrés horas con diez minutos por parte del C-4, el la (sic) cual el Sargento Cano me informó que en el Hospital General de nombre Jorge Soberón Acevedo con dirección en Avenida del Estudiante sin número colonia Centro, de Iguala, Guerrero, al parecer habían ingresado personas heridas, de igual forma informé a mi superior y a la 35 Zona Militar, por lo que el Coronel ordena que la fuerza de reacción salga a verificar dicha información suscitada en el hospital mencionado regresando el Teniente ~~Verdugo~~ que ahora sé que iba al mando de esa fuerza de reacción, lo sé porque él personalmente fue quien me informó que en dicho hospital se encontraban tres personas del sexo masculino heridas por impactos de arma de fuego, la primera persona presentaba de nombre ~~██████████~~ quien presentaba un disparo provocado por un proyectil de arma de fuego en el brazo derecho, el segundo de nombre ~~██████████~~ ~~██████████~~ quien presentaba un disparo de arma de fuego en una mano sin tres dedos, el tercero en calidad de desconocido quien presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza sin especificar el lugar exacto, esta información se le informó (sic) al ~~██████████~~ ~~██████████~~ y a la 35 Zona Militar, la sext llamada la recibí a las veintitrés horas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

con cuarenta minutos por parte del Sargento  
Cano quien se encontraba en el C-4, en la  
cual me informó que el entronque de la  
carretera federal Iguala - Chilpancingo,  
Santa Teresa, había vehículos que  
presentaban disparos de arma de fuego,  
informé al Coronel Rodríguez de los hechos  
ocurridos en el entronque de Santa Teresa  
en ese momento el [REDACTED] le  
ordenó al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] que se trasladara a dicho lugar para  
verificar la información, el teniente salió para  
realizar el patrullaje y media hora después me  
informó que había dos taxis con impactos de  
arma de fuego un autobús de la empresa  
Castro Tours en el cual viajaban jugadores del  
equipo de fútbol los Avispones de Chilpancingo  
y que había un jugador muerto el chofer del  
autobús había sufrido un impacto de arma de  
fuego en la cabeza, aun (sic) costado de la  
parte de afuera de uno de los taxis se  
encontraba un cuerpo de una mujer sin vida  
sobre la cinta asfáltica, asimismo me informó  
que algunos jugadores y diversas personas  
habían sido trasladadas por automovilistas que  
pasaban por el lugar, siendo trasladados al  
Hospital General del cual ya mencioné el  
domicilio anteriormente, la octava llamada la  
recibí aproximadamente a la una de la mañana  
del día veintisiete de septiembre del dos mil

1005  
GIA  
CUTO  
-IPAS

catorce, por parte del Sargento Cano quien me informa que sujetos armados habían ingresado al [REDACTED] [REDACTED] el cual se ubica sobre la calle Juan N. Álvarez de la colonia del mismo nombre de Iguala, Guerrero, que habían sacado a las enfermeras y se encontraban en el interior de dicho hospital armados, informé de inmediato al Coronel Rodríguez asimismo a la 35 Zona Militar, el coronel me dijo que le ordenara a la fuerza de reacción Martínez, quien se encuentra a cargo del capitán [REDACTED] [REDACTED] se trasladó al [REDACTED] [REDACTED] antes mencionado, esa instrucción fue vía telefónica y se la comuniqué al soldado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quien en el instante le comunicó al Capitán Crespo dicha orden lo sé porque escuché cuando se lo infamaba (sic), la novena llamada la recibí aproximadamente entre diez y doce hocera (sic) horas del día veintisiete de septiembre del año dos mil catorce en la cual el Sargento Cano quien se encontraba en el C-4, me informó que en la colonia Industrial se encontraba el cuerpo de una persona si (sic) vida, ahora sé que era el normalista de nombre [REDACTED]; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a quien le quitaron la piel en la parte del rostro, enseguida informé al Coronel [REDACTED] [REDACTED] y a la 35 Zona, siendo el Coronel Rodríguez quien ordenó que saliera la fuerza de reacción al mando del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

██████████ ██████████ ██████████ para verificar la información que non (sic) habían promocionado (sic) personal que se encontraba laborando en el C-4." (Lo resaltado no es de origen).

865. Como se ve, de la declaración del ██████████ a ██████████, se desprende que el Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería, recibía la información correspondiente, en tiempo real, proveniente del C-4, pero además tiene presencia permanente en dicho centro; y de acuerdo a los datos reportados por sus elementos, se giran instrucciones para atender los diversos reportes y contingencias, tan es así que refiere el envío de elementos castrenses a los diferentes sectores de la ciudad de Iguala, en los que se suscitaron reportes.

DS  
1090  
170  
AS

866. Tal situación fue corroborada por el C ██████████, quien declaró en la misma fecha sobre la presencia de personal castrense en las instalaciones del C-4, así como lo relativo a elementos vestidos de civiles, que informan sobre situaciones que ocurren en el municipio de Iguala. También se refirió a los patrullajes efectuados por personal del batallón en diversos sectores de la ciudad.

867. Para mayor claridad, se transcribe la parte conducente de dicha actuación enseguida:

... que en lo que respecta a los hechos de los días 26 y 27 de septiembre del dos mil catorce, quiero declarar que tuve conocimiento que había un grupo de estudiantes, esta información la recibí a través del C-4, funciona de dos formas, una de ellas es que sólo ve las pantallas y otro tiene un monitor en el cual sólo se percata de ver y escuchar las denuncias, que se reciben, sin embargo ninguna de las personas que se encuentran en el C-4, reciben directamente la información, el personal que se encuentra en el C-4 responden a los nombre de Sargento Segundo de Infantería [REDACTED], Cabo de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de Infantería [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] los elementos que corresponden a los OBIS (Órganos de Búsqueda de Información), son personas de civiles quienes nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala, por lo que respecta al día 26 de septiembre del 2014, era conocido por los medios de comunicación que la Presidenta del DIF iba a rendir un informe de actividades además de que recibí una invitación, yo nunca acudo a ese tipo de actividades sino que mando a un representante. en este caso envié a [REDACTED] [REDACTED] quien es Capitán Segundo de





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Infantería en atención a la invitación realizada por la esposa del Presidente Municipal de Iguala, por lo que a mí no me realizó ningún reporte en relación a los hechos ocurridos ese día, pues al parecer no se había presentado ninguna eventualidad, a mí solo me realizó un informe de actividades, sin embargo se había designado a una persona de nombre [REDACTED] [REDACTED] quien es Cabo de Infantería (como persona que pertenece al OBI), a que cubriera el evento que se iba a llevar a cabo en la plaza de las Tres Garantías, sin embargo, se le ordena que se traslade a la caseta de cobro de la autopista de Iguala a Puente de Ixtla, para que verificara la información de que se encontraban los estudiantes en la caseta, de ahí se informa que solamente se encontraban los estudiantes en la caseta boteando, información que se corrobora con el personal que se encuentra en el C-4, de ahí nos informan que un grupo de estudiantes, quienes ya venían a bordo de un camión se trasladaban a la Central de autobuses [REDACTED] [REDACTED], la que se encuentra en el mercado, que al llegar ahí se reporta que quieren llevarse un autobús y que el personal no lo permite que se lo lleven y comienzan a destrozar el autobús, se apoderan de otros dos autobuses diferentes y salen de la central camionera transitando

OS  
ADO  
ITO  
PAS

sobre una calle que se llama Hermenegildo Galeana, el sentido que lleva es hacia el centro de la ciudad. y sabemos que la Policía Municipal hace su arribo porque los estudiantes ya llevan tres autobuses, los paran en la calle Hermenegildo Galeana y cuando Orzainza, nos enteramos que ahí son detenidos por policías municipales, ahí descenden los estudiantes y agreden a los policías municipales, esto último, lo sabemos porque cuando el OBI que venía caminando de la central camionera y llega al centro, la gente le comenta lo sucedido y que al parecer se escucharon detonaciones, siguen los estudiantes su camino, pasando por el centro y siguiendo su camino llegan a la calle Juan N. Álvarez, los detienen las patrullas y se observa que las patrullas rodean los camiones, sabemos por el C-4, que se encontraban tres patrullas adelante de los camiones y tres detrás de los mismos, de ahí sólo sabemos que se encuentran detenidos estudiantes y camiones por la policía municipal, también sabemos por parte del C-4, que personas se habían trasladado al Hospital General de Iquala, donde nos enteramos que solamente tres personas entraron por heridas de arma de fuego. una de las personas traía un balazo en el brazo otra de las personas tenía un disparo en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

la mano y otra persona más con un disparo en la cabeza, eso es lo que sabemos de primera mano, pues es la información que nos dan los médicos, a mí me informa el [REDACTED]

[REDACTED], quien se encontraba en Servicio de Fuerza de Reacción. El personal del C-4, nos informa que unos estudiantes se encuentran en el periférico bloqueados por policías municipales, otro vehículo más se encuentra enfrente del Palacio de Justicia en la carretera de Chilpancingo, Taxco, también detenido por policías municipales y al parecer también eran estudiantes, cuando ocurre todo esto yo me comunico con el Secretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez, a quien le pregunto que si tiene algún problema con los estudiantes, a lo que me dijo que no, que no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en los filtros. Por lo que en ese lapso en el cual mando a verificar la información de las personas que se encontraban ingresando al Hospital General, se presentaron en las instalaciones del batallón alrededor de seis personas alteradas quienes solicitaron que saliéramos a darles el apoyo a sus compañeros, quienes habían sido agrediendo (sic) por personas civiles quienes se encontraban disparando a todas las personas que pasaban por la

RECIBIDO  
FEB 20 1978  
PAS

carretera, estas personas se identifican como personas pertenecientes al equipo de fútbol los Avispones de Chilpancingo, estas personas llegaron a bordo de un vehículo compacto. **nosotros les decimos que íbamos a checar la información** que nos acababan de decir, por lo que nosotros les decimos que los vamos apoyar y que vamos a verificar la información que nos acaban de decir, por lo que **ordeno al Teniente Vázquez con la Fuerza de Reacción, con veinte personas aproximadamente se dirijan a Santa Teresa, poniéndoles un vehículo blindado en lugar de una camioneta para protección del personal**, cuando el oficial llega a ese lugar él encuentra primero un taxi con impacto de arma de fuego, más adelante aproximadamente a unos cien metros otro taxi, y una mujer muerta con disparo de arma de fuego, un autobús con un grupo de jóvenes y señores quienes manifiestan que fueron atacados por personas civiles, no sabiendo cuántas personas, reportándome esto el Comandante *[nombre]*, a lo que le ordeno que les dé seguridad y que se quede ahí hasta que lleguen las autoridades correspondientes, por lo que **como yo ya sabía del problema que se estaba presentando por el bloqueo de los camiones y los estudiantes y ante cualquier eventualidad preparo otro grupo de reacción a cargo del Capitán Segundo de Infantería a**



cargo de [REDACTED] con un oficial y doce de tropa ya organizado le ordeno que salga y se ponga cerca de la salida de Chilpancingo, por si se presentaba alguna eventualidad, se dispone a encaminarse al lugar donde ya le había ordenado y cuando va saliendo pasa por el lugar donde se encontraba el autobús del Palacio de Justicia y se da cuenta que una grúa ya se encuentra remolcando el autobús observa que se lo lleva una grúa de las grúas NAVA le preguntó por las patrullas y los estudiantes y me dice que no hay nadie, en su traslado me informan de parte del C-4, que se encontraba un grupo armado en el [REDACTED], por lo que le ordeno al Capitán [REDACTED] que verifique la información, y en el recorrido para llegar al [REDACTED] pasa por donde se encuentran los tres autobuses, dos personas tiradas en el suelo y ninguna patrulla, sigue su camino hacia al [REDACTED], ya llegando al Hospital Cristina me informa que se asoma una persona y levanta las manos, se identifican como personal de SEDENA le abren las puertas, las personas se identifican como estudiantes, el Capitán Crespo realiza una revisión en el Hospital Cristina y se encuentra con puros estudiantes y una persona mayor, el capitán no tomó dato alguno de nombres de las personas que se encontraban en el [REDACTED], nada

HAY  
OTROS  
303  
303  
303

más verificó que no se encontraban personas armadas dentro del hospital o en las cercanías, solicitando al batallón que se enviara una ambulancia para que atendiera a la persona que se encontraba herida, asimismo, me informé que siempre se respetó y se les dio buen trato a los estudiantes y al profesor, por lo anterior quiero agregar como constancia a mi declaración que rindiendo ante esta autoridad ministerial imágenes que fueron tomadas por el Capitán Cresta en el interior del [REDACTED] [REDACTED], esto porque estamos en la mejor disposición de que se aclaren los hechos ocurridos los días veintiséis y veintisiete de septiembre, en las imágenes se puede apreciar a las personas que se encontraban en ese lugar, de manera tranquila y respetando su integridad, por lo que ya no habiendo nada más que investigar dentro del hospital, se le ordenó al Capitán Cresta que se dirigiera al lugar donde se encontraban los cuerpos y los autobuses a fin de verificar qué es lo que había pasado, él llega al lugar donde se había presentado hechos que se relacionaban con los estudiantes y con los policías municipales, esto es a dos cuadras y media del Hospital Cristina, y en dicho lugar sólo se encuentra con dos cuerpos del sexo masculino sin vida, los tres camiones, ahí ya no se encontraban persona alguna, ni tampoco policías municipales, por lo



que se le ordena que se regrese al Hospital Cristina a ver a los estudiantes que se encontraban en ese lugar, cuando llega a este lugar me informa que ya no se encontraba ningún estudiante que ya se habían ido, esto se lo informa una persona que se identifica como médico del Hospital Cristina, a lo que sólo le informa al capitán que la persona herida se había ido a bordo de un taxi con un compañero sin mencionarle hacia dónde se dirigían, y que las demás personas también ya se habían ido, me informa el Capitán Crespo que habían acudido dos ambulancias una de ellas de la Cruz Roja y una de una Universidad, sin embargo, ya no habían encontrado a la persona a la que se le iba a proporcionar la atención médica, le ordeno entonces que se regrese hacia el lugar donde se encontraban los cuerpos, por lo que solicitamos que se traslade personal del Ministerio Público del Fuero Común, por lo que nos dicen que se iban a tardar porque se encontraban realizando ya un levantamiento en Santa Teresa el cual ya referí anteriormente, cuando el Capitán Crespo se encuentra vigilando y resguardando el lugar donde se encontraban los autobuses y los cuerpos de las dos personas del sexo masculino, llega un grupo de estudiantes, y de entre ellos un estudiante quien se identifica como [REDACTED], quien realiza una

OS  
ADO  
ITO  
IAS

conferencia de prensa con los medios de comunicación, a este sujeto lo identificamos como una de las personas que se encontraban en el Hospital Civil, ya que aparece en dos de las imágenes fotográficas que proporcioné a esta autoridad, siendo en la fotografía en donde se encuentran todos sentados la tercer persona viendo de izquierda a derecha y que está viendo a la cámara y en la fotografía donde en el margen izquierdo se encuentra una persona de pie, la tercera persona que se encuentra sentado de lado izquierdo, agachado y con las manos enlazadas. pero quiero aclarar que trae una sudadera de color azul con rayas rojas en el momento de ser entrevistado, una vez que se terminó de realizar el levantamiento de las personas fallecidas y tras haber proporcionado apoyo en las labores del personal del fuerza común, por lo que una vez que se terminan las labores tanto en la carretera de Santa Teresa así como del [REDACTED] se reincorpora el personal al batallón, sin ninguna otra novedad.

**El veintisiete de septiembre de 2014, aproximadamente a las 10:00 horas a través del personal que se encuentra en el C-4, recibimos un informe que nos dice que hay un cuerpo en la colonia Ciudad Industrial, cerca de la calle Industria Textil, por lo que enviamos al Teniente de Infantería [REDACTED] a que verificara la información por lo**





que nos informa que se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino se encontraba desollado, y ahí permanece en ese lugar hasta que llega el ministerio público y el forense una vez realizado esto, el personal asignado se retira del lugar.<sup>306</sup> (Lo resaltado no es de origen).

868. Como se ve, los referidos elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, aluden a su presencia en diversas zonas del municipio de Iguala, tales como la caseta de cobro de la autopista de Iguala a Puente de Ixtla, la central camionera, el Hospital General, Avenida Periférico, Santa Teresa, salida a Chilpancingo, Hospital Cristina, colonia industrial, entre otros.

869. La presencia de diversos elementos del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería, se corrobora con las declaraciones de dos, tres, cuatro y cinco de diciembre de dos mil catorce, a cargo de los soldados [REDACTED]

[REDACTED]

<sup>306</sup> Tomo 20, fojas 365 a 368 de la causa penal.

[REDACTED] Reyes [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] Pérez, Jesús Marbán González,  
Eusebio Jiménez González, Gustavo Rodríguez  
de la Cruz, [REDACTED] Javier Gómez Nolasco; el  
[REDACTED] e [REDACTED] a [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

870. Asimismo, en su declaración de veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] refirió la coordinación que existió desde los primeros momentos, con la Policía Federal, así como con el Ejército Mexicano, e incluso precisó que este último resguardó las entradas y salidas de la ciudad y que se habría hecho cargo de la seguridad de Iguala, Guerrero<sup>308</sup>. Enseguida se reproduce la parte conducente de dicha actuación

*"... y es el caso que el veintiséis de septiembre del dos mil catorce siendo aproximadamente las veintidós horas me encontraba en mi domicilio particular el cual ya señalé en mis generales, cuando recibí una*

<sup>307</sup> Tomo 19, fojas 294 a 297, 455 a 497, 519 a 537 y 569 a 574, y Tomo 20, fojas 1 a 19, 36 a 40, 45 a 58, 65 a 78, 179 a 183, 355 a 364, 379 a 384 y 536 a 539 del duplicado de la causa penal.

<sup>308</sup> Tomo 37, fojas 282 a 289 del duplicado de la causa penal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

llamada telefónica al número celular que también ya proporcioné por parte del Subsecretario Juan José Gatica Martínez, quien hace de mi conocimiento que el municipio de Iguala estaba reportando disparos producidos por arma de fuego, y que el Coordinador José Adame había determinado reforzar la seguridad exterior del reclusorio de Tuxpan que se encuentra a las afueras de la ciudad de Iguala, y se alertó a la guardia del cuartel de la Policía Estatal que se encuentra en dicho municipio, refiriendo además que le había sido reportado al coordinador por parte del C-4, que con motivo de dichas agresiones resultaron lesionados civiles, por lo cual el coordinador reportó que se había trasladado al Hospital General que se ubica en Iguala donde se enteró que los lesionados eran efectivamente civiles y que al parecer eran estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes además refirieron que las personas que los lesionaron eran los elementos de la policía municipal de Iguala, en consecuencia ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que dí al subsecretario, ya que en la región norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa, una vez que terminó la comunicación con el subsecretario, le llamé

AVION

98129

personalmente al Coordinador Adame para que me corroborara la información recibida por Gatica, confirmando en esa llamada la información agregando que ya se encontraba en el hospital y que se estaba brindando la seguridad a los lesionados, posteriormente recibí una llamada al mismo equipo de telecomunicación por parte del Gobernador del Estado de Guerrero, Aníbal Aguine Rivero, quien me ordenó trasladarme de inmediato a la ciudad de Iguala ya que estaba enterado de los eventos que se estaban suscitando, ordenándome también estableciera coordinación con el Procurador del Estado Iñáqui Blanco Cabrera así como con el Secretario de Salud Luzito Mézon Alonso y que pasara a recoger al encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero Ramon Navarrete Magdaleno, quien se encontraba en la ciudad de Chilpancingo, motivo por el que de inmediato le ordené al Subsecretario Gatica concentrara personal y que nos reuniéramos en la caseta de la venta de la carretera México-Acapulco para emprender el despliegue hacia la ciudad de Iguala, una vez concentrado el personal consistente en diez grupos operativos en total aproximadamente sesenta elementos, nos dirigimos a la ciudad de Chilpancingo en donde se unió el encargado de la Comisión Estatal de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Derechos Humanos y de ahí nos dirigimos al Hospital General de Tierras Prietas, lugar al que llegamos alrededor de las veintitrés horas con treinta minutos aproximadamente, lugar en el que se incorporó el Secretario de Salud con personal médico y tres ambulancias y de ahí salimos rumbo a Iguala, y en el trayecto precisamente en el punto conocido como Mezcala nos encontramos con un bloqueo sobre la carretera federal encontrándose dos tráileres con caja y dos vehículos particulares siendo estos una Ford escape y otro vehículo compacto al parecer un chevey los cuales estaban obstruyendo el paso, por lo que de inmediato se detuvo el convoy descendiendo personal operativo ya que se advertía riesgo, y entre la oscuridad nos percatamos de la presencia de varias personas civiles quienes salían con las manos en alto y pidiendo auxilio, dos de ellas uno masculino y una femenino, presentaban heridas al parecer producidas por proyectiles de arma de fuego, motivo por lo que una vez que se acordonó la zona y se contaba ya con las medidas de seguridad se procedió a abordar a los heridos a una de las ambulancias la cual se regresó al Hospital de Tierras Prietas con escolta de dos unidades de la policía estatal, no obstante quiero agregar que al encontrarnos en el lugar los testigos de los hechos manifestaban que habían sido

DOS  
SIAC  
UTR  
IPAS

agredidos por varios sujetos cubiertos del rostro y que vestían ropas oscuras, sujetos que portaban armas de fuego y que después de agredirlos huyeron sin percatarse hacia dónde. una vez que se logró abrir la vialidad, los conductores de los tráileres se retiraron de inmediato ya que se había trasladado a los heridos al hospital y se continuó con el traslado hacia la ciudad de Iguala, una vez en la ciudad de Iguala llegamos directamente a la Fiscalía Regional de la Procuraduría, lugar en el que se encontraba ya el Procurador General de Justicia del Estado, quien de inmediato ordenó a personal ministerial trasladarse al Hospital de Tlaxiaco a recabar la declaración de las personas lesionadas, asimismo de inmediato informé al Coordinador Estatal de la Policía Federal de apellido Cabrera quien de igual forma se encontraba ya en el lugar, los hechos que habíamos presenciado en el trayecto quien tomó acciones en consecuencia las cuales será él quien tenga que referir al respecto, estando en la Fiscalía Regional nos percatamos que comenzaron a llegar al lugar por un lado civiles que se decían estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa quienes referían que habían sido agredidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala y por otro lado jugadores del equipo de fútbol de tercera división los Avispones de Chilpancingo



apreciando que algunos de ellos se encontraban lesionados y quienes referían que también habían sido agredidos sin que en ese momento refirieran por quién habían sido agredidos, sin que me conste las lesiones que estos presentaban o quiénes se las hayan ocasionado, o si estos hayan o no rendido declaración ante el ministerio público, ante las circunstancias se ordenó la inmediata coordinación con elementos del Ejército Mexicano a fin de resguardar las entradas y salidas de la ciudad y tomar el control de la seguridad del municipio de Iguala ya que el Procurador Estatal Iñaki Blanco ordenó que se concentrara a los elementos de la policía municipal de Iguala en instalaciones militares pero al no contar con la autorización por las autoridades castrenses, el Procurador Estatal solicitó la concentración de los elementos de la policía municipal de Iguala en instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Estatal, ante esta instrucción le llamé al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala de nombre Felipe Flórez Velázquez, se concentrara por instrucciones del Procurador Estatal, junto con todos sus elementos, unidades y armamento en las instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Estatal ubicado en Iguala, hecho lo anterior las funciones de los elementos a mi cargo se limitó a la guardia y custodia de las

FNU

SOS

instalaciones del cuartel estatal, quiero agregar que al encontrarnos en las instalaciones de la Fiscalía Regional, se organizó a petición de los estudiantes que se encontraban dichas instalaciones. la búsqueda con patrullajes en la ciudad de Iguala con la finalidad de localizar a algunos estudiantes que a dicho de los que se encontraban ahí, estaban escondidos por temor a ser agredidos como lo habían sido sus otros compañeros, como resultado de los patrullajes y búsqueda se logró ubicar en diferentes puntos de la ciudad a alrededor de treinta jóvenes que se encontraban dispersos, a partir de ese momento **nos dedicamos a realizar patrullajes en conjunto con elementos del Ejército Mexicano vigilando las entradas y salidas de la ciudad**, quiero agregar que al día siguiente, es decir veintisiete de septiembre se organizaron brigadas de búsqueda conformadas por estudiantes y padres de familia, ya que referían que estaban desaparecidos algunos de sus compañeros, enterándome posteriormente que a parecer son cuarenta y tres estudiantes los que están desaparecidos, por lo que las funciones de la policía estatal acompañaron a las brigadas de búsqueda provenientes de Ayotzinapa, para brindarles seguridad y posteriormente se integraron a la búsqueda..." (Lo resaltado no es de origen).





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

871. También destaca la declaración del paramédico [REDACTED], quien aludió a la presencia de la Policía Federal, al señalar:

*"... el día veintiséis de septiembre del año en curso me encontraba en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Iguala de la Independencia ubicada en Mariano Herrera número tres, colonia Centro, cuando escucho por radio que el Coordinador de Socorros de nombre José Israel Cleto Bandera, que todas las unidades se concentran (sic) el personal dentro de las ambulancias y posteriormente da la indicación que se trasladen todas las unidades a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana esto siendo más o menos como las nueve veinte de la noche, aproximadamente como a las nueve y media igual de la noche recibí una llamada del radio operador del C-4, en turno, en donde me menciona que requería una unidad en la calle de Juan N. Álvarez esquina con Periférico Norte como referencia la "bodeguita" que es una bodega "Aurrera", por lo que procedí a enviar a la unidad 062 operada por el [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], como a las nueve con treinta y cinco minutos partieron para el servicio,*

EXHIBICION  
DOS  
JALISCO  
UNITO  
-IRAS

enseguida me marca de nueva cuenta el radio operador del C-4, comentando que la unidad todavía no llegaba y que urgía, comentándole que la unidad ya estaba por llegar, por lo que me comunico por radio con la unidad 062, y me comenta el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] comentándome únicamente que la zona no era segura para ellos. dos minutos más, me comenta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que lleva un masculino con una herida penetrante en cráneo y lo trasladarían al Hospital General "Jorge Soberón Acevedo", cinco minutos más tarde el radio operador de C-4, me informa que hay otro lesionado en el mismo lugar Juan N. Álvarez esquina con Periférico Norte con dificultades respiratorias, la misma unidad que hizo 062, que trasladó al primer lesionado, es la misma que va por el segundo sujeto con problemas respiratorios. alrededor de las diez de la noche me comenta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] operador de la 062, que tienen a un masculino con dificultades respiratorias, comentándome que de igual manera lo trasladarían al Hospital General, llegando la unidad 062 aproximadamente como a las diez y media de la noche a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, transcurriendo todo con normalidad sin ninguna urgencia hasta como a las once y media de la noche que es cuando recibo una llamada de una persona si (sic)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

30 +  
FORMA A 55

469

proporcionar datos que me comenta que había un autobús volcado en Zacacoyuca colgándome, posteriormente habla el radio operador del C-4, que había un autobús volcado en Zacacoyuca, pidiéndole más información quedando en espera de la misma, como las once y media de la noche habla una señora y me dice "habla la mamá de uno de los jugadores del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo", diciendo también que había tenido un accidente a la altura de la carretera Iguala-Chilpancingo en el entronque de Santa Teresa, que eran jóvenes de dieciséis a diecisiete años de edad, colgándome, me comunico con mi Coordinador de nombre José Israel Cléto Bandera comentándole los hechos y él toma la decisión de enviar tres unidades al servicio mismas que son las 060, quien de Operador iba Luis Román Castro Ochoa, Paramédico yo, en la 061, iba José Israel Cléto Bandera de Operador de Paramédico iba Irwing Israel González González y Daniel González Gutiérrez, en la unidad 062, iba el doctor Hugo Castañeda Rodríguez y José Daniel Millan Ambriz, **saliendo en convoy las tres unidades, aproximadamente a las doce horas con quince minutos del día veintisiete de septiembre del dos mil catorce, salimos hacia la carretera Iguala-Chilpancingo antes de llegar al cruce de Santa Teresa veo que**

RECIBIDO  
DIO:  
GIA:  
JUL 7  
LIP#

**del lado derecho del acotamiento un taxi y  
una patrulla de la Policía Federal**

percatándome que había una femenina tirada sobre el acotamiento de la carretera indicando por medio de sus lámparas que siguiéramos, llegando al lugar de los hechos esto es en el cruce de Santa Teresa, procedo a bajar de la unidad me dirijo con un muchacho de quince o dieciséis años el cual me indica que su tío de nombre Pedro Isenterra Iguano quien estaba lesionado, me acerco a esta persona y me comenta que le dolía el abdomen al revisarlo traía una herida penetrante y otra herida penetrante en el brazo derecho, por lo que lo subo a la ambulancia, una vez arriba llega otro joven y un señor a quien le decían el "Pañañas" pero de nombre Carlos Adamir Flores, éste traía una herida penetrante en el brazo izquierdo y en el antebrazo izquierdo y se sube en la parte de adelante un joven de nombre "Cristian", por lo que de inmediato nos trasladamos al Hospital General "Jorge Soberón Acevedo" ubicado en Avenida del Estudiante número 4, colonia San José en Iguala de la Independencia, donde ya nos esperaban los médicos, por lo que una vez que los dejamos nos trasladamos a las oficinas de la Cruz Roja Mexicana alrededor de la una de la mañana del veintisiete de septiembre del año en curso, y esto fue todo lo que me consta en relación a dichos hechos, por lo que previa



POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*lectura de su declaración manifiesta que ratifica su contenido en todas sus partes y firma al final y al calce de la misma para debida constancia...* (Lo resaltado no es de origen).<sup>311</sup>

872. Cabe abundar, que en el *Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI*, también se hace referencia a la participación de diversas fuerzas del orden, tanto en el C-4, como en diversos escenarios de la ciudad de Iguala, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce.

873. Al respecto, para mejor referencia se reproduce el fragmento correspondiente a continuación<sup>312</sup>:

**"5. El C-4 como espacio de coordinación de información**

*Las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del ejército mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C-4. Dicho sistema estuvo operativo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el GIEI muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua. En dichas comunicaciones puede verse que:*

<sup>311</sup> Tomo 73, fojas 123 a 124 de la causa penal

<sup>312</sup> Páginas 316 a 318 del documento.

a) La mayor parte de ellas aparecen como comunicaciones de personas que avisan de hechos de violencia o piden ayuda a través del teléfono de emergencias 066.

b) Se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes.

c) Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C-4 que ha sido proporcionado al GIEI, durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y el tiempo del segundo ataque en el mismo lugar.

d) En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena.

El C-4 monitoreó la salida de los normalistas desde Chilpancingo a las 6pm, hasta su llegada a las cercanías de Iguala. Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de estos hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos las grabaciones existieron y no se proporcionaron a la PGR ni al



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

GIEI. Solo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron al parecer destruidas, y tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 2015, al final de las cuales aparece presencia policial a pie en la calle Hermenegildo Galeana tras salir los autobuses de la central.

**6. Presencia de agentes de diferentes fuerzas de seguridad o ejército que observan los ataques.**

En ambos escenarios de los autobuses estrella de Oro 1568 y 1531 donde hubo normalistas desaparecidos, los agresores fueron al menos policías municipales de Iguala y Cocula. En el escenario del Palacio de Justicia, según testigos, los perpetradores dijeron que iba a llegar policía o grupos de Huitzuco para llevarse a parte de los normalistas.

Antes de todo eso, tanto la policía federal, estatal, como el ejército tuvieron personal destacado en la caseta de Iguala en ese momento, donde los normalistas se disponían a tratar de tomar autobuses y una patrulla estatal habría observado su llegada antes de retirarse. Según testimonio de los normalistas, la policía federal estuvo presente muy cerca del otro lugar de boteo, el cruce de Huitzuco. Es decir, antes

de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la policía federal, como la estatal y el ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses.

Por otra parte, diferentes testigos señalan la presencia de policía federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de policía ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de policía ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de inteligencia del ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia según reportes y declaraciones de miembros del ejército; de policía ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes.

Además de la (sic) policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de





PODER EJECUTIVO FEDERAL DE LA FEDERACIÓN

normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte tras el segundo ataque. Posteriormente otra patrulla del ejército llegó entre 6 y 7am y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles.

**7. Dirección y coordinación de los ataques y/o respuestas frente a los mismos**

El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios y de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes. Por otra parte, según testigo protegido una patrulla

*estatal participó en trasladar un chofer detenido y luego liberado."*

874. Después en el *Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas*, el GIEI dedicó un apartado a las actuaciones que tuvieron en Iguala, los días veintiséis y veintisiete de septiembre, la Policía Estatal, Policía Federal, Policía Federal Ministerial, así como del Vigésimo Séptimo Batallón<sup>313</sup>.

875. Lo cual corrobora que la intervención que tuvieron los elementos de dichas corporaciones, debió ser investigada exhaustivamente desde un primer momento.

876. Ahora, precisamente en el marco del análisis integral del caso, se considera que también debe ser considerado el ataque contra los jóvenes futbolistas, integrantes del club "Los Avispones de Chilpancingo".

877. El Segundo Informe del GIEI, da cuenta de la intervención de elementos de la Policía Federal, así como de policías municipales en un retén, a la salida de la ciudad, en un paso elevado de la carretera.

<sup>313</sup> Páginas 89 a 151 del referido documento



878. De acuerdo a la información recabada por el GIEI, se permitía el paso de algunos vehículos pequeños y grandes, incluso se señala que a una pipa se le permitió el paso, desviándolos por un camino de terracería, que llega hasta la caseta de la carretera Cuernavaca-Iguala. Al frente de la caravana se habría encontrado una patrulla de la Policía Federal.

879. Los vehículos desviados, incluyendo a varios familiares de los deportistas<sup>314</sup>, habrían pasado por la carretera que une esa zona con la carretera Iguala-Chilpancingo, sobrepasando la zona del Palacio de Justicia.

880. El camión de los jóvenes futbolistas, no fue desviado por el camino de terracería, tan es así, que incluso pasó por donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531, de donde habrían sido descendidos los normalistas, cerca del Palacio de Justicia; después pasó por otro retén de policías municipales, que habitualmente se instalaba en la ciudad de Iguala, y que les dio paso; y después de avanzar aproximadamente diez kilómetros, en la zona del cruce de Santa Teresa, fueron objeto de los ataques armados.

881. El GIEI precisó que tanto el ataque de los "Avispones de Chilpancingo", como el conjunto

<sup>314</sup> No debe perderse de vista que los miembros del equipo de fútbol son todos jóvenes, y algunos incluso menores de edad, por lo que sus familiares se desplazaban en diversos vehículos, en acompañamiento de sus hijos

de operativos llevados a cabo por diferentes cuerpos policiacos, debían ser esclarecidos.

882. Para mayor claridad, se reproduce la parte conducente a continuación<sup>315</sup>:

*"En resumen, al menos seis cuestiones resultan determinantes en esta explicación de los hechos y la búsqueda de sentido a los mismos, que deben ser investigadas para esclarecer tanto este ataque como su función en el conjunto de los operativos llevados a cabo esa noche por parte de diferentes cuerpos policiales:*

*a) El partido de Los Avispones-Iguala era un hecho público notorio, lo que hacía el necesario conocimiento de las distintas autoridades del mismo y de la movilización de los futbolistas.*

*b) El recién señalado retén de policía federal y paso de policía municipal por la propia salida de la ciudad, así como el desvío de parte de los vehículos con participación de una patrulla de policía federal hacia la caseta de Iguala para evitar el paso por el Palacio de Justicia donde estaba el autobús Estrella de Oro 1531 de los normalistas. La aglomeración de vehículos que no podían pasar durante 15-20 minutos, mientras estaba dándose el ataque contra los normalistas en la zona del Palacio de*

<sup>315</sup> Páginas 44 y 45 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas



Justicia. Esos hechos eran notorios a escasos metros del cuartel de la policía federal. A esta hora el 5º autobús es acompañado por policía federal hasta la salida de la caseta Iguala-Cuernavaca.

c) La presencia, un poco más adelante, del retén de policía municipal de Iguala, ya en la salida en El Tomatal, al menos hasta la 01:30 h, después de que se habían consumado todos los ataques.

d) El conocimiento de las diferentes autoridades sobre la toma de autobuses por parte de los normalistas en Iguala después de ser monitoreados desde su salida de Chilpancingo por parte del C-4, y el necesario conocimiento de su intento de salir de la ciudad y el cerco llevado a cabo contra ellos.

e) La existencia de dos lugares más de bloqueo de la misma carretera Iguala-Chilpancingo. Uno muy cerca del cruce de Santa Teresa, en Sabana Grande, y otro en el cruce de Mezcala, a 40 km de Chilpancingo, cuyo objetivo evidente era el control de la carretera e impedir el paso de vehículos.

f) Las informaciones sobre la posible actuación de policía de Huitzuco en el escenario del autobús [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 1531, y la movilización de dicha policía al menos hasta Pololcingo, localidad que conecta tanto con Iguala como con Santa Teresa, sin ningún

NOTA  
- PRECISAR  
SOLICITUD

*motivo aparente. Lugar donde, después del ataque, las policías que participaron en el mismo huyeron hacia Santa Teresa.*

*Todas estas circunstancias muestran un patrón de actuación de distintas policías (y la participación de grupos del crimen organizado al menos en los bloqueos de Sabana Grande y Mezcala) en esos ataques."*

883. Si bien es cierto es que entre las declaraciones de los sobrevivientes de los ataques del Cruce Santa Teresa, no se hace referencia a que hubieran advertido que los disparos eran efectuados por elementos policiacos, pues en su mayoría, aseveran que se trataba de personas vestidas de negro<sup>316</sup>.

884. También es cierto que la participación activa de diversos cuerpos policiacos en los retenes cercanos a la zona del ataque, debe ser investigada exhaustivamente, tal y como lo sugirió el GIEI.

885. De manera ejemplificativa, es de destacarse que en el sitio web oficial de la policía federal, se señala lo siguiente<sup>317</sup>:

*"Los Valores de la Policía Federal, en el marco del cumplimiento al Código de Conducta son:*

<sup>316</sup> Tomo 59, fojas 594 a 597.

<sup>317</sup> <https://www.gob.mx/policiafederal/entorno-y-sistema-judicial-del-codigo-de-conducta-de-la-policia-federal>.



1. **Interés Público:** actuar en todo momento bajo la búsqueda de la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares que sean ajenos a la satisfacción colectiva.

2. **Respeto:** conducirse con austeridad y sin ostentación, otorgando un trato digno y cordial a las personas en general, así como las y los compañeros de trabajo, superiores y subordinados, de tal manera que el respeto a sus derechos propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.

3. **Respeto a los Derechos Humanos:** acatar los derechos humanos y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar, promover y protegerlos, de conformidad con los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad."

886. En cuanto al Ejército Mexicano, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, señala:

**"Artículo 1.** El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

*I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;*

*II. Garantizar la seguridad interior;*

*III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;*

*IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y*

*V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.*

887. Aun en el supuesto de que se identificara a los atacantes del crucero Santa Teresa, como particulares, es decir, como personas ajenas a alguna fuerza del orden, lo cierto es que debe investigarse si existió coordinación entre los cuerpos policiacos y los atacantes, e incluso, si las fuerzas estatales inobservaron su condición de garante.

888. Relacionado con lo anterior, llama la atención la circunstancia de que los elementos castrenses hayan sido examinados hasta diciembre de dos mil catorce, es decir, más de dos meses después de acontecidos los hechos de la desaparición de los estudiantes.

889. Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo





conocimiento de la participación del Ejército Mexicano en las calles de Iguala, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió.

890. Del mismo modo, en autos se aprecia que hasta el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, es decir, **casi tres meses después de los hechos**, se recabaron las testimoniales de los paramédicos que atendieron los llamados de emergencia, así como de los comerciantes de la zona del zócalo<sup>319</sup>, donde se suscitó el primero de los ataques que nos ocupa.

891. Todo lo cual impide considerar que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, se haya llevado a cabo sin demora.

892. Cabe decir que en la sentencia dictada el 7 de junio de 2003, en el **caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras**, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el alto valor que tienen, entre otras pruebas, las testimoniales, en los casos donde

<sup>319</sup> Tomo 73, fojas 109 a 152 del duplicado de la causa penal.

se han suscitado ejecuciones extrajudiciales. En dicho fallo, se señaló lo siguiente:

*"108. La Corte reconoce un alto valor probatorio a las pruebas testimoniales, circunstanciales o inferencias lógicas pertinentes en casos de ejecuciones extrajudiciales, con todas las dificultades probatorias que de éstas se derivan cuando se enmarcan dentro de una práctica impulsada o tolerada por el Estado de graves violaciones a los derechos humanos. Esta Corte considera que si se demuestra para el caso concreto que éste obedecía al patrón de ejecuciones extrajudiciales, es razonable presumir y concluir que existe responsabilidad internacional del Estado."*

893. Además, no sólo existe demora en la toma de las declaraciones del personal castrense, sino tampoco aparece que se hayan recabado, por ejemplo, las declaraciones de los elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal, al menos no antes de la etapa de preinstrucción.

894. Así es, cabe tener en cuenta que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación respecto a la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes, a partir del **cuatro de octubre de dos mil catorce**, es decir, una semana después de los sucesos, pues éstos se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

suscitaron el veintiséis y veintisiete de septiembre del mismo año.

895. Pese al volumen del expediente remitido, que constaba, hasta la preinstrucción de ochenta y seis tomos, además de la demora y omisiones antes señaladas; también destacan varios aspectos que denotan una inadecuada investigación por parte de la autoridad ministerial.

896. Así es, un medio de prueba que debe recabarse, por mero sentido común, en este tipo de investigaciones, son las videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia instaladas por las propias autoridades, de cualquier nivel de gobierno; y desde luego, también los videos de seguridad que hubieran captado las cámaras de particulares.

897. Al respecto, llama la atención que los videos captados por las cámaras del C-4, se hayan solicitado hasta el veinte, veintidós, y veintinueve de octubre de dos mil catorce, y diecisiete de diciembre de dos mil catorce<sup>320</sup>, fechas en las que se aprecian los acuerdos en lo que se requiere dicha información, es decir, cuando ya han transcurrido varias semanas

<sup>320</sup> Tomo 2, fojas 14 y 15; tomo 37, fojas 175 a 179; tomo 64, fojas 18 a 20; y tomo 71, fojas 1 a 3, del duplicado de la causa penal.

desde que la Procuraduría General de la República, atrajo la investigación

898. El sentido común de todo investigador, le indicaría que debe tratar de recabar esa información, pues debe saber que los sistemas de almacenamiento tienen límites, y además utilizan un modo de "sobre escritura" que conlleva la pérdida de los datos que no se resguarden y respalden oportunamente.

899. Así se constata del informe recibido el veintidós de octubre de dos mil catorce por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil<sup>321</sup>, quien manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado, ya que los videos sólo pueden almacenarse siete días.

900. De haberse actuado con la prontitud que exige la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho material videográfico se habría podido conservar, lo que no aconteció.

901. ► Otra situación que llama la atención, es la existencia de dos dictámenes periciales

<sup>321</sup> Tomo 37 fojas 408 a 448 del duplicado de la causa penal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

practicados por peritos independientes de reconocimiento internacional, quienes concluyeron la imposibilidad de que en el basurero de Cocula, se hayan quemado los cuerpos de los cuarenta y tres normalistas.

902. El primero de dichos dictámenes aparece glosado, identificado como anexo 1, al Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI.

903. Al respecto, el GIEI precisó que solicitó la práctica de un peritaje independiente sobre los aspectos relacionados al fuego<sup>322</sup>, estudio que encomendaron al Doctor José L. Torero<sup>323</sup>.

904. En el citado dictamen, se incluye un preámbulo, en el que entre otros aspectos, se plantean como objetivos, los siguientes:

*"1. La evaluación del proceso de investigación desde el 27 de septiembre hasta a la fecha y únicamente en aspectos relacionados al fuego*

<sup>322</sup> Páginas 383 a 425 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI.

<sup>323</sup> Según se precisa en el propio informe, José L. Torero es Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master y Ph D. de la Universidad de California, Berkeley, Fellow del Australian Academy of Technology and Engineering el 2014, premio de la Royal Academy of Engineering el año 2010 y 2008. Society of Fire Protection Engineers en 2015, Co autor del SFPE Handbook for Fire Protection Engineering; es el editor en jefe del Fire Safety Journal; miembro del cuerpo editorial del Journal of the International Council for Tall Buildings, Architecture, Fire Technology Journal, Fire Science and Technology, Case Studies in Fire Safety Engineering and Progress in Energy and Combustion Science. Receptor de la Arthur B. Guise Medal de la Sociedad Fire Protection Engineering el año 2008 y la Rasbash Medal de la Institution of Fire Engineers del Reino Unido.

2. *La evaluación de la viabilidad de las hipótesis existentes en función a información relacionada al fuego y*

3. *El establecimiento de información suplementaria asociada al fuego que permita apoyar los esfuerzos de investigación* '

905. Posteriormente, de la declaración de uno de los inculpados se extrae la hipótesis inicial, y se deja en claro que la investigación de campo debe enfocarse a establecer la evidencia material que apoye o desmienta la hipótesis sobre la incineración de cuarenta y tres cuerpos en el basurero de Cocula.

906. Después, se detalla el proceso de cremación, el efecto del vapor de agua que contiene el cuerpo humano, la pérdida de la energía en un quemado a aire abierto; se indica que las interacciones entre cuerpos producen acumulación de vapor de agua, bloquean el calor para la gasificación del material combustible y tienden a extinguir la llama.

907. Pese a ello, se establece un tiempo mínimo de combustión, asumiendo que esos efectos no existen, y se precisa que el incendio de un solo cuerpo demoraría doce horas, y el de cuarenta y tres, tomaría sesenta horas.

908. También se señala que la altura de la llama habría alcanzado los siete metros; y el



penacho de humo, aproximadamente trescientos metros.

909. Igualmente, se precisa que la generación del calor, habría hecho imposible que las personas descendieran para atizar el fuego; y que los daños observados en la pendiente del lugar, no son consistentes con un fuego de esas dimensiones; pues sólo hubo fuegos pequeños de mucha menor dimensión que el mínimo necesario para validar la hipótesis de cremación de los cuerpos.

910. Después, el Doctor Torero analiza un dictamen practicado por dos peritos de incendios y explosiones, adscritos a la Procuraduría General de la República, y refiere que su rigor no es suficiente para una investigación de esa naturaleza, que el lenguaje que utiliza es especulativo, confunde fenómenos físicos que en muchos casos llevan a conclusiones erradas o imposibles de obtener con la evidencia recolectada.

911. En sus conclusiones asevera, entre otros aspectos, que no existe evidencia que apoye la hipótesis de que cuarenta y tres cuerpos hayan sido cremados en el basurero municipal de Cocula; que no hay evidencia de que indique la presencia de un fuego de la magnitud necesaria para la cremación inclusive de un solo cuerpo; y

que los testimonios indican eventos que no son posibles.

912. Finalmente, concluyó que los cuarenta y tres estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.

913. Posteriormente, se encomendó al Equipo Argentino de Antropología Forense<sup>324</sup> (en adelante EAAF), un nuevo dictamen en torno al basurero de Cocula

914. En el Dictamen sobre el basurero de Cocula del EAAF<sup>326</sup>, participaron peritos provenientes de Argentina, México, Estados Unidos de América, Colombia, Uruguay y Canadá, quienes analizaron la evidencia recolectada en el referido basurero, desde la perspectiva de la arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forenses, biología, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales y odontología forense, entre otras<sup>327</sup>.

— — —  
<sup>324</sup> Organización científica no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo la cual se formó en mil novecientos ochenta y cuatro con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983). Actualmente el equipo trabaja en Latinoamérica, África, Asia y Europa, en labores de investigación, entrenamiento y asistencia, desarrollo científico, fortalecimiento, documentación y difusión.

<sup>326</sup> Visible en la liga: <http://www.eaaf.org/files/dictamen-sobre-el-basurero-cocula-feb2016.pdf>

<sup>327</sup> Página 6 del referido documento





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

915. Al inicio del documento, el EAAF especifica que su estudio está organizado en torno a una pregunta principal, que es del siguiente tenor<sup>328</sup>:

*“¿Desde el punto de vista de la evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero de Cocula es posible que la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 los perpetradores hayan llevado allí a los 43 estudiantes de la escuela normal Burgos Ayotzinapa, asesinado en ese lugar a quienes entre ellos habrían llegado vivos hasta allí e incinerado los restos de todos ellos en dicho lugar? En otras palabras, ¿es consistente la evidencia física recolectada en dicho lugar con los testimonios de diversos inculcados en los hechos que señalan haber cometido estos actos que han constituido la hipótesis principal de la investigación oficial hasta la fecha?”*

916. El EAAF especifica que a partir de dicho cuestionamiento principal, surgen otras preguntas específicas, a saber:

**“1.- Extensión espacial del incendio, en caso de incineración en dicho lugar de 43 persona, ¿qué dimensiones e intensidad debería haber alcanzado un incendio que hubiera incinerado los restos de 43 personas en el Basurero de Cocula? ¿Cómo habría afectado**

<sup>328</sup> Página 4 del referido documento.

un incendio de tal dimensión el lugar y los elementos que se encuentran en él?

**2.- Número y temporalidad de eventos de fuego:** ¿hubo un único fuego en el Basurero de Cocula o hubieron múltiples fuegos a lo largo de varios años en ese mismo lugar? Si existieron múltiples fuegos a lo largo del tiempo, ¿podemos establecer cuándo sucedieron? Si hubo un único evento de fuego en el Basurero de Cocula ¿podemos establecer si éste ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014?

**3.- Relación de fuegos y evidencia biológica y no biológica:** ¿podemos ligar la evidencia física biológica y no biológica que recolectamos allí a eventos específicos de fuego que puedan haber ocurrido en dicho lugar? Por ejemplo, ¿hay evidencia física biológica y no biológica que pueda ligarse directamente a eventos de fuego específicos y a la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014?

**4.- Identificación de restos:** ¿Podemos establecer a quién pertenecen los miles de fragmentos de restos óseos recuperados en el Basurero de Cocula? Si no podemos identificarlos con los normalistas o con otros desaparecidos, ¿qué información podemos sacar de ellos?"



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

917. Para dar respuesta a dichas interrogantes, se llevó a cabo un estudio multidisciplinario, que comprendió el análisis de:

- Elementos biológicos, tales como restos óseos humanos y no humanos, insectos, plantas, vegetación y follaje.
- Elementos no biológicos, como artículos de uso personal, ropa, calzado, componentes eléctricos, mecánicos, monedas, restos de alambres, de neumáticos, vidrios, carbón, metal, papel, cartón y plástico.
- Balística.
- Dinámica de fuego.
- Fotografías satelitales.
- Dictamen de Laboratorio sobre Restos Óseos Integrado.

918. En cada uno de esos rubros, se expuso la metodología empleada, consideraciones, las conclusiones específicas a cada tema, así como las generales.

919. Pues bien, al emitir su conclusión final, el EAAF indicó que la evidencia encontrada, no respalda la hipótesis de la existencia de un fuego en el basurero de Cocula, con la magnitud necesaria y duración informada, en la madrugada del veintisiete de septiembre de dos mil catorce; que no existía evidencia científica para relacionar a los estudiantes desaparecidos

con el basurero de Cocula, ni los restos encontrados en dicho lugar, con la bolsa hallada en el río San Juan.

920. Del mismo modo, el EAAF precisó que sus conclusiones eran consistentes y complementarias con las del informe emitido por el Doctor Torero

921. Para mayor claridad, se reproduce la conclusión final del estudio<sup>329</sup>:

*"Conclusión Final: 1. El examen multidisciplinario de la evidencia Biológica y No Biológica recuperada en el Basurero de Cocula y la información adicional reunida, **no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos.***

*2. Hasta el momento, el EAAF no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el Basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.*

*3. En opinión del EAAF no existen elementos científicos suficientes por el*

<sup>329</sup> Páginas 241 y 242 del documento



*momento para vincular los restos hallados en el Basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio.*

*El EAAF considera que su peritaje sobre el Basurero de Cocula arriba a conclusiones finales que son consistentes y complementarias con las vertidas en el informe emitido en septiembre del 2015 por el Dr. Torero, experto independiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)."*

DOS  
SALDO  
UNTO  
IPAS

922. Ahora, en el Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas, el GIEI aludió a la práctica de un diverso estudio sobre el fuego en el basurero de Cocula, ordenado por la Procuraduría General de la República, en el que se arribó a una conclusión distinta, que corroboraría la versión oficial de la Fiscalía.

923. Al respecto, el GIEI destacó un mecanismo de opacidad en torno a la práctica de dicho dictamen, al grado de que, según lo indicó el grupo de expertos, existía una cláusula de confidencialidad firmada por los peritos con la Procuraduría General de la República, que les impedía exponer sus razonamientos al propio GIEI.

924. Partiendo de dicha información, la referida cláusula de confidencialidad, no resulta consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a la cual, la sociedad en general, debe ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones de derechos humanos lo que desde luego incluye su investigación.

925. Al efecto, el **Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas**, adoptado en dos mil dieciséis por la Organización de las Naciones Unidas, establece como un principio que debe observarse en las investigaciones de esta índole, el de su transparencia, al señalar lo siguiente:

*"32. Los procesos y resultados de la investigación deben ser transparentes, lo que supone estar abiertos al escrutinio del público en general y de las familias de las víctimas. La transparencia promueve el estado de derecho y la obligación de rendir cuentas del sector público, y permite que la eficacia de las investigaciones sea controlada externamente. También permite a las víctimas, en sentido amplio, participar en la investigación. Los Estados deberían adoptar políticas explícitas relativas a la transparencia de las investigaciones. Deberían también, como mínimo, ser transparentes en cuanto a la*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*existencia de una investigación, los procedimientos que han de seguirse en ella y sus conclusiones, incluidos los fundamentos fácticos y jurídicos de estas."*

926. Además, el referido proceder de confidencialidad, también contrasta con la conducta asumida en algunos momentos por la propia Procuraduría General de la República, dependencia que ha hecho público el contenido de un sin número de actuaciones, tal y como se constata del "Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.", en el que incluso se transcriben las declaraciones de los probables responsables; y más aun, como lo destacó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe "Doble injusticia", en diversas conferencias de prensa se han exhibido los nombres e identidades de algunos de los inculpad<sup>330</sup>.

FEDERACION  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ERDOS  
LEGIAZO  
RCURTO  
AULIPAS

927. En relación a esto último, cabe precisar que el derecho de la sociedad a ser informada, no implica la autorización para violar el derecho de presunción de inocencia que les asiste a los detenidos.

<sup>330</sup> Párrafos 104 a 115 del documento.

928. En efecto, la exposición ante los medios de comunicación, de las personas a las que se les atribuye participación en los hechos delictivos, es una práctica que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han precisado que resulta lesiva de derechos fundamentales, y que debe ser desalentada

929. Así es, el 17 de septiembre de 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el **Caso Loayza Tamayo contra Perú**, en la que precisó que la exhibición de los acusados ante los medios de comunicación, implicaba un trato cruel, inhumano y degradante en su perjuicio.

930. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente:

*"58. [...] los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (supra, párr. 46 c., d., e., k. y l.), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana.*





*De las alegaciones y pruebas examinadas aparecen elementos graves y convergentes, y no desvirtuados por el Estado, que permiten válidamente presumir la existencia de una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el presente caso de la señora María Elena Loayza Tamayo, en violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana."*

931. Posteriormente, el 18 de agosto de 2000, al dictar sentencia en el **Caso Cantoral Benavides contra Perú**, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteró dicha jurisprudencia, y además, vinculó tal aspecto con la violación a su derecho a la presunción de inocencia.

932. Para mayor claridad, se reproduce la parte conducente de la sentencia respectiva:

*"89. Esta Corte ha dejado establecido que la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, [...] las restricciones al régimen de visitas [...], constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana.*

[...]

119. La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i)

120. *El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal [...]* (Lo resaltado no es de origen).

933. En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido consistente en el sentido de que la exposición pública de una persona ante los medios de comunicación, resulta lesivo de sus derechos fundamentales, en especial, del de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal.

934. Como muestra de ello, enseguida se invocan las tesis 1a. CLXXVI/2013 (10a.), 1a. CLXXVIII/2013 (10a.) y 1a. CCC/2016 (10a.), visibles en el Semanario Judicial de la Federación, bajo los registros 2003693, 2003695 y 2013214, que son del contenido siguiente:



**"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS.**

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. Asimismo, es necesario señalar que la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se puede desplazar a la imputación pública realizada por la policía." (Lo resaltado no es de origen).

**"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.** A lo largo de su jurisprudencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el papel central que juegan la

libertad de expresión y el derecho a la información en un Estado democrático constitucional de Derecho, como piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal de modo que es posible afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Sin embargo, el proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados. Es decir, la finalidad de brindar información sobre hechos delictuosos a los medios periodísticos no puede justificar la violación a la presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, por parte de las autoridades que exponen como culpables a los detenidos. En este sentido, se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo. Por el contrario, deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie. Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, que el principio de



presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En el mismo sentido, al dictar sentencia en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla." (Lo resaltado no de origen).

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. ELEMENTOS A PONDERAR PARA DETERMINAR SI LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITE CUESTIONAR LA FIABILIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO. La sola exhibición de personas imputadas en los medios de comunicación representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad y que propicia otras violaciones a derechos humanos. Por tanto, estas acciones deben ser desalentadas con independencia de si ello influye en el dicho de quienes atestiguan contra el inculpado. Al respecto, pueden consultarse las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1a. CLXXVI/2013 (10a.) y 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), (1) de rubros: ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE

EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS.' y 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE DETENIDOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.'. Ahora bien, cuando se plantea una violación en este sentido, la exposición mediática (y la información asociada a ella) tienen que ser suficientemente robustas para que pueda considerarse que han generado una percepción estigmatizante y que ésta ha elevado, de modo indudablemente significativo, la probabilidad de que los testimonios y las pruebas recabadas contengan información parcial y, por ende, cuestionable. Algunos de los elementos que el juez puede ponderar al llevar a cabo esta operación son: 1. El grado de intervención y participación del Estado en la creación y/o en la divulgación de la información. Cuando el Estado es quien deliberadamente interviene para crear una imagen negativa y contribuye a su formación, los jueces deben ser especialmente escépticos para juzgar el material probatorio. 2. La intensidad del ánimo estigmatizante que subyace a la acusación y su potencial nocividad. 3. La diversidad de fuentes noticiosas y el grado de homogeneidad en el contenido que las mismas proponen. Con apoyo en este criterio, el juez valora si el prejuicio estigmatizante ha sido reiterado en diversas ocasiones y analiza su nivel de circulación. También analiza si existen posiciones contrarias a este estigma que, de facto, sean capaces de contrarrestar la fuerza de una acusación. Cabe aclarar que si bien la existencia de una sola nota o la cobertura en un solo medio puede generar suficiente impacto, eso ocurriría en situaciones excepcionales, donde el contenido y la gravedad de la acusación fueran suficientemente gravosas por sí mismas para generar un efecto estigmatizante. 4. La accesibilidad que los sujetos relevantes tienen a esa información. Al valorar este aspecto, el juez



puede analizar el grado de cercanía que él mismo, los testigos o los sujetos que intervienen en el proceso tienen con respecto a la información cuestionada. Si la información es demasiado remota, existirán pocas probabilidades de que el juzgador o tales sujetos hayan tenido acceso a la misma; consecuentemente, la fiabilidad de las pruebas difícilmente podría ser cuestionada. Estos criterios no pretenden ser una solución maximalista, capaz de cubrir todos los supuestos. Se trata, tan sólo, de criterios orientadores que facilitan la tarea de los tribunales al juzgar este tipo de alegatos. Es decir, se trata de indicadores que, por sí mismos, requieren apreciación a la luz de cada caso concreto. De ningún modo deben interpretarse en el sentido de que sólo existirá impacto en el proceso cuando un supuesto reúna todos los elementos ahí enunciados. En conclusión, el solo hecho de que los medios de comunicación generen publicaciones donde las personas sean concebidas como 'delincuentes', ciertamente viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla procesal. Sin embargo, para evaluar el impacto que estas publicaciones pueden tener en un proceso penal, es necesario que los jueces realicen una ponderación motivada para establecer si se está en condiciones de dudar sobre la fiabilidad del material probatorio." (Lo resaltado no de origen).

935. ► Por otro lado, en su Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas<sup>331</sup>, el GIEI destacó que el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, se dio la presencia de personal ministerial e incluso de uno de los detenidos [REDACTED]

<sup>331</sup> Páginas 285 a 301 del referido documento.

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████), en las inmediaciones del río San Juan, en la cual incluso existió recolección de indicios por peritos, diligencia la cual no fue documentada en autos.

936. Tal situación es por sí sola irregular, pero su gravedad se agudiza por el hecho de que al día siguiente, veintinueve de octubre de dos mil catorce, se practicó una diligencia de suma relevancia para sustentar la teoría del caso de la Fiscalía, pues en el sitio se supone que se habría localizado una bolsa que contendría restos óseos carbonizados y cremados.

937. Restos que posteriormente fueron analizados pericialmente, y se determinó que uno de ellos correspondía al de un normalista desaparecido.

938. La presencia del personal ministerial el día previo, la circunstancia de que hayan recogido evidencias y que todo ello haya ocurrido sin requerimiento ni presencia del Fiscal, y sin documentar esa actuación en autos, genera serias dudas sobre los hallazgos del día siguiente, en especial, sobre si la evidencia encontrada fue manipulada irregularmente; y en suma, pondría en entredicho la cadena de custodia de todo el material probatorio recolectado formalmente.





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

939. Muy vinculado al hecho, en el Informe de Doble Injusticia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también cuestionó la circunstancia de que no se haya documentado en autos la presencia ministerial en el río San Juan el veintiocho de octubre de dos mil catorce, pero además, destacó la violación del derecho de defensa de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], por no haber estado presente su defensor<sup>332</sup>.

940. Del mismo modo, el Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos, negó categóricamente que personal de dicho organismo hubiera estado presente mientras se desarrollaban las referidas actividades en el río San Juan, el veintiocho de octubre de dos mil catorce<sup>333</sup>.

941. Tales situaciones ponen de manifiesto una actuación irregular de diversos servidores públicos, por lo que se impone dar vista al Titular o Encargado de la Procuraduría General de la República, en los términos que se precisarán más adelante.

942. ► En otra vertiente, existe diversa irregularidad, que resulta patente, cometida en

<sup>332</sup> Párrafos 164 a 202 del documento.

<sup>333</sup> Párrafos 203 a 207 del Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, intitulado "Doble injusticia"

agravio del quejoso [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
 sobre la cual, ni el juez del proceso ni el tribunal  
 de segunda instancia emitieron  
 pronunciamiento alguno, a pesar de la gravedad  
 de la situación presentada; lo que amerita que  
 este tribunal colegiado se ocupe de la misma

943. Así es. en principio se aprecia que,  
 derivado de los hechos relacionados con el  
 presente asunto, el veinticuatro de diciembre de  
 dos mil catorce, se libró orden de aprehensión  
 en contra de [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

944. En los autos del proceso penal, aparece  
 que la referida orden de aprehensión fue  
 cumplimentada el once de abril de dos mil  
 quince, a las veintitrés horas con cinco minutos.

945. Al respecto, mediante oficio  
 [REDACTED] de doce de abril de dos  
 mil quince, los elementos de la Policía Federal  
 que informaron sobre su aseguramiento,  
 expusieron lo siguiente<sup>334</sup>

*"... En cumplimiento parcial al oficio NO.  
 S [REDACTED] c, de fecha 08  
 de abril de 2015, suscrito por el Agente del  
 Ministerio Público de la Federación, Lic.  
 Lourdes López Lucho Iturbe, adscrita a la*

<sup>334</sup> Tomo 78 del duplicado de la causa penal fojas 529 a 532



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, derivado de la averiguación previa [REDACTED] S/ [REDACTED], donde se solicita se dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal [REDACTED] del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, que fue librada el día veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, a las nueve horas, en contra de:

1.- [REDACTED]

Por el delito de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (contra la salud), y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso a), ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal.

2.- [REDACTED]

ALIAS [REDACTED] " [REDACTED] " [REDACTED]

3.- [REDACTED]

4.- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Por el delito de delincuencia organizada previsto por el artículo 2, fracción I (contra la salud), y sancionado por el diverso 4, fracción I,

DOS  
DIA DO  
UITO  
IPAS

inciso b), ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal.

El día 11 de abril del año en curso, continuando con las labores de investigación y localización se logró saber que la persona antes señalada, se encontraba realizando trámites en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicada en Avenida Reforma No. 75, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Distrito Federal, por lo que se estableció el servicio de vigilancia fija y móvil en los alrededores de la Subprocuraduría, con la finalidad de dar debido y cabal cumplimiento a la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 125/2014-II del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en contra de [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] S [REDACTED], [REDACTED], por lo que siendo las 23:05 horas aproximadamente, se observó salir de las oficinas antes citadas a una persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, mismo que reúne las características y rasgos fisonómicos de [REDACTED] [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] L" [REDACTED] [REDACTED] N", motivo por el cual al acercarnos y



PROCURADURÍA DE LA FEDERACIÓN

corroborando que se trataba de la misma persona, los suscritos nos identificamos plenamente como Policías Federales, solicitándole se identificara, a lo que refirió que no contaba con credencial alguna que pudiera exhibir, por lo que de manera verbal refirió llamarse [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], momento en el que procedimos a informarle que contaba con una orden de aprehensión girada en su contra por una autoridad judicial y con el propósito de garantizarle que las autoridades federales actúan conforme a lo que establece la constitución, respetando en todo momento sus derechos humanos, se procedió a dar lectura a la "cartilla de derechos que asisten a las personas en detención", misma que firmó la persona señalada posterior a su lectura, la cual se anexa a la presente.

Dando continuidad a la cumplimentación de la orden de aprehensión, nos trasladamos a las oficinas de la Procuraduría General de la República (Camarones), ubicada en calle Poniente 44, número 2782, colonia San Salvador Xochimanca, delegación Axcapotzalco, C.P. 28700, México, Distrito Federal, arribando a las 23:25 horas del día 11 de abril del presente, con la finalidad de realizarle el certificado de integridad física, para poderlo trasladar al Centro Federal de

OS  
ADO  
ITO  
AS

*Readaptación Social número 4 "Noroeste" en el Estado de Nayarit.*

*Continuando con la logística y trámites administrativos para la debida cumplimentación de la orden de aprehensión, se implementaron medidas de seguridad y custodia con la finalidad de prever cualquier acción de evasión de la justicia y considerando el grado de peligrosidad que representaba si se trasladaba vía terrestre, debido a los antecedentes que se tienen por pertenecer al grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos, ya que considerando que podría ser interceptado el convoy por miembros del grupo antes referido para su rescate, se determinó que el traslado se realizaría vía aérea. Se hace mención que no se encontró disponibilidad en ninguna otra aerolínea, obteniendo el vuelo más próximo en la aerolínea Aeromar, de la Ciudad de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo, ubicado en domicilio conocido S/N, el Pantanal, 63788, Tepic, Nayarit, con un horario de salida 15:00 horas y de llegada a las 15.55 horas a este aeropuerto.*

*Por lo que se determinó solicitar un oficio de custodia de persona en tránsito para traslado, con la finalidad de que el presunto inculpado permaneciera con las medidas de seguridad requeridas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República*



(Camarones), en el área de tránsito, donde permaneció en los separos de la Procuraduría, resguardando la integridad física del probable responsable, en estricto apego a sus derechos humanos, estableciendo las más estrictas medidas de seguridad y custodia.

Siendo las 11:00 horas, del día 12 de abril del año en curso, se procedió a realizar el trámite necesario para el cese de custodia y su debida certificación médica, procediendo a realizar el operativo de seguridad de traslado del detenido, saliendo a las 11:30 horas de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en mención, con destino al Aeropuerto de la Ciudad de México para realizar los trámites necesarios ante las autoridades aeroportuarias para abordar en el vuelo a las 15:00 horas.

Al arribar al Aeropuerto Internacional de Tepic, Amado Nervo, se implementó la logística necesaria de seguridad para su inmediato traslado al Centro Federal de Readaptación social Número 04 "Noroeste", ubicado en el Estado de Nayarit; lugar donde quedó a su disposición:

1.-

[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

*[Handwritten signature]*

946. Con motivo de lo anterior, el juez de la causa levantó la suspensión del procedimiento penal, y posteriormente, el dieciocho de abril de dos mil quince<sup>335</sup>, practicó la diligencia para recibir la declaración preparatoria del inculcado, quien se abstuvo de declarar.

947. Sin embargo, al analizar el contenido del "Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero", este tribunal colegiado ha advertido que Miguel [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] debió haber sido puesto a disposición del juez de la causa con anterioridad.

948. En efecto, si bien es cierto no se precisa la fecha ni el momento en los que se logró la captura de [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED].

949. También es cierto que en la nota 257 del informe, se asevera que [REDACTED]  
[REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rindió su declaración ministerial el **diez de abril de dos mil quince**, al señalarse lo siguiente:

"257. En el mismo sentido, declaró [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] el 10  
de abril de 2015 ante la PGR en la que

<sup>336</sup> Tomo 78, fojas 597 a 604 del duplicado de la causa penal





manifestó: [...] siendo aproximadamente las 19:30 horas recibí una llamada a mi teléfono celular del cual no recuerdo el número, pero la llamada era procedente de "El Cepillo" quien me dijo: "ALÍSTATE, POR QUE LOS CONTRAS YA ENTRARON A IGUALA Y VAMOS A IR A DAR APOYO", le dije que si por lo que pasaron aproximadamente 30 minutos y llego a mi domicilio "El Cepillo" y [...], quienes iban a bordo de una camioneta Nissan estaquitas, color blanca aclarando que dicha camioneta nos la había entregado "El Gil" para trabajar, y de ahí nos trasladamos a la casa de mi primo Patricio alias "Pato", quien vive en [...], sin recordar la otra calle, por lo que "El Pato" acordó la camioneta en la que circulábamos y nos dirijimos (sic) hacia Iguala [...] por lo que en el camino a Iguala "El Cepillo" nos dijo que íbamos a ir por unos paquetes, es decir por gente detenida; por lo que siendo aproximadamente a las 20:30 ó 21:00 horas llegamos a Iguala al punto conocido como "Loma de Coyote" por lo que observamos que se encontraba aproximadamente dos o tres patrullas de Iguala por lo que descendimos de la camioneta estaquitas y policías Municipales de Iguala nos hicieron entrega de 5 u 8 paquetes o personas sin recordar la cantidad exacta y a dichos paquetes los subimos en la batea de la estaquitas y el de la voz, y "El Pato",

8899  
2009

nos fuimos con los paquetes atrás y quien iba manejando era el ... y/o [...], ya que "El Cepillo" se quedó con los policías municipales, y nos dio la orden de que lleváramos los paquetes a Cocula, por lo que nos dirigimos a una casa de seguridad que se ubica en el Barrio de la Barranca de la Plata siendo una casa de un nivel, de tabique rojo, de lámina de asbesto, puerta de herrería de color verde de la cual puedo hacer croquis, ya que se ubica casi esquina con la carretera que se dirige a río San Juan [...] por lo que al llegar a dicho domicilio ya se encontraban "El Jona", [...], [...] y [...] y bajamos los paquetes quienes se encontraban esposados, y eran pelones y los ingresamos al domicilio a quienes los revisamos y les encontramos escondidas unas capuchas en los testículos y aproximadamente 2 celulares que los traían también escondidos; "El Pato" recibió una llamada de "El Cepillo" quien dio la instrucción de que nos regresáramos a "Loma del Coyote" ya que nos iban a entregar más paquetes... por lo que nos trasladamos a "Lomas Coyote" el de la voz, "El Pato", "El Jona" a bordo de la estaquitas y pasamos a recoger a su negocio a "El Chetefe", y de ahí continuamos camino a "Lomas Coyote" pero en Metlapa nos encontramos al "El Cepillo" que venía a bordo de la camioneta de redilas de 3 y media toneladas en compañía del [...] y/o [...]. [...] y/o



[...] y [...], por lo que en ese momento nos detuvimos y "El Pato" se bajó de la camioneta estaquitas y a bordo de la camioneta de 3 y media toneladas y lo seguimos y nos dirigimos a la casa de seguridad en la casa en la que habíamos dejado a los paquetes [...] y sacamos a los paquetes y los subimos a la camioneta estaquitas y quien iba manejando la estaquitas era el [...] y atrás vamos el de la voz, "El Jona" y "El Chereje", y en la camioneta de 3 toneladas y media iba manejando el [...] y atrás observé que abordaron "El Pato", "El Cepillo", [...], [...], [...], [...] y "El Cepillo" le ordenó [...] que se quedara en la casa de seguridad, por lo que nos trasladamos al basurero de Cocula [...]. (Lo resaltado no es de origen).

LOS  
ACED  
ITD  
PAS

950. También, más adelante, en la nota 571, en la que se hace referencia a la reconstrucción de la "Ruta de Desaparición", se afirma:

• "El 11 de abril de 2015" se realizó la diligencia con Miguel Ángel Landa Bahena, de la cual se obtuvo la ubicación de la casa de seguridad en la Colonia Barrio de la Plata en el Municipio de Cocula, Guerrero, en la que mantuvieron privados de su libertad aproximadamente a 8 estudiantes previos instantes a ser trasladados al basurero de Cocula."

951. Lo anterior deja claro que la autoridad ministerial practicó diligencias con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] el diez y el once de abril de dos mil quince

952. Sin embargo, si el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, ya había librado una orden de aprehensión en su contra, desde el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, el inculpado debió haber sido puesto inmediatamente a disposición de la referida autoridad judicial.

953. Al respecto, el artículo 16 constitucional, en su tercer párrafo, es muy claro al señalar:

**“Artículo 16 ..**

[..]

*La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.*

[...]” (Lo resaltado no es de origen).

954. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado sobre ese tema, que el texto constitucional debe leerse en sentido literal y



restringido, de modo que la puesta a disposición de la autoridad judicial se realice sin demora.

955. Así se desprende de la tesis **1a. CCXCVIII/2016 (10a.)**, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro **2013212**, que es del contenido siguiente:

**"ORDEN DE APREHENSIÓN. ORIGEN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ORDENA INMEDIATEZ EN SU EJECUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, TERCER PÁRRAFO, ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROCESAL PENAL DE 18 JUNIO DE 2008).**

De la exposición de motivos que dio origen al párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, se concluye que la expresión "sin dilación" ahí contenida, debe entenderse en un sentido literal y restringido. Antes de esta reforma, la sanción aplicable a la autoridad que actuaba con demora se encontraba prevista en los dos últimos párrafos del artículo 107 constitucional, fracción XVIII, los cuales ordenaban consignar a la autoridad que no pusiere al detenido a disposición de su juez dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión, excepto si la detención se verificaba fuera del lugar en que éste residía, en cuyo caso, al término mencionado se agregaba el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y aquel donde se había efectuado la detención. La iniciativa de reforma de 1993 dio al Órgano Constituyente la oportunidad de analizar un proyecto de reforma que trasladaba el contenido de los dos últimos

párrafos del artículo 107 constitucional al tercer párrafo del artículo 16. Sin embargo, en el debate se aprobó el tercer párrafo aquí interpretado, que eliminó el término de veinticuatro horas. Para la Primera Sala, el análisis genealógico de esta reforma tiene implicaciones claras el constituyente permanente estimó que el término de veinticuatro horas -que anteriormente regulaba el lapso máximo entre la ejecución de una orden de aprehensión y la puesta a disposición de la persona- era innecesariamente amplio. Así, estamos frente a un supuesto en el cual la autoridad ejecutora en realidad no necesita realizar diligencias motu proprio. En esta materia, además, por analogía debe atenderse al desarrollo jurisprudencial que la Primera Sala ha realizado sobre el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, que establece el derecho de la persona detenida en flagrancia a ser puesta a disposición sin demora ante la autoridad más próxima. La autoridad ejecutante no puede justificar el retraso apelando a argumentos vagos sobre, por ejemplo, el debido cumplimiento de deberes administrativos u otras razones vinculadas con alguna supuesta búsqueda y/o hallazgo de indicios. La duración de la puesta a disposición sólo permite justificación en estricta relación con la distancia recorrida. En este sentido, el órgano jurisdiccional que controla el respeto al mandato de inmediatez debe valorar si el número de minutos u horas transcurridas guarda una proporción directa y razonable con la distancia que existe entre el lugar de la aprehensión y la ubicación del juez ante el cual la persona es puesta a disposición."

956. En este orden de ideas, si las autoridades ministeriales, en lugar de poner al inculpado inmediatamente a disposición del juez federal, procedieron al desahogo de diversas



diligencias, resulta claro que el mencionado texto constitucional fue infringido.

957. En efecto, el artículo 16, tercer párrafo, de la Ley Fundamental, no autoriza de modo alguno a que la autoridad ministerial primero practique diligencias durante uno o dos días, y luego ya se ponga a la persona a disposición del juez.

958. Por el contrario, se establece que de hacerlo así, será sancionado por la ley penal, incluso, como se vio, el Alto Tribunal ha sustentado criterio jurisprudencial, en el sentido de que la norma constitucional debe leerse de manera literal y restringida.

959. En consecuencia, la única alternativa para considerar que se respeta el texto constitucional, es que la persona contra la que se ha librado una orden de aprehensión, sea puesta inmediatamente, sin demora alguna, a disposición del juez.

960. No se descarta la posibilidad de que [REDACTED], [REDACTED], pudo haber sido detenido en la comisión de diverso delito flagrante, que ameritara su detención.

961. Sin embargo, aun en ese supuesto, la cumplimentación de la orden de aprehensión debió haberse llevado a cabo desde entonces.

962. Cabe decir que quizá en algunos casos no se tiene conocimiento de que la persona detenida tiene una orden de aprehensión en su contra.
963. No obstante, ése no pudo haber sido el caso, pues dada la relevancia nacional e internacional del presente asunto, resultaría inadmisibles aludir al desconocimiento del mandamiento judicial de captura.
964. Además, en el informe público de la Procuraduría General de la República, específicamente en la nota 556, se indicó que el ocho de abril de dos mil quince, se solicitó a la Policía Federal, que cumplimentara la orden de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada -la cual fue librada desde el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce-.
965. Lo que corrobora que la autoridad ministerial tenía presente el dato relativo a la orden de aprehensión dictada en la presente causa penal, por lo que debió poner al inculpado inmediatamente a disposición del Juez de Distrito.
966. Por tanto, debe darse vista al Titular o Encargado de la Procuraduría General de la República, a fin de que se investigue a todos los funcionarios responsables de la omisión de poner a [REDACTED] el [REDACTED] i [REDACTED] [REDACTED]





“[REDACTED] inmediatamente a disposición del Juez de Distrito, aspecto que se precisará más adelante.

967. Pues bien, a la luz de todas esas circunstancias, debe analizarse si la investigación emprendida por la Procuraduría General de la República, cumple con las características delineadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, las exigencias atinentes a ser:

- ✓ a) Inmediata,
- ✓ b) Efectiva,
- ✓ c) Independiente, e
- ✓ d) Imparcial.

25  
100  
700  
15

968. ► En relación al requisito identificado con el inciso a), es decir, que la investigación sea inmediata, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el transcurso del tiempo juega un papel preponderante en este tipo de casos, pues puede dar lugar a la imposibilidad de obtener y presentar ciertas pruebas.

969. Así lo indicó en la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada en el **Caso Favela Nova Brasilia contra Brasil**, en la que señaló lo siguiente:

*"181. La Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecta indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad."*

970. En el caso, si bien se inició una averiguación previa desde los primeros momentos; lo cierto es que existieron claras omisiones en la recaudación de pruebas, que por su naturaleza, exigía un despliegue prácticamente inmediato; por ejemplo, no se procuró recabar las videograbaciones del C-4.

971. Sobre ese tema, en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, se explica que *"tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 2015"*<sup>336</sup>.

972. Es decir, para ese entonces, **ya habían transcurrido ocho meses**, y en todo ese tiempo, ninguno de los Fiscales de la Procuraduría General de la República, ni siquiera los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría **Especializada de Investigación** en

<sup>336</sup> Página 317 del referido documento.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Delincuencia Organizada (SEIDO), consideraron la posibilidad de requerir esas filmaciones.

973. Se estima que de haber actuado con la debida celeridad, no sólo se habrían recuperado esas videograbaciones, sino muy probablemente la totalidad de los registros filmicos, tanto del C-4, como de cualquier otra dependencia, o bien, de los propios particulares.

974. Es muy probable, que de no haber sido por la intervención de los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera esos tres videos se habrían podido recuperar.

975. Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI<sup>337</sup>, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido.

976. Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada

<sup>337</sup> Páginas 172, 174, 386 y 388 del referido documento.

d personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial.

977. Lo que debió suceder por mero sentido común, más aun, cuando la dependencia, por la naturaleza de sus funciones, necesariamente cuenta con servidores públicos que conocen el derecho, y por ende, sabían las consecuencias jurídicas que podría conllevar la destrucción de esas pruebas.

978. Por lo que se impone dar vista al Titular o Encargado de la Procuraduría General de la República, en los términos que se precisarán más adelante.

979. Además, de los autos remitidos, tampoco se aprecia que se hubieran recabado con la debida oportunidad, las declaraciones de los elementos de la Policía Estatal, Policía Federal y del Ejército Mexicano, que laboraron el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en Iguala, Guerrero, así como de otros testigos, como por ejemplo, los comerciantes cuyos negocios se ubican cerca de los lugares donde se suscitaron los diferentes ataques.

980. Como se vio previamente, tampoco se han esclarecido las situaciones de posible tortura a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que fueron sometidos diversos detenidos; tan es así, que el dictamen médico-psicológico, a la fecha, no se ha practicado respecto a la totalidad de las personas, y dicho sea de paso, no se encomendaron dichos estudios a investigadores ajenos a la PGR, como tendría que haber sucedido en el caso concreto, de acuerdo a los parámetros que establece el propio Protocolo de Estambul, situación que ya fue ampliamente expuesta en diverso apartado.

981. Todo lo cual da cuenta de que, tanto en su inicio, como ahora, la investigación no se ha conducido con la debida celeridad.

982. Al respecto, cabe agregar que al resolver el **Caso Acosta contra Nicaragua**, el **25 de marzo de 2017**, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró su jurisprudencia sobre la obligación de los Estados de asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

983. Para mayor claridad, se transcribe el fragmento correspondiente de dicho fallo, enseguida:

"131. De conformidad con la Convención Americana, los Estados Parte están

*obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1). Asimismo, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables."*

984. En el caso, es evidente que la investigación no ha sido rápida, tomando en cuenta que los hechos datan del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, es decir, han transcurrido más de tres años y medio, sin que pueda considerarse que se haya arribado a la verdad, lo que resulta preocupante.

985. ► Tampoco puede estimarse que la investigación haya satisfecho la **exigencia identificada con el inciso b)**, atinente a que sea **efectiva**.

986. Así es, no pasa inadvertido que la Fiscalía ha planteado una teoría del caso, según la cual, los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados: sus cuerpos incinerados en el



basurero de Cocula; y sus restos depositados en bolsas plásticas que se arrojaron al Río San Juan.

987. Sin embargo, como se vio, la investigación que dio origen a dicha versión, presenta varios cuestionamientos, que derivan de las situaciones que ya han sido abordadas en esta ejecutoria, y que para efectos ilustrativos, se sintetizan enseguida:

1) Órdenes de localización, búsqueda y presentación que se emiten para obtener la comparecencia voluntaria de personas, que sin embargo, al ser localizadas, no aparece que se haya recabado su consentimiento para llevarlos a la presencia ministerial.

2) Demora en la puesta a disposición de detenidos, así como de personas objeto de órdenes de presentación.

3) Acuerdos de retención que se emiten una vez que se cumplimentan las órdenes de búsqueda, localización y presentación; sin haber recabado siquiera la declaración de las personas, que supuestamente era el objetivo del mandamiento.

4) Presencia de lesiones en la mayoría de los detenidos y presentados, a pesar de no haberse suscitado situaciones violentas en su localización y aseguramiento.

DOSS  
GLADO  
CUTTO  
ALIPAS

5) En algunos casos, aparición o incremento de lesiones que en un primer momento no presentaban los detenidos, situaciones que se dieron a partir de que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en particular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

6) Omisión de investigar actos de tortura de manera inmediata, seria independiente y minuciosa

988. En relación a esos temas, también se pronunció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al emitir el *Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa*, intitulado "*Doble injusticia*", el cual se hizo referencia a un caso en el que existen señalamientos sobre:

7) El fallecimiento de Emmanue Alejandro Bias Patino, a consecuencia de la tortura a que habría sido sometido por sus aprehensores<sup>338</sup>.

989. Tal situación es de la mayor gravedad, por lo que **se impone dar vista al Procurador General de la República, en los términos que se precisarán más adelante.**

<sup>338</sup> Páginas 32 a 34 del documento





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

990. Siguiendo con el análisis respectivo, del contraste con los autos en relación al contenido del *"Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero"*, emitido por la Procuraduría General de la República, se advirtió que también se incurrió en:

8) Inobservancia al deber de poner inmediatamente a disposición del juez de la causa, al quejoso [REDACTED], pues en lugar de ello, como se vio, se procedió a la práctica de diversas actuaciones ministeriales, con lo que se inobservó el artículo 16, tercer párrafo, constitucional, que previene el deber de la autoridad que ejecuta una orden de aprehensión, de poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna.

991. Aunado a dichas inconsistencias, el GIEI documentó diversas situaciones que también dan cuenta de la falta de exhaustividad en la investigación de la Procuraduría General de la República, entre las que destacan las siguientes:

9) Ausencia de investigación y procesamiento del autobús [REDACTED] [REDACTED] (quinto autobús)<sup>339</sup>.

10) Diferencias entre el autobús presentado como tal (autobús 32/8), con respecto a las imágenes del video de la central camionera<sup>340</sup>.

11) Deficiencias en el procesamiento de las diversas escenas del crimen<sup>341</sup>.

12) Traslado del detenido [REDACTED] a [REDACTED] a uno de los escenarios que sería materia de diligencias al día siguiente, sin presencia de su defensor, y sin que se refleje dicha actuación en el expediente.

13) Vinculado a lo anterior, despliegue de actividades de investigación y toma de indicios en el escenario del Río San Juan, sin requerimiento previo ni presencia del Fiscal.

14) Retraso en la solicitud de asistencia jurídica internacional, recomendada por el GIEI, en torno a un antecedente de trasiego de

<sup>339</sup> Páginas 188 a 191 y 322 a 325 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI así como páginas 232 a 245 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>340</sup> Páginas 188 a 191 y 322 a 325 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI

<sup>341</sup> Páginas 163 a 170 y 429 a 475 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI así como páginas 162 y 163 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

drogas mediante la utilización de autobuses comerciales, la cual se estaba llevando a cabo en la Unión Americana, específicamente, en el Estado de Illinois<sup>342</sup>.

15) Ausencia de acciones lógicas para fortalecer líneas de investigación, como intervenir los teléfonos de los probables responsables<sup>343</sup>.

16) Abstención de recabar declaraciones de personas que estuvieron privadas de la libertad en las celdas de la Comandancia de Iguala, así como del encargado de barandillas la noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce<sup>344</sup>.

17) Falta de obtención de muestras suficientes de escritura para analizar el manuscrito atribuido al chofer del quinto autobús<sup>345</sup>.

YOS  
4030  
1700  
A8

<sup>342</sup> Páginas 192, 320 y 321 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI; así como página 7 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas.

<sup>343</sup> Página 233 del Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI.

<sup>344</sup> Páginas 84 a del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>345</sup> Páginas 238 a 240 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas.

**18)** Ausencia de autorización al GIEI para reentrevistar a inculpados detenidos<sup>346</sup>.

**19)** Negativa o retraso en toma de declaraciones de autoridades políticas y de seguridad<sup>347</sup>.

**20)** Limitaciones al GIEI para desarrollar su investigación<sup>348</sup>.

**21)** Insistencia en líneas de investigación carentes de consistencia, tales como una supuesta infiltración de estudiantes en grupos delincuenciales<sup>349</sup>.

**22)** Minimización del contenido y conclusiones de los dictámenes periciales relacionados con la incineración de los estudiantes en el Basurero de Cocula, practicados por expertos independientes de reconocimiento internacional (Doctor José L. Torero y Equipo Argentino de Antropología Forense)

**23)** Secrecía o confidencialidad con la que se ha tratado el contenido del cuarto dictamen

<sup>346</sup> Páginas 165 y 166 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>347</sup> Página 166 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>348</sup> Páginas 179 a 182 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>349</sup> Páginas 182 a 184 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas



pericial en materia de fuego<sup>350</sup>. (No sobra señalar que tal proceder contrasta con los parámetros interamericanos, sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de ser informados de todo lo sucedido en relación a las graves violaciones de derechos humanos).

24) Negativa a que el GIEI estuviera presente mientras se examinaba nuevamente a los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería, así como falta de atención a sus requerimientos de obtener información documental y originales de fotografías capturadas por sus miembros<sup>351</sup>.

992. Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó precedente el 25 de noviembre de 2003, al resolver el **Caso Myrna Mack Chang contra Guatemala**, en el que estableció que en las investigaciones atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger la información del Estado, con respecto a la necesidad de proteger a las personas, contra los actos ilícitos cometidos por sus agentes; por lo que la entrega de la información no debe depender exclusivamente de un órgano estatal,

<sup>350</sup> Páginas 266 y 267 Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

<sup>351</sup> Páginas 173 a 175 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas

sino que debe estar sujeta a los controles de otros poderes u órganos del Estado.

993. Para mayor claridad, se reproduce la parte conducente del fallo, en el que se señaló lo siguiente:

*"181. El Tribunal comparte lo señalado por la Comisión Interamericana en cuanto a que:*

**[e]n el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por el otro lado.**

*[...L]os poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos. En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial puede ser considerado como un intento de privilegiar la "clandestinidad del Ejecutivo" y perpetuar la impunidad.

Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. 'No se trata pues de negar que el Gobierno deba seguir siendo depositario de los secretos de Estado, sino de afirmar que en materia tan trascendente, su actuación debe estar sometida a los controles de los otros poderes del Estado o de un órgano que garantice el respeto al principio de división de los poderes...'. De esta manera, lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho y una tutela judicial efectiva 'no es que haya secretos, sino estos secretos escapen de la ley, esto es, que el poder tenga ámbitos en los que no es responsable porque no están regulados jurídicamente y que por tanto están al margen de todo sistema de control...'. (Lo resaltado no es de origen).

RDROS  
EGIADO  
ECUITO  
JLIPANE

994. Del mismo modo, destaca lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el

30 de noviembre de 2016. en el **Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal contra Guatemala**, en el que señaló que las autoridades deben abstenerse de obstaculizar la investigación.

995. Enseguida se transcribe una parte del fallo, en la que el referido tribunal internacional señaló lo siguiente:

**"231. Por último, esta Corte ha señalado que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la obtención de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo.** Al respecto, el Tribunal constató que, ante la solicitud del Juez de Primera Instancia de 7 de mayo de 1993 de los nombres de las personas que se desempeñaban como comisionados militares y ayudantes de comisionados en el municipio de Rabinal en 1982, así como información sobre si se les asignó alguna comisión el 8 de enero de ese año, el Comandante de Reservas Militares respondió el 9 de mayo de 1993, que "durante el año 1982 no existían comisionados militares en dicha aldea ya que esa área era tomada como zona de operaciones de la delincuencia terrorista[...] así [. ] no pudo nombrarse





ninguna comisión el 8 de enero de 1982". Como se ha señalado, según la CEH, el municipio de Rabinal fue considerado por el Ejército como un área estratégica durante el conflicto armado interno, y entre los años 1981 y 1983 grupos militares o paramilitares asesinaron por lo menos un 20% de la población del municipio (supra párr. 84). Además, fueron miembros del Ejército de Guatemala asignados al destacamento de Rabinal, policías judiciales y comisionados militares quienes perpetraron la masacre en la clínica de la aldea Chichupac el 8 de enero de 1982 (supra párrs. 89 y 90). Así, esta negación de la existencia de comisionados militares en la zona en el año 1982, y de la presencia y participación de militares en operaciones, constituyó un claro intento de ocultar los nombres de las personas posiblemente responsables de la masacre." (Lo resaltado no es de origen).

996. Pues bien, todos esos aspectos que han quedado puntualizados, dan cuenta de que la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, no puede considerarse que cumpla con el requisito puntualizado bajo el inciso b), relativo al que sea efectiva, a la luz de los parámetros exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

997. ► Enseguida se procede al análisis relativo al requisito identificado con el inciso c), esto es, independencia de la autoridad investigadora, el cual guarda estrecha relación con el tema a que se refiere el inciso d), relativo a su imparcialidad.

998. Cabe decir, que el artículo 21 constitucional prevé que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, pues en su primer párrafo, actualmente reformado, pero aplicable al presente asunto, dispone lo siguiente:

*“Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.*

...” (Lo resaltado no es de origen).



999. En relación a la figura del Procurador General de la República, no pasa inadvertido que mediante Decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, entre otros aspectos, se estableció la figura de la Fiscalía General de la República.

1000. Sin embargo, su entrada en vigor se supeditó tanto a la vigencia de las normas secundarias correspondientes, como a que el Congreso de la Unión emitiera una declaratoria expresa, lo que no ha acontecido.

1001. Así se desprende del artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional, del contenido siguiente:

***“Décimo Sexto.** Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las*

normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102 Apartado A. de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo "

1002.       Precisado lo anterior, cabe señalar que actualmente, el Procurador General de la República es designado por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado.

1003.       Así se desprende del artículo 89, fracción IX, en relación con el 76 fracción II, de la Constitución, que disponen lo siguiente:

**"Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[...]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*IX. Designar, con ratificación del Senado,  
al Procurador General de la República.*

[...]"

*"Artículo 76. Son facultades exclusivas  
del Senado:*

[...]

*II. Ratificar los nombramientos que el  
mismo funcionario haga del Procurador  
General de la República, embajadores,  
cónsules generales, empleados superiores de  
Hacienda, integrantes de los órganos  
colegiados encargados de la regulación en  
materia de telecomunicaciones, energía y  
competencia económica, coroneles y demás  
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza  
Aérea Nacionales, en los términos que la ley  
disponga;*

[...] (Lo resaltado no es de origen).

1004. Luego, en la parte conducente del artículo  
102, apartado A, de la Constitución, en la  
redacción aplicable al presente asunto, al final  
de su primer párrafo, establece la libre facultad  
del Presidente de la República, para remover al  
Procurador General de la República.

1005. Enseguida se reproduce el  
mencionado precepto constitucional:

*"Artículo 102.*

**A.** La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. **El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.** Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. **El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.**

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.



*El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.*

*En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.*

*El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.*

*La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.*

[...]

1006. De lo expuesto se sigue que corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, y que en el ámbito federal, el titular de dicha dependencia es nombrado mediante la designación del Presidente de la República, con la ratificación del Senado; en tanto que su remoción constituye una libre facultad del Titular del Ejecutivo Federal.

1007. Cabe recapitular que en el caso concreto, en los eventos del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno, así como del Ejército Mexicano.
1008. Como se señaló previamente, dicha presencia es suficiente para que se investigue exhaustivamente su participación, incluso, si se incurrió en responsabilidad por omisión en atención a su posición de garantes.
1009. Ahora, en el caso del Ejército Mexicano, se trata de un instituto armado, cuyo Mando Supremo lo tiene el Presidente de la República<sup>352</sup>, por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional, y éste último es designado libremente por aquél, de conformidad con el artículo 89, fracción II, constitucional<sup>353</sup>, y 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos<sup>354</sup>.

<sup>352</sup> **"Artículo 11.** El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional, para el efecto, durante su mandato, se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas."

<sup>353</sup> **"Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes

[ ]

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes

[ ]

<sup>354</sup> **"Artículo 14.** Son facultades del Mando Supremo

I. Nombrar al Secretario de la Defensa Nacional

[ ]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1010. Por su parte, la Policía Federal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación<sup>355</sup>, cuyo titular también es libremente designado por el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Policía Federal, que señala lo siguiente:

*"Artículo 6. El Comisionado General tendrá el más alto rango en la institución de la Policía Federal sobre la cual ejercerá las atribuciones de mando, dirección y disciplina, y será nombrado y removido libremente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del Secretario."*

1011. Las atribuciones del referido Comisionado General, guardan una estrecha relación institucional con el Titular de la Secretaría de la que se desprende la corporación, a quien incluso, debe informársele sobre el desempeño de la Policía Federal, según se advierte del contenido del artículo 10, fracción XIV, de la citada Ley de la Policía Federal:

*"Artículo 10. Son atribuciones del Comisionado General de la Policía Federal:*

*[...]*

*XIV. Informar al Secretario, con la periodicidad que él determine, sobre el*

<sup>355</sup> <https://www.gob.mx/policiafederal/que-hacemos>

RDOT  
EGIAERO  
SCUITO  
JLIPAS

*desempeño de las atribuciones de la Policía Federal y de los resultados alcanzados:*

[...].

1012. Además de lo anterior, incluso el Presidente de la República, también designa al responsable de la Unidad de Asuntos Internos, a la que se encomienda la instauración de los procedimientos disciplinarios contra su personal, como se desprende de la parte conducente del artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, que señala:

***“Artículo 31.*** *El procedimiento que se instaure a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Consejo Federal iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que corresponda, dirigida al Presidente del Consejo Federal y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.*

*El presidente resolverá si ha lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente.*

*En caso procedente, resolverá si el asunto se instruirá por el Pleno, alguna comisión o comité del propio Consejo Federal.*

**El responsable de la Unidad de Asuntos Internos será nombrado por el**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Presidente de la República:** contará con autonomía de gestión y tendrá, además de la atribución de supervisión de las operaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 8 de esta Ley, las que el Reglamento le otorgue." (Lo resaltado no es de origen).

1013. En este orden de ideas, se tiene que tanto el Ejército Mexicano, como la Policía Federal, tienen una relación de subordinación con respecto al Presidente de la República.

1014. Por su parte, el órgano investigador, es decir, la Procuraduría General de la República, también guarda una relación de subordinación con respecto al Titular del Ejecutivo Federal, en principio, derivado de las facultades de éste en la designación y remoción del funcionario.

1015. También, por el hecho de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República<sup>356</sup>, el Presidente de México, también interviene en la designación de subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General de dicha dependencia.

1016. Además, el artículo 4, fracción II, inciso b), deja en claro dicha subordinación, al prever como obligación del Procurador General de la

<sup>356</sup> "Artículo 18. Los subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador General de la República."

República, mantener informado al Titular del Ejecutivo Federal sobre los asuntos relevantes, e incluso, disponer que su desistimiento en esos casos, requiere el acuerdo escrito del Presidente

1017. Para mayor claridad, enseguida se reproduce el contenido de la parte conducente de dicho artículo:

***“Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación.***

*[...]*

*Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el Procurador General de la República deberá mantener informado al Presidente de la República de los casos relevantes, y requerirá de su acuerdo por escrito para el desistimiento.’*

1018. Entonces tanto el órgano investigador, como al menos dos de las dependencias que deben ser puntualmente investigadas, tienen en común ciertas notas de subordinación al Titular del Ejecutivo Federal.

1019. Esto es, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de remover libremente al Procurador General de la República.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1020. De esa forma, el titular de la autoridad investigadora, no sólo carece de inamovilidad, sino que su permanencia en el cargo está sujeta a una decisión discrecional del Titular del Ejecutivo Federal, que a su vez, es el Comandante Supremo de una de las corporaciones que debe investigarse.

1021. Respecto a la otra autoridad (Policía Federal), ésta guarda estrecha relación con la Secretaría de Gobernación, cuyo titular integra el gabinete del Titular del Ejecutivo Federal, pero además, como se vio, es al propio Presidente de la República a quien corresponde la designación y remoción del funcionario con más rango en la Policía Federal, e incluso, también le corresponde la designación del responsable de su unidad de Asuntos Internos.

RECIBIDO  
REGISTRO  
CUI  
JULIAS

1022. Por consiguiente, entre el órgano indagador y dos de las dependencias que deben ser investigadas, existe una común subordinación hacia un mismo funcionario, en este caso, el Presidente de la República.

1023. Dicho sea de paso, en el contexto político nacional, constituye un hecho notorio que existen profundas manifestaciones en contra de la designación del Fiscal General de la República, por parte del Titular del Ejecutivo

Federal, lo que se ha conocido coloquialmente como "No al Fiscal-Carnal".

1024. Así, tal situación evoca la oposición manifestada de que la figura del Fiscal, recaiga en una persona cercana o afín a la persona que deba ser investigada por algún motivo, precisamente derivado del cuestionamiento a la autonomía e independencia que ello podría significar.

1025. Ahora, cabe decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que los criterios de independencia e imparcialidad deben estar presentes desde la investigación.

1026. Así se desprende de la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada por dicho tribunal internacional, en el **Caso Favela Nova Brasilia contra Brasil**, en la que indicó lo siguiente:

***"B.2. Estándares sobre independencia de los órganos investigadores en casos de muerte derivada de intervención policial.***

183. Respecto al rol de los órganos encargados de la investigación y del proceso penal, la Corte recuerda que **todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el**



**respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.**

184. El Tribunal ha establecido que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede tener que analizar los procedimientos que se vinculan y constituyen el presupuesto de un proceso judicial, particularmente, las tareas de investigación de cuyo resultado depende el inicio y el avance del mismo.

185. **Todas las exigencias del debido proceso** previstas en el artículo 8.1 de la Convención, **así como criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial**, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere." (Lo resaltado no es de origen).

1027. En el mismo fallo, precisó que en los casos en los que se cuestione la independencia o imparcialidad del órgano investigador, debe

ejercerse un escrutinio particularmente riguroso, para verificar dichos extremos, así como su impacto en la eficacia de la investigación, al señalar lo siguiente:

"190. Si la independencia o la imparcialidad del órgano investigador son cuestionadas, el Tribunal debe ejercer un escrutinio más estricto para verificar si la investigación fue realizada de manera independiente e imparcial. Asimismo, se debe examinar si, y hasta qué medida, la alegada falta de independencia e imparcialidad impactó la efectividad del procedimiento para determinar lo ocurrido y sancionar a los responsables. Algunos criterios esenciales, los cuales están interrelacionados, deben ser observados para establecer la efectividad de la investigación en esos casos: i) la adecuación de las medidas de investigación; ii) la celeridad de la misma, y iii) la participación de la familia de la persona muerta y iv) la independencia de la investigación. Asimismo, en casos de muerte provocada por intervención de un agente policial, la investigación para ser efectiva debe ser capaz de demostrar si el uso de la fuerza fue o no justificado en razón de las circunstancias. En ese tipo de casos, a las autoridades domésticas debe aplicarse un





**escrutinio particularmente riguroso en lo que se refiere a la investigación.**

191. Finalmente, en lo que respecta a la intervención de órganos de supervisión de la investigación o del poder judicial, es necesario hacer notar que en algunas ocasiones las fallas de la investigación pueden ser remediadas, pero en otros casos eso no es posible en virtud del estado avanzado de la misma y de la magnitud de las falencias ocasionadas por el órgano investigador." (Lo resaltado no es de origen).

1028. Partiendo de lo expuesto, a fin de determinar si la investigación se ha efectuado con imparcialidad, cabe recapitular que en el caso, se da la circunstancia de que tanto el órgano investigador, como al menos dos de las dependencias que deben ser investigadas, tienen cierto grado de subordinación hacia el Presidente de la República, lo que actualiza una especie de conflicto de interés natural.

1029. Esto es, hay probables responsables que no sólo pertenecen al mismo aparato burocrático del Ejecutivo Federal, sino que además, se trata de autoridades con estrecha relación institucional entre sí, lo que conlleva que se dé entre ellas una amplia comunicación, contacto y colaboración continua desde hace muchos años.

1030. Tan es así, que de conformidad con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública<sup>357</sup>, dichas autoridades, entre otras, integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya conformación y coordinación está regulada en los artículos 12 y 7, respectivamente, que disponen lo siguiente:

***“Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:***

***I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;***

***II. El Secretario de Gobernación;***

***III. El Secretario de la Defensa Nacional;***

***IV. El Secretario de Marina;***

***V. El Secretario de Seguridad Pública;***

***VI. El Procurador General de la República;***

***VII. Los Gobernadores de los Estados;***

***VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y***

***IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.***

*El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente*

*El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y*

<sup>357</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve



experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo." (Lo resaltado no es de origen).

**"Artículo 7.** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;

**V.** Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

**VI.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública

**VII.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

**VIII.** Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

**IX.** Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

**X.** Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública,

**XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;

**XII.** Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos;

**XIII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

**XIV.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

**XV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y

**XVI.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública."

1031. Así, resulta innegable el conflicto de interés que surge cuando investigador e investigados, tienen en común al mismo superior jerárquico, pero además, una estrecha relación institucional, que prevé la propia ley, sobre todo, si se toma en cuenta que, como se vio, se han advertido una serie de omisiones,

DOS  
GRABO  
QUITO  
LIPAS

retrasos e inconsistencias en la indagatoria, en especial respecto a las posibles líneas de investigación que apuntaban a esas dos autoridades, pues existen probables responsables que pertenecen a su misma estructura burocrática, y cuya participación no ha sido materia del análisis ministerial.

1032. En adición a lo expuesto, tanto de la causa penal como del Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, intitulado "Doble injusticia", se desprende que gran parte de los señalamientos de tortura se dirigen a personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, institución que como se ha visto, también guarda estrecha relación con el órgano investigador, tan es así que también integra el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en términos del artículo 12 de la ley general que regula dicho sistema.

1033. Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.



1034. Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial.

1035. Por tanto, la investigación no ha observado las exigencias antes referidas, a que se hizo amplia referencia, es decir, que sea:

- ✓ a) Inmediata.
- ✓ b) Efectiva.
- ✓ c) Independiente, e
- ✓ d) Imparcial.

1036. Cabe precisar que el hecho de que una investigación cumpla esas características, guarda estrecha relación con el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.

1037. Al respecto, en la sentencia de 23 de noviembre de 2009, dictada en el **Caso Radilla Pacheco contra México**, se destacó precisamente que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, y el Estado tiene la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva para arribar a la misma.

1038. Para mayor claridad, se reproduce un fragmento de dicho fallo, a continuación:

*"167. Asimismo, el Tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzada de*

personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares. En el presente caso han sido constatadas ante la Corte todas las gestiones realizadas por familiares del señor Bartula Pacheco, con ocasión de su desaparición, ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero, así como para impulsar las investigaciones correspondientes (infra párrs. 183 a 189. y 260 a 264).

[...]

180. Adicionalmente, la Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, **los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido**. De manera particular, la Corte ha establecido el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia en casos de desaparición forzada de personas. En tal sentido, ha confirmado la existencia de un "[d]erecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta





y, en su caso, dónde se encuentran sus restos". Además, correlativamente, en este tipo de casos se entiende que **los familiares de la persona desaparecida son víctimas de los hechos constitutivos de la desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados.** Así, la Corte recuerda que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. En consecuencia, en este caso no se pronunciará respecto del alegato de la supuesta violación del artículo 13 de la Convención Americana formulado por los representantes (supra párr. 5)." (Lo resaltado no es de origen).

1039. Ahora, la investigación debe estar orientada a la obtención de la verdad.

1040. La importancia del derecho a la verdad se ha reiterado en criterios recientes, como el contenido en la sentencia de 31 de agosto de 2017, al dictar la sentencia del **Caso Vereda La Esperanza contra Colombia.**

1041. Enseguida se reproduce la parte conducente de dicho fallo:

*"220. Respecto al derecho a la verdad este Tribunal recuerda que **toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad.** En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que este derecho a la verdad tiene autonomía ya que aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos contenidos en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso. La Corte ha considerado en su jurisprudencia, en particular **en casos de desaparición forzada, que el derecho a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas constituye un componente esencial del derecho a conocer la verdad.** Frente a la alegada negativa del Estado para desarrollar una investigación eficaz, la Corte se remite a lo ya dicho en esta sentencia con relación a este punto, y resalta que con respecto a la búsqueda de los involucrados se*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

pudo constatar que desde 1996 se han llevado a cabo diligencias de exhumaciones en cementerios municipales, entrevistas, inspecciones judiciales y búsqueda en la ribera de un río de la zona.

221. Si bien este Tribunal valora positivamente todas las acciones y los esfuerzos que se han llevado a cabo por el Estado colombiano para dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, lo cierto es que en el presente caso han transcurrido más de 20 años sin que se conozca actualmente el paradero de las mismas. Como ha reconocido este Tribunal en su jurisprudencia sobre desaparición forzada de personas, **uno de los componentes esenciales del derecho a conocer la verdad es el derecho de los familiares a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas; así, mientras no se establezca el paradero de las víctimas del presente caso, el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la verdad, toda vez que los familiares de las víctimas no pueden ver satisfecho este derecho mientras subsista la incertidumbre del paradero de las mismas. La incertidumbre sobre el paradero de los seres queridos es una de las principales fuentes de sufrimientos psíquico y moral de los familiares de las víctimas desaparecidas.**"

LA FEDERACIÓN

DOCS  
MAIO  
JITO  
PAS

1042. Como se ve, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró la importancia del **derecho de todas las personas, en especial, los familiares de las víctimas a conocer la verdad**; y que en casos de desaparición forzada de personas, uno de los componentes esenciales de ese derecho, lo constituye el conocer el paradero de las víctimas desaparecidas.

1043. El referido tribunal internacional, también ha reiterado que la determinación efectiva de los hechos, puede encontrar cabida en la vía penal, y que ésta constituye un medio para satisfacer los derechos de acceso a la justicia y de conocer la verdad. De ahí la importancia crucial de la investigación.

1044. Así se desprende de la sentencia de 25 de marzo de 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el **Caso Acosta y otros contra Nicaragua**, en la que señaló:

*“Consideraciones de la Corte*

*131. De conformidad con la Convención Americana, los Estados Parte están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del*



debido proceso legal (artículo 8.1). Asimismo, el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables.

132. La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que, en casos de privación de la vida, es fundamental que los Estados identifiquen, investiguen efectivamente y, eventualmente, sancionen a sus responsables, pues de lo contrario se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos se repitan. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, que no dependa única o necesariamente de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos.

133. En casos anteriores, la Corte ha considerado que la determinación efectiva de los hechos en la vía penal tenía la posibilidad de constituir tanto la explicación suficiente y satisfactoria sobre la privación de la vida de una persona, como un medio para satisfacer los derechos de acceso a la justicia y de conocer la verdad de sus familiares. Así, se ha analizado si un proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, constituyó un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias de la privación de la vida. En ese sentido, se ha analizado si lo decidido formal y materialmente en el proceso penal puede considerarse, a la luz de lo dispuesto en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, como una adecuada motivación o fundamentación de la respuesta que las autoridades judiciales debieron dar al respecto. Por ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como el presente, también los derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad de los familiares, en relación con el artículo 25 de la Convención.

[...]



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**a) Falta de debida diligencia en la investigación**

135. En la investigación de la muerte violenta de una persona, es crucial la importancia que tienen las primeras etapas de la investigación y el impacto negativo que las omisiones e irregularidades en tales etapas puede tener en las perspectivas reales y efectivas de esclarecer el hecho. En este sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que son precisos observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta, tal como lo fue el homicidio del señor Francisco García Valle. Respecto de lo alegado por el Estado, en varios casos este Tribunal ha considerado que tales principios deben ser observados por las autoridades respectivas independientemente de que la muerte violenta sea calificable como una 'ejecución extrajudicial', que no es lo que se analiza en el presente caso.

136. Para que una investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. Es decir que debe sustanciarse por todos los medios legales disponibles y estar

**orientada a la determinación de la verdad**”

(Lo resaltado no es de origen).

1045. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista el contexto integral de los hechos, pues como se indicó anteriormente, además de a desaparición de los cuarenta y tres estudiantes, se tiene conocimiento de la muerte violenta de al menos seis personas, así como información que permite considerar que se trataron de ejecuciones extrajudiciales.

1046. Razón adicional para que la investigación cumpla el requisito de efectividad bajo los parámetros mencionados, que implican evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

1047. Así lo señaló la Corte Interamericana en la referida sentencia dictada en el **Caso Favela Nova Brasilia contra Brasil**, en la que indicó lo siguiente:

*“179. El cumplimiento de la obligación de emprender una investigación seria, imparcial y efectiva de lo ocurrido, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo de dicha investigación y de los medios legales disponibles a los familiares de la víctima fallecida, para garantizar que sean escuchados,*





así como que puedan participar durante el proceso de investigación.

180. La Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones de los derechos humanos se deben evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Al respecto, la Corte ha precisado que, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma [...] (Lo resaltado no es de origen).

ERL  
LEGIA  
RCUI  
ULIPAE

1048. No pasa inadvertido que el tribunal interamericano ha sostenido que el deber de investigar es de medios y no de resultados.

1049. Lo anterior puede explicarse como la imposibilidad de exigir al órgano investigador la obtención de determinado resultado; pero sí le es obligatorio y se le puede exigir la observancia de una metodología exhaustiva, ceñida al debido proceso, que aborde con seriedad las diversas y posibles líneas de investigación que surjan.

1050. Al respecto, en la sentencia de 31 de agosto de 2010 del **Caso Rosendo Cantú y**

otr contra México, se indicó que la investigación debe ser asumida por el Estado, como un deber jurídico, y no como una mera formalidad, y que debe realizarse con todos los medios legales posibles. para arribar a a verdad.

1051. Enseguida se reproduce la parte conducente de dicho fallo:

*"175. La Corte reitera que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. **El deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**disponibles, y orientada a la determinación de la verdad.**

176. La Corte también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Asimismo, el Tribunal ha señalado que **la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.** (Lo resaltado no es de origen).

LA FEDERACIÓN  
EXCELENCIA  
RDOS  
GIADO  
UITO  
LIPAS

1052. Estrechamente vinculado al derecho a la verdad, en el ámbito nacional destaca el

derecho fundamental de acceso a la justicia, que prevé el artículo 17 constitucional, el cual consagra el deber de las autoridades de aplicarla de manera pronta, completa, gratuita e imparcial.

1053. Derecho fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que debe ser observado por todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales

1054. Así se desprende de la **jurisprudencia 2a./J. 192/2007**, sustentada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 171257** que es del contenido siguiente:

**"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.** La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en



que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." (Lo resaltado no es de origen).

1055. De dicho criterio se desprende que la obligación de observar el derecho fundamental de acceso a la justicia corresponde no sólo a los órganos judiciales, sino a toda aquella autoridad que despliegue facultades

jurisdiccionales, como es el caso del Ministerio Público.

1056. De ahí que el referido órgano investigador esté obligado a llevar a cabo sus actuaciones ciñéndose al derecho fundamental de acceso a la justicia.

1057. Hasta lo aquí expuesto, se tiene que de conformidad con el artículo 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos.

1058. Asimismo, queda claro que el despliegue de sus facultades debe estar enfocado a la realización del **derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia**.

1059. La realización del **derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia**, no se limita a la observancia del artículo 17 constitucional, sino también a los preceptos 14 y 20 (especialmente los apartados de la víctima e inculpado), de la Carta Magna, en armonía con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

1060. Así se desprende de la **jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.)**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2015591**, que es del siguiente contenido:



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**"DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos, y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: 'GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.', la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los**

REGISTRACION  
73  
70  
38

*procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.” (Lo resaltado no es de origen).*

1061. Previamente se expuso lo relativo a derecho fundamental de acceso a la justicia, a que se refiere el artículo 17 constitucional.
1062. A continuación, se profundiza respecto al contenido de los artículos 14 y 20 de la Constitución, así como 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1063. En primer término, respecto al artículo 14 constitucional, contempla las formalidades esenciales de todo procedimiento, también conocidas como debido proceso, las que deben otorgarse al gobernado previo a la aplicación de determinado acto privativo, por ser indispensables para que se ejerza el correspondiente derecho de defensa.
1064. Así se desprende de la **jurisprudencia P.JJ. 47/95**, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 200234**, que es del contenido siguiente:

**“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE**





**GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.** La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

FEDERACIÓN  
CANON  
DOS  
ADO  
TO  
AS

1065. Posteriormente, se estableció que además del núcleo duro que integran las formalidades esenciales del procedimiento, o de debido proceso, existen otros derechos fundamentales específicos para determinadas materias.

1066. Así se advierte de la **jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.)**, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2005716**, que es del tenor siguiente:

**"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.** Dentro de las garantías del debido proceso existe un 'núcleo duro', que

debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al 'núcleo duro', las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la 'garantía de audiencia', las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.', sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la



primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." (Lo resaltado no es de origen).

1067. Ahora, el debido proceso tiene dos perspectivas, la de aquel que es sometido a un procedimiento jurisdiccional, y la de quien lo ha instado.

1068. Desde ambos extremos, es importante que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, pues respecto al primero, sólo así resultará válida la aplicación del acto privativo en su contra; y en relación al segundo, la inobservancia del debido proceso, puede dar lugar a hacer nugatorio su derecho.

1069. Son aplicables al respecto las tesis 1a. CCLXXVI/2013 (10a.) y 1a. IV/2014 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario judicial de la Federación, bajo los

registros 2004466 y 2005401, que son del siguiente contenido

**“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVE DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS.** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de rubro ‘DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.’, estableció que el citado precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la función



jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, **el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho**. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones." (Lo resaltado no es de origen).

**"DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.** El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio

del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo." (Lo resaltado no es de origen).

1070. En esa tesitura, como se ve, debe observarse el debido proceso desde el ámbito de todas las partes, en la inteligencia de que en adición al núcleo duro, pueden existir otros derechos específicos, según la materia de que se trate.

1071. En el caso, debe ponerse especial atención en el contenido del artículo 20 constitucional, en su redacción aplicable al presente asunto, que prevé los derechos fundamentales que asisten en un procedimiento penal, por un lado, al inculpado, y por otro, a la víctima u ofendido.



1072. El precepto constitucional en cuestión, en su redacción aplicable al sistema tradicional, es del siguiente contenido:

**"Artículo 20.** En todo proceso de orden penal, el inculcado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

**A. Del inculcado:**

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculcado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculcado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculcado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculcado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculcado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional.

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o

tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.

**III.** Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria

**IV.** Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este artículo.

**V.** Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.

**VI.** Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.

**VII.** Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

**VIII.** Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa

**IX.** Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o





por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

**X.** En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.

**B. De la víctima o del ofendido:**

**I.** Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

**II.** Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

**III.** Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

**IV.** Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público

*estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.*

*La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño:*

*V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y*

*VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio."*  
(Lo resaltado no es de origen).

1073. Como se ve, existe un elenco de derechos fundamentales específicos, tanto para el inculpado, como para la víctima u ofendido.

1074. Es importante tener presente, además, que como se dijo anteriormente, el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1 constitucional, para quedar redactado del modo siguiente:

**"Artículo 1o.** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.**

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." (Lo resaltado no es de origen).

1075. Así, de acuerdo con el contenido del segundo párrafo del citado precepto constitucional, las normas relativas a los derechos humanos, deben interpretarse de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

1076. En esa tesitura, es importante tener en cuenta el contenido del artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también destaca el derecho de toda persona a acceder a la justicia, al disponer lo siguiente:

***“Artículo 8. Garantías Judiciales***

*1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.*

*[. ]”*

1077. Pues bien, de la apreciación conjunta de los **artículos 14, 17 y 20 constitucionales**, en relación con el **artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos**



**Humanos, deriva el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia.**

1078. En tanto que el artículo 21 constitucional, señala que la investigación de los delitos incumbe al Ministerio Público.

1079. En el caso, como se vio, la actuación del **Ministerio Público** ha generado serios cuestionamientos, que han sido puntualizados previamente, los que dieron pie a concluir que **su investigación no ha sido**:

- ✓ a) Inmediata,
- ✓ b) Efectiva,
- ✓ c) Independiente, e
- ✓ d) Imparcial.

1080. Cabe destacar que dichas exigencias no sólo se advierte que hayan sido incumplidas por alguna sección de la Procuraduría General de la República, como lo es su Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), que inicialmente estuvo al frente de las indagaciones respectivas.

1081. Así es, tal y como se advierte de su Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas, tras una recomendación del propio GIEI, la investigación pasó de la SEIDO a la Subprocuraduría de

NOTA:  
SEIDO  
GIEI

Derechos Humanos, pese a lo cual, tampoco se advirtieron cambios sustanciales que permitan considerar que la indagación, en esa nueva fase, hubiera resultado inmediata, efectiva, independiente e imparcial<sup>359</sup>.

1082. Por lo que se considera que la inobservancia de las exigencias que amerita la investigación atañen en su integralidad a la Procuraduría General de la República, y no sólo a alguna de sus subprocuradurías.

1083. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispone que en los casos en que se advierta ausencia de imparcialidad o independencia en el órgano investigador, debe establecerse un procedimiento que permita que la investigación cumpla con las referidas exigencias.

1084. Cabe recordar que la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona, implica que ante varias alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos, o bien que los restrinja en la menor medida.

1085. Corrobora lo expuesto la **tesis 1a. XXVII/2012 (10a.)**, sustentada por la Primera

<sup>359</sup> Páginas 179 a 182, y 593 a 595 del Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas



Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2000263**, que es del contenido siguiente:

**"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el**

*análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.” (Lo resaltado no es de origen)*

1086. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el Ministerio Público es el único órgano del Estado competente para formular e impulsar la acusación penal, y que al hacerlo, despliega su carácter de representante social, y en su caso, la representación de la víctima u ofendido; sin embargo también dejó en claro que la intervención de estos últimos, debe permitirse.

1087. Así se desprende de la **tesis 1a. CXCI/2009**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 165954**, que es del tenor siguiente

**“MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL.** Conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos, lo que significa que es el único órgano estatal competente para formular e impulsar la acusación o imputación





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

delictiva. Así, la persecución e investigación de los delitos es una labor de carácter administrativo que por definición excluye a la judicial. Esto es, los artículos constitucionales aludidos deben leerse en el sentido de que establecen obligaciones a cargo del Ministerio Público, de manera que la investigación y persecución de los delitos no constituyen una prerrogativa a su cargo y, por tanto, no puede renunciar a su ejercicio, el cual es revisable en sede constitucional. Por otra parte, **la posesión del monopolio no debe entenderse en el sentido de que la Constitución General de la República prohíbe la intervención de la víctima o del ofendido** en el proceso penal como partes del mismo, en términos del artículo 20, apartado B, constitucional, pues el reconocimiento de este derecho coexiste con el indicado mandato constitucional a cargo del Ministerio Público. Así, a nivel constitucional también se dispone que deben existir medios de defensa que posibiliten la intervención de la víctima o del ofendido para efectos de impugnar, por ejemplo, el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la división competencial es clara en el sentido de que **el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social, y -de manera concomitante, aunque no necesaria- con la propia sociedad (cuando se trate de la víctima o el ofendido), en los términos que establece la propia Constitución Federal.**" (El realce no es de origen).

1088. Como se ve, pese a reconocerse la calidad de parte de la víctima u ofendido, también subyace el entendimiento de que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad en general, y concretamente, de las propias víctimas.

1089. Sin embargo en el caso, por un lado, debe tenerse en cuenta que en la propia teoría del caso, se asevera que en la afectación de las víctimas, habrían intervenido al menos policías municipales de Iguala y de Cocula.

1090. Y cuando en la afectación de las personas, han participado las propias autoridades, es altamente probable que se genere en las víctimas una ruptura en la confianza con el órgano oficial encargado de la investigación del caso.

1091. Por otra parte, se está ante un escenario en el que, entre otros aspectos se han dejado de recabar pruebas con la debida oportunidad, no se han agotado líneas lógicas de investigación, y existen múltiples cuestionamientos de tortura en las confesiones que sostienen la teoría del caso de la Fiscalía, además de la desacreditación por expertos independientes de reconocimiento internacional, de la versión tocante a la incineración en el basurero de Cocula, en los términos en que fue planteada.

1092. Vinculado a lo anterior, como hecho notorio, destaca que de manera pública, los familiares de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, han manifestado su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

insatisfacción con la investigación llevada a cabo por la autoridad ministerial.

1093. Muestra de ello, quedó registrada en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en audiencia celebrada el dos de marzo de dos mil dieciocho<sup>360</sup>, en la que se abordó el Mecanismo de Seguimiento del caso relativo a la desaparición de los estudiantes.

1094. En dicha sesión, los representantes de los cuarenta tres estudiantes desaparecidos, manifestaron su desacuerdo con la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, al grado tal de que tildaron como "la mentira histórica", la versión oficial sostenida por dicha autoridad, que había sido denominada por el propio Procurador como "la verdad histórica", en la que, como se dijo previamente, se planteó que la incineración de los cuarenta y tres estudiantes tuvo lugar en el basurero de Coçula, y que sus restos se habrían depositado en el Río San Juan.

1095. Tal situación se reiteró en el 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en

<sup>360</sup> Su contenido se encuentra disponible en el sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (<http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/167/default.asp>), y la sesión puede reproducirse en la siguiente liga: <https://youtu.be/RqE7sg2luLk>

audiencia celebrada el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la que nuevamente los familiares de los estudiantes se refirieron a la aludida versión oficial, como “la mentira histórica”<sup>361</sup>.

1096. Ahora, como se vio, del escrutinio sobre la investigación ministerial, este tribunal colegiado ha constatado que efectivamente, la misma no resultó pronta, eficaz, independiente ni imparcial; y a la luz de la jurisprudencia interamericana, tal situación debe ser remediada.

1097. La Corte Interamericana ha señalado que en una sociedad democrática, debe conocerse la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos; que las autoridades deben garantizar la efectividad de la investigación, y que ésta debe ser conducida tomando en cuenta su complejidad.

1098. También ha precisado que debe removerse cualquier obstáculo en la investigación, la que debe atender los estándares de las normas y jurisprudencia internacionales.

1099. Así se desprende de la sentencia de 30 de noviembre de 2016, dictada en el **Caso Miembros de la Aldea Chichupac y**

<sup>361</sup> La sesión puede reproducirse en la siguiente liga: [https://www.youtube.com/watch?v=3\\_hKI79W5c](https://www.youtube.com/watch?v=3_hKI79W5c)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

## Comunidades vecinas del Municipio de Rabinal contra Guatemala, en la que señaló:

"211. La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar **recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal.**

212. Asimismo, este Tribunal ha señalado que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. Por ello, **en ocasiones anteriores la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de las investigaciones tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los**

LA FEDERACIÓN  
DE GUATEMALA

DOS  
ADO  
TG  
45

patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los sucedidos en el presente caso. En aras de garantizar su efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y de la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo al contexto en que ocurrieron, particularmente en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Por ello, las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo.

213. Dada su importancia, la obligación de investigar en el presente caso no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

supone, en primer término, generar un marco normativo interno adecuado y/u organizar el sistema de administración de justicia de forma tal que su funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, sin dilación, serias y efectivas.

214. De igual modo, dicho **deber impone la remoción de todo obstáculo de jure y de facto que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas, así como la búsqueda de la verdad.** Por esta razón, en el presente caso, el cual versa sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones masivas y sistemáticas, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole." (Lo resaltado no es de origen).



1100. Del mismo modo, el referido tribunal interamericano también ha expresado que la privación continua de la verdad acerca del destino de una persona desaparecida, constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para sus familiares cercanos.

1101. Así lo indicó en sentencia de 29 de noviembre de 2006, al resolver el Caso La

Cantuta contra Perú, en la que señaló lo siguiente:

*"... 125 [...] la Corte recuerda que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos."*

1102. Al efecto, se considera que debe buscarse un procedimiento alternativo, que desde luego, atienda a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la vez, armonice con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1103. Así, en el **artículo 102 constitucional**, apartado A, antes mencionado, se alude a la **organización del Ministerio Público**; en tanto que **su apartado B, aborda lo tocante a un organismo de protección de los derechos humanos**, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, a saber, **la Comisión Nacional de los Derechos Humanos**.

1104. Para mayor claridad, enseguida se reproduce el referido texto constitucional:

***"Artículo 102.***

*[...]*

***B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el***





ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

*El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.*

*Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.*

*La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.*

*El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares

FEDERACIÓN  
JUDICIAL

DOS  
BIADO  
ITO  
PAS

*de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas."*

1105. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos<sup>362</sup>, el citado organismo tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

1106. Mientras que su integración, se prevé en el artículo 5 del referido ordenamiento, que señala lo siguiente:

**"Artículo 5.** *La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.*

*La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo.*"

1107. Asimismo, el artículo 6 de la citada ley, señala las atribuciones del organismo de referencia, al establecer lo siguiente:

<sup>362</sup> **"Artículo 2.** *La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.*



POD. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**"Artículo 6.** La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;

**II.** Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

**a)** Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;

**b)** Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;

**III.** Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IV.** Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA

ESTADOS  
FEDERADOS  
DE  
MÉJICO  
CUILO  
JULIPAS

citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política:

**V.** Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;

**VI.** Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

**VII.** Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

**VIII.** Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

**IX.** Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;

**X.** Expedir su Reglamento Interno;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**XI.** *Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;*

**XI Bis.** *Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;*

**XII.** *Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.*

*En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.*

*El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos;*

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y PODER JUDICIAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**XIII.** Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos:

**XIV.** Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos:

**XIV Bis.** La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

**XV.** Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, y

**XVI.** Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales "

1108. Lo anterior corrobora que las atribuciones del referido organismo autónomo, están enfocadas a la protección, observancia,





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

1109. Inclusive, mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, entre otros aspectos, se adicionó un último párrafo al apartado B del artículo 102 constitucional, en el que se estableció la facultad de dicho organismo, para investigar graves violaciones a los derechos humanos.

1110. No sobra señalar que hasta antes de dicha reforma, tan alta responsabilidad correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultad que se suprimió de ese Alto Tribunal, para trasladarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1111. Enseguida se visualizan las modificaciones constitucionales:

Redacción	Art. 97, segundo párrafo	Art. 102, apartado B.
Antes del	<u>La Suprema Corte de Justicia de la Nación</u> podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún	No existía alusión alguna en ese artículo

10 de junio  
de 2011

Estado, únicamente  
para que averigüe  
algún hecho o hechos  
que constituyan una  
grave violación de  
alguna garantía  
individual También  
podrá solicitar al  
Consejo de la  
Judicatura Federal que  
averigüe la conducta de  
algún juez o magistrado  
federal

La Suprema Corte de  
Justicia de la Nación  
podrá solicitar al  
Consejo de la  
Judicatura Federal que  
averigüe la conducta de  
algún juez o magistrado  
federal

Después del  
10 de junio  
de 2011

La Comisión  
Nacional de los  
Derechos Humanos  
podrá investigar  
hechos que  
constituyan  
violaciones graves  
de derechos  
humanos, cuando así  
lo juzgue conveniente  
o lo pidiere el  
Ejecutivo Federal,  
alguna de las  
Cámaras del  
Congreso de la Unión,  
los titulares de los  
poderes ejecutivos de  
las entidades  
federativas o las  
Legislaturas de éstas

(Lo resaltado no es de origen).

1112. El que se haya trasladado tan delicada responsabilidad, del Máximo Tribunal del país, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, da cuenta del reconocimiento alcanzado por dicho organismo autónomo lo que quedó reflejado en el propio texto constitucional.

1113. Ahora, en el caso, se está frente a un asunto que involucra graves violaciones a los derechos humanos, derivados, entre otros



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

377  
FORMA 55

613

eventos, de desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.

1114. Cabe destacar que existen múltiples referencias hacia la necesidad de que la investigación sea independiente.

1115. Al respecto, en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, el veintisiete de agosto al siete de septiembre de mil novecientos noventa, se establecieron los denominados **"Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley"**, dentro de los que destaca precisamente el punto 23, que señala lo siguiente<sup>363</sup>:

**"23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos."** (Lo resaltado no es de origen).

1116. El 5 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de dichos principios, al dictar

<sup>363</sup> Visible en el sitio web del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en la siguiente liga: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx>

sentencia en el **Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela**, en la cual, en base a los mismos, estableció que resultaba necesario que las autoridades competentes adoptaran las medidas necesarias para asegurar la independencia de hecho y de derecho en los funcionarios encargados de la investigación respectiva.

1117. Para mayor claridad se transcribe la parte conducente de dicho fallo a continuación:

*"79. Del mismo modo, la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería inefectiva, en la práctica, si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales. **Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado debe iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.***

*80. En todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.*



81. Asimismo, en este tipo de casos tiene una particular relevancia que las autoridades competentes adopten las medidas razonables para asegurar el material probatorio necesario para llevar a cabo la investigación y que gocen de independencia, de jure y de facto, de los funcionarios involucrados en los hechos. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real." (Lo resaltado no es de origen).

1118. Cabe decir que en diverso precedente, de 6 de abril de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el **Caso Baldeón García contra Perú**, en la que abordó la temática de una ejecución extrajudicial, y al efecto señaló la importancia de la independencia real en la autoridad investigadora, en los términos siguientes:

"95. Para que la investigación de una muerte sea efectiva es necesario que las personas responsables de aquella sean independientes, de jure y de facto, de los involucrados en los hechos. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real." (Lo resaltado no es de origen).

1119. En el mismo precedente, se destacó que el deber de investigar del Estado, no puede condicionarse a su normatividad interna, y que la omisión de dicho deber, genera responsabilidad internacional, al señalarse

*"347. En definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole.*

*Como ya ha señalado este Tribunal, en casos de vulneraciones graves a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos; y **su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado.**"* (Lo resaltado no es de origen).

1120. Dichas jurisprudencias del Tribunal Interamericano, fueron tomadas en consideración para la emisión del Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A 55

341

Sumarias, conocido como "Protocolo de Minnesota", adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, instrumento en el cual, entre otros aspectos, se señalan algunos supuestos en los que, la única alternativa para lograr una investigación eficaz, consiste en establecer una **comisión especial de indagación**.

1121. Para mayor claridad, se reproduce la parte conducente de dicho documento enseguida<sup>364</sup>:

**"D. Comisión indagatoria**

*En los casos en que se sospeche la participación de un gobierno, puede no ser posible una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión indagatoria especial. También puede ser necesaria una comisión indagatoria cuando se advierte la falta de conocimientos especializados. En esta sección se enuncian los factores que dan lugar a una presunción de complicidad del gobierno, o de parcialidad o insuficientes conocimientos de parte de quienes realizan la investigación. Cualquiera de esas presunciones debe acelerar la creación de una comisión investigadora especial. A continuación se establecen los procedimientos que podrán utilizarse como modelo para la*

LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA

RDOS  
EJECUTIVO  
CLATO  
JULIAS

<sup>364</sup> Páginas 60 a 64, documento visible en la siguiente liga:  
<http://www.hchr.org.co/phocaupload/publicaciones/Libros/protocolo%20de%20minnesota.pdf>

creación y el funcionamiento de las comisiones indagatorias. Los procedimientos dimanar de la experiencia de indagaciones importantes que se han organizado para investigar las ejecuciones o casos de violación de derechos humanos igualmente penosos. El establecimiento de una comisión indagatoria implica la definición del alcance de la indagación, la designación de los miembros y el personal de la comisión, la determinación del tipo de actuaciones que se han de realizar y de los procedimientos que regirán esas actuaciones, y la autorización para que la comisión informe acerca de sus conclusiones y formule recomendaciones. Se tratarán por separado cada una de esas esferas.

#### **1. Factores que inducen a una investigación especial**

**Entre los factores que apoyan la creencia de que el gobierno participó en el homicidio y que deberían inducir a crear una comisión especial imparcial que la investigue figuran:**

a) Los casos en que las opiniones políticas o religiosas o la afiliación étnica o la condición social de la víctima susciten la sospecha de que el gobierno participó como autor o cómplice de la muerte a causa de la existencia de uno o varios factores siguientes:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**I) Cuando la víctima fue vista por última vez en la custodia de la policía o detenida;**

**II) Cuando el modus operandi sea reconocidamente imputable a escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno;**

**III) Cuando personas de gobierno o relacionadas con éste hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del homicidio;**

**IV) Cuando no puedan obtenerse las pruebas físicas o de testigos esenciales a la investigación.**

**b) Como se enuncia en el párrafo 11 de los principios, debe establecerse una comisión indagatoria independiente o un procedimiento semejante en los casos en que una investigación rutinaria resulte insuficiente por:**

**I) Falta de pericia; o**

**II) Falta de imparcialidad; o**

**III) La importancia del asunto, o**

**IV) La existencia manifiesta de criterio abusivo; o**

**V) Reclamaciones de la familia de la víctima acerca de las insuficiencias señaladas u otras razones sustanciales." (Lo resaltado no es de origen).**

AL DE LA FEDERACIÓN  
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
ACUERDOS  
COLEGIADO  
CIRCUITO  
AMALIPAS

122. En el caso, se reitera, el superior jerárquico de la autoridad investigadora, resulta ser el

mismo que el de por lo menos tres de las dependencias que deben investigarse (Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina --esta última por posibles actos de tortura y uno de ejecución extrajudicial--); además se ha suscitado retraso, ineficacia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas; pero también existen serias alegaciones de tortura en el curso de la investigación.

1123. Sobre este último aspecto, el mencionado **Protocolo de Estambul**, también destaca que cuando exista sospecha de que funcionarios públicos están involucrados en los actos de tortura, para que la investigación pueda resultar objetiva e imparcial, debe crearse una **comisión especial de indagación**.

1124. Para una mejor referencia, enseguida se transcribe el fragmento del documento en el que se hace dicha mención.

*"80. La autoridad investigadora tendrá la facultad y la obligación de obtener toda la información necesaria para la investigación. Las personas que realicen dicha investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a las personas que en ejercicio de sus funciones oficiales se*



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

hallaren presuntamente implicadas en torturas o malos tratos a comparecer y prestar testimonio...

[...]

85. Cuando se sospeche que funcionarios públicos están implicados en actos de tortura, incluida la posibilidad de que hayan ordenado o tolerado el uso de la tortura, ministros, adjuntos ministeriales, funcionarios que actúen con conocimiento de los ministros, funcionarios superiores de ministerios estatales o altos jefes militares, no podrá realizarse una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión especial de indagación. También puede ser necesaria una comisión de este tipo cuando se ponga en tela de juicio la experiencia o la imparcialidad de los investigadores.

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA

HERDOS  
ALEGIADO  
CIRCUITO  
AULIPAS

86. Entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en la tortura o de que existen circunstancias especiales que justifican la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación figuran:

a) Cuando la víctima haya sido vista por última vez en buenas condiciones de salud, detenida o bajo custodia policial;

b) Cuando el *modus operandi* sea conocido e identificable con las prácticas de tortura patrocinadas por el Estado;

c) Cuando agentes del Estado o personas asociadas al Estado hayan tratado de obstruir o retrasar la investigación de la tortura;

d) Cuando una indagación independiente sea favorable al interés público;

e) Cuando la investigación realizada por los órganos investigadores regulares se ponga en tela de juicio a causa de la falta de experiencia o de imparcialidad o por otras razones, incluida la importancia del asunto, la existencia de un cuadro manifiesto de malos tratos, quejas de la persona con respecto a las insuficiencias mencionadas o cualquier otra razón de peso.

**87 Cuando el Estado decida establecer una comisión independiente de indagación deberán tenerse en cuenta varias consideraciones. Primero, a las personas objeto de investigación se les han de conceder las mínimas garantías procesales amparadas por el derecho internacional en todas las fases de la investigación. Segundo, los investigadores deberán contar con el apoyo del personal técnico y administrativo adecuado, además de tener acceso a un asesoramiento jurídico objetivo e imparcial, a fin de asegurar que la**



*investigación se materialice en pruebas que sean admisibles en un procedimiento penal. Tercero, los investigadores deberán recibir el pleno apoyo de los recursos y potestades del Estado. Por último, los investigadores tendrán la facultad de pedir ayuda a la comunidad internacional de expertos en derecho y medicina.”* (Lo resaltado no es de origen).

1125. Cabe señalar que en sentencia dictada el 22 de septiembre de 2009, en un precedente que involucró el análisis del fenómeno de la desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el **Caso Anzualdo Castro contra Perú**, señaló la posibilidad de establecer comisiones para arribar a la verdad de los hechos, en los términos siguientes:

*“118. La Corte ha considerado el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada. En el caso Velásquez Rodríguez la Corte afirmó la existencia de un “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”. En este tipo de casos se entiende que los familiares de la persona desaparecida son víctimas de los hechos constitutivos de la*

desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados. **La Corte ha reconocido que el derecho a conocer la verdad de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia.** Asimismo, la Corte ha fundamentado la obligación de investigar como una forma de reparación, ante la necesidad de reparar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto. El derecho a conocer la verdad también ha sido reconocido en diversos instrumentos de Naciones Unidas y recientemente por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

119. **El Tribunal considera que el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos.** Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 55

625

personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. Además, en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados periodos históricos de una sociedad." (Lo resaltado no es de origen).

RDGX  
EGU  
RCUT  
ULPAS

1126. Entonces, debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación, consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público; en la inteligencia de que para dotar de soporte profesional, técnico y administrativo a las víctimas, éstas deberán ser asistidas en todo momento por un organismo autónomo,

**como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.**

1127. La autonomía de gestión y presupuestaria de dicho organismo, así como su personalidad jurídica y patrimonio propios, pero sobre todo su alta capacidad profesional, técnica y administrativa, constituyen elementos aptos para corregir los defectos de las indagaciones, e incluso, reconducirla a fin de que se profundicen diversas líneas de investigación que no se hubieran explorado aún, o que lo haya sido, pero no con la debida exhaustividad.

1128. De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, **se integrará una comisión**, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad, se denominará **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)**.

1129. Sobre el tema se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar la sentencia de 10 de febrero de 2017, en el **Caso Favela Nova Brasilia contra Brasil**, en la que indicó que en los supuestos en que se sospecha la participación de funcionarios estatales, **la investigación pudiera no ser**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

independiente, a menos que se cree una comisión indagadora especial, o algún procedimiento semejante.

1130. Para mayor claridad se reproduce la parte conducente de dicho fallo enseguida:

*"186. En ese sentido, los Principios sobre Prevención e Investigación Eficaces sobre Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y su Manual (conocidos como Protocolo de Minnesota), disponen que en los casos en que se sospeche la participación de funcionarios estatales, puede no ser posible una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión indagadora especial. Entre los factores que justifican la creencia de que funcionarios estatales participaron en el homicidio y que deberían inducir a crear una comisión especial imparcial que la investigue figuran, entre otros, **cuando la víctima haya sido vista por última vez en la custodia de la policía o detenida**; cuando el modus operandi sea reconocidamente imputable a escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno; **cuando personas del gobierno o relacionadas con éste hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del homicidio, y cuando no puedan obtenerse las pruebas físicas o de testigos esenciales***

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA

QUERDOS  
COLEGADO  
O CIRCUITO  
TAMAULIPAS

*la investigación. En dichas situaciones, el párrafo 11 de los referidos Principios dispone que se establezca una comisión indagatoria independiente o un procedimiento semejante. Los investigadores, en esos casos, deben ser imparciales, competentes e independientes.*

187. A este respecto, la Corte considera que el elemento esencial de una investigación penal sobre una muerte derivada de intervención policial es la garantía de que el órgano investigador sea independiente de los funcionarios involucrados en el incidente. Esa independencia implica la ausencia de relación institucional o jerárquica, así como su independencia en la práctica. En ese sentido, en los supuestos de presuntos delitos graves en que 'prima facie' aparezca como posible imputado personal policial, la investigación debe estar a cargo de un órgano independiente y diferente de la fuerza policial involucrada en el incidente, tales como una autoridad judicial o el Ministerio Público, asistido por personal policial, técnicos de criminalística y administrativos ajenos al cuerpo de seguridad al que pertenezca el posible imputado o imputados.

188 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido diversas



337

circunstancias en las cuales la independencia de los investigadores puede estar afectada en caso de una muerte derivada de intervención estatal. Entre ellas, la Corte destaca supuestos en los cuales: i) los mismos policías investigadores son potencialmente sospechosos; ii) son colegas de los acusados; iii) tienen una relación jerárquica con los acusados; o iv) que la conducta de los órganos investigadores indique una falta de independencia, como la falla en adoptar determinadas medidas fundamentales para aclarar el caso y, cuando corresponda, sancionar a los responsables; v) un peso excesivo concedido a la versión de los acusados; vi) la omisión en explorar determinadas líneas de investigación que eran claramente necesarias, o vii) inercia excesiva.

189. Lo anterior no significa que el órgano investigador debe ser absolutamente independiente, pero debe ser "suficientemente independiente de las personas o estructuras cuya responsabilidad está siendo atribuida" en el caso concreto. La determinación del grado de independencia se hace a la luz de todas las circunstancias del caso."

131. Cabe precisar que en el caso, la referida comisión se podrá fortalecer con la integración

y participación de otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1132. Del mismo modo, es importante señalar, que pese a la reconocida capacidad profesional y gran prestigio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 17, punto 2, inciso b, de su reglamento<sup>365</sup>, no podrá integrarse directamente a la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)**, pues de ser así, ello podría impedirles, posteriormente, presentar el caso a una instancia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1133. Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúe supervisando el cumplimiento de las medidas cautelares

<sup>365</sup> "Artículo 17. Discusión y votación

2. Los miembros de la Comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión en los siguientes casos:

a. si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado, o

b. si previamente hubiesen participado, a cualquier título, en alguna decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o representantes de alguna de las partes interesadas en la decisión.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

impuestas al Estado mexicano, y todas las atribuciones propias de su competencia.

1134. Incluso, no sólo sería factible sino además recomendable, que se vislumbrara un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, máxime que originalmente se indicó que el mandato del GIEI, podría extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, que entre otros aspectos, contempló la adopción de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los cuarenta y tres estudiantes<sup>366</sup>, sin que a la fecha, exista plena certeza al respecto.

1135. Cabe agregar que de conformidad con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, adoptado en dos mil dieciséis por la Organización de las Naciones Unidas, se establece la posibilidad de acudir a la asistencia de órganos internacionales, como por ejemplo, la INTERPOL, para apoyar la investigación.

<sup>366</sup> Puntos 3 y 10 del Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional, desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las Medidas Cautelares MC/409/14 y en el Marco de las Facultades de Monitoreo que la CIDH Ejerce sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región.

1136. Para mayor claridad, se reproduce enseguida la parte conducente del referido Protocolo<sup>367</sup>:

***"6. Asistencia técnica internacional***

*77. La asistencia en la investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de otros Estados puede ayudar a cubrir las lagunas en la capacidad técnica de los investigadores. Órganos internacionales como INTERPOL por ejemplo, podrían estar en condiciones de dar apoyo a la investigación, y organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) podrían ofrecer asesoramiento sobre mejores prácticas en materia forense para la gestión adecuada y digna y la identificación de los muertos en los contextos humanitarios."*

1137. Ahora, en observancia a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, el propio Ministerio Público dotará de legalidad de las actuaciones, al revestirlas de fe pública.

1138. Asimismo, todo oficio o determinación que se emita, para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

<sup>367</sup> Página 17 del referido documento



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1139. Además, es importante puntualizar que serán los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la posible opinión o sugerencia, en su caso, de el o los organismos nacionales o internacionales que se hayan sumado, quienes de común acuerdo decidirán las líneas de investigación que deben explorarse, las pruebas a practicarse; además de que estarán presentes en todas las diligencias, sin excepción, las que incluso, podrán ser desahogadas en las instalaciones de la referida Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1140. En ese punto, el Ministerio Público estará en aptitud de sugerir líneas de investigación o pruebas, pero la decisión sobre su admisión, corresponderá a los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

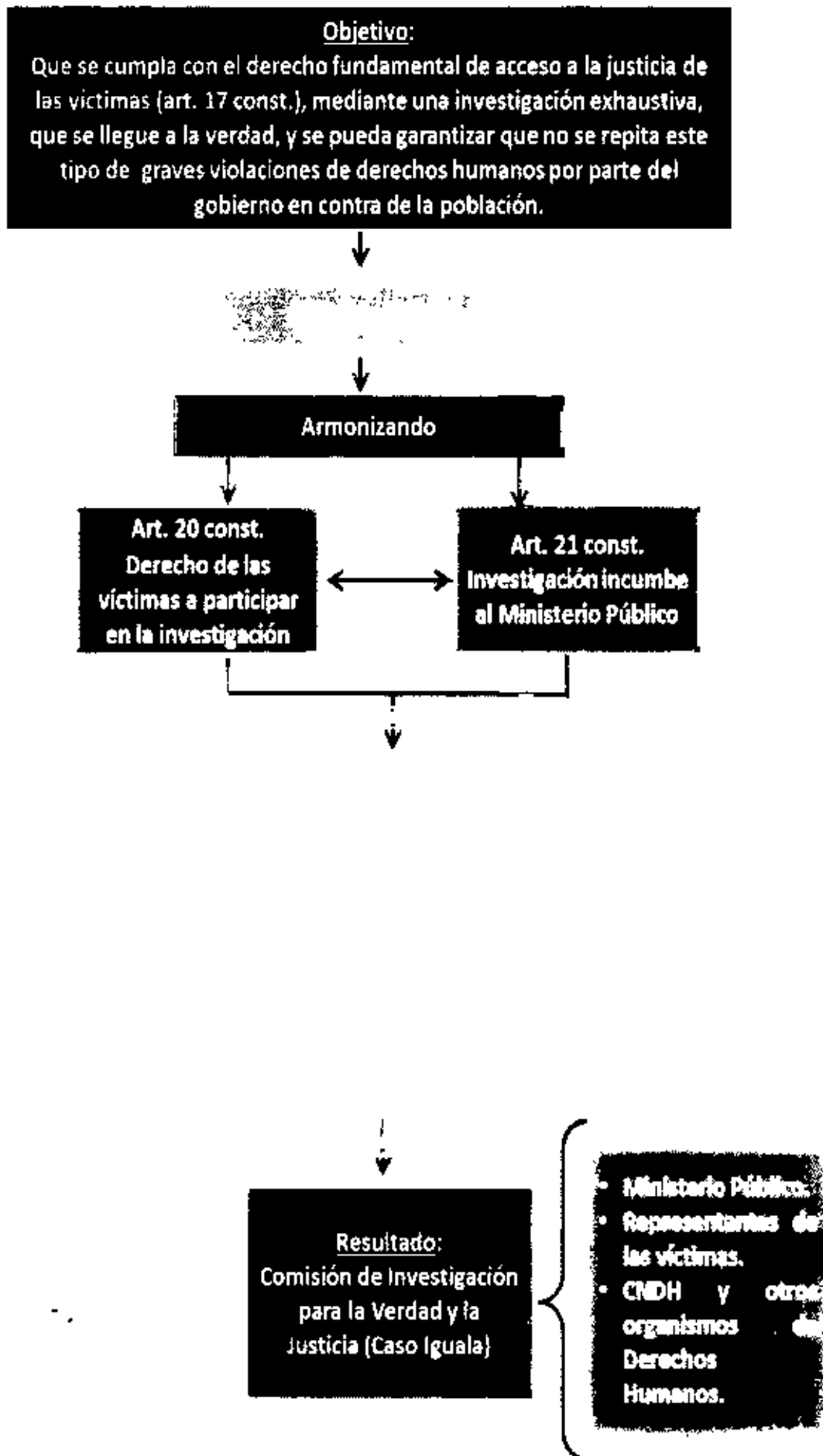
1141. Del mismo modo, es importante señalar que al examinar personas, el orden para interrogarlas deberá ser definido por la representación de las víctimas.

1142. Antes de proseguir, y para efectos ilustrativos, se estima pertinente esquematizar el ejercicio emprendido a fin de explicar el sustento jurídico de la Comisión de

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA

VERDOS  
COLEGIO  
CIRCUITO  
MAULIPAS

Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), a que se ha aludido previamente.







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1143. Cabe agregar que la implementación y mecanismo que nos ocupa, no implica un desequilibrio en perjuicio de los inculpados, pues la **Comisión Nacional de los Derechos Humanos**, cuenta con la capacidad técnica y profesional necesarias, que le permitirá transitar por el sendero del debido proceso, desde la perspectiva de las víctimas, sin desdén de la óptica de las personas a las que les resulte la calidad de inculpadas, que inclusive, pudieran tener la calidad de víctimas por diversos hechos o circunstancias como ya se advierte en el presente caso.

1144. Entonces, en el presente caso, la averiguación previa seguirá incumbiendo al Ministerio Público, pero actuará de manera conjunta con las víctimas, quienes estarán en todo momento acompañadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1145. Ahora, si bien la Procuraduría General de la República seguirá participando formalmente en la investigación, no debe perderse de vista que hasta ahora, su actuación no ha sido rápida, efectiva, independiente ni imparcial.

1146. Ante ello, es necesario que la investigación sea asignada a Fiscales diversos a los que hasta ahora han estado al frente o participado en la averiguación previa.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA  
GUERREROS  
COLEGIO  
CIRCUITO  
MAULIPAS

1147. En efecto, se considera prudente y saludable, que nuevos agentes del Ministerio Público sean quienes participen en la indagatoria.

1148. Pues sólo de esta forma se podrán contrarrestar y vencer los defectos e irregularidades de la investigación precedente, que en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio, ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, y el depósito de sus restos en el Río San Juan.

1149. De esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación.

1150. Sobre el particular, se estima pertinente aludir a la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2017, en el **Caso Pacheco León y otros contra Honduras**, en la que se expuso lo siguiente:

***“B.1.2. Seguimiento de líneas lógicas de investigación***



89. Habiendo quedado establecido lo anterior, debe destacarse que la diligencia debida respecto a una investigación no se agota en la realización mecánica de diligencias, sino que es necesario que esa actividad investigativa esté debidamente orientada, de acuerdo a las hipótesis relevantes sobre los hechos y su autoría. En ese sentido, este Tribunal, a la luz de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, ha indicado que en aras de garantizar la efectividad de la investigación, se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma.

[...]

91. Ahora bien, los argumentos de la Comisión y los representantes sobre la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación no se refieren a esas personas. Adujeron que no se indagó en forma suficiente a otros presuntos responsables, aun habiendo indicios sobre su participación en los hechos. En ese sentido, sostuvieron que había indicaciones de

la relación de la muerte del señor Pacheco con su actividad política y que, pese a ello, **las hipótesis de autoría respectivas no fueron suficientemente indagadas.**

92. Al respecto, la Corte hace notar que los hechos delictivos pueden tener distintas características. Una forma, señalada durante la audiencia pública respecto a los hechos del presente caso, consiste en el denominado "crimen selectivo". En la audiencia pública se conceptuó al mismo como aquel que se comete por la actividad que la víctima realiza, y se señaló que en tal tipo de delitos suele haber responsables intelectuales y materiales que conforman "una organización, una red o una estructura de poder", un "elevado nivel de planeación" y "una constante de actos previos [en los que] suele [haber] hostigamientos [y] amenazas". Se manifestó que por ello **debe investigarse las consecuencias del crimen y quiénes se benefician con el mismo, así como la estructura criminal presuntamente involucrada.**

93. En el mismo sentido, la Corte ha indicado que **la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron [las] violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias**, y que '[n]o basta el



conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente." (Lo resaltado no es de origen).

1151. Por lo que resulta indispensable que nuevos investigadores retomen el caso, partiendo de una visión bajo la luz que arroje el propio material probatorio, pues con motivo de esta ejecutoria, se implementará un nuevo mecanismo de investigación, y es necesario que el asunto sea conducido, bajo una nueva óptica y etapa.

1152. De hecho, cualquier agente del Ministerio Público de la Federación y en general, peritos y demás personal ministerial que haya actuado dentro de las averiguaciones previas relacionadas al contexto integral del Caso Iguala, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando en la indagatoria.

1153. Para una mejor comprensión de esta determinación, se considera necesario señalar que el Código Federal de Procedimientos Penales, establece que los magistrados y jueces estarán impedidos en los supuestos que precise la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación. ya que en su artículo 444, señala lo siguiente.

**“Artículo 444.** *Los magistrados y jueces deben excusarse en los asuntos en que intervengan. por cualquiera de las causas de impedimento que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”*

1154. Mientras que el artículo 146 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. establece las diversas causas de impedimento. de las que se destaca la prevista en la fracción XVI. que establece lo siguiente:

**“Artículo 146.** *Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos. por alguna de las causas siguientes:*

**XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia** No es motivo de impedimento para magistrado de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467. y fracción I del artículo 468 del



PROCURADURÍA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*Código Nacional de Procedimientos Penales;...*  
(Lo resaltado no es de origen).

1155. Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que los agentes del Ministerio Público deben excusarse de conocer los casos, si se da algún supuesto de impedimento aplicable a ministros, magistrados o jueces de Distrito.

1156. Así se desprende de su artículo 83, que señala lo siguiente:

*"Artículo 83. Los agentes del Ministerio Público de la Federación no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento que la ley señala en el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito y las demás disposiciones aplicables, haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior inmediato.*

*Si el agente del Ministerio Público de la Federación interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, será sancionado conforme con las disposiciones de esta ley y demás que resulten aplicables."*

1157. De lo que se sigue que el supuesto antes analizado, en el que un titular ha conocido anteriormente del asunto, le resulta aplicable a los Fiscales que en el pasado y en la actualidad, participaron en la investigación del caso.
1158. Corroborar lo anterior, la circunstancia de que si bien se trata de una nueva etapa investigativa, lo cierto es que, para arribar a la verdad, en un momento dado, ciertos actos de investigación ya existentes, deberán ser objeto de las nuevas indagaciones.
1159. En otras palabras, para arribar a la verdad, de ser necesario, la investigación existente también podrá ser sometida al escrutinio del nuevo equipo de trabajo.
1160. Y desde luego, para despejar cualquier duda o suspicacia, es preferible que no sean los mismos investigadores quienes conduzcan esta nueva fase, máxime que se actualiza el supuesto que expresamente prevé la fracción XVI, del artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable para los agentes del Ministerio Público de la Federación, en términos del artículo 83 de la diversa Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.





1161. Situación similar ocurre cuando un juzgador, magistrado o ministro, ha conocido con anterioridad de un asunto, en diversa instancia.

1162. Al respecto, es ilustrativa, por similitud del supuesto a que se refiere, la **jurisprudencia 1a./J. 6/95**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, bajo los **registros 200483**, que son del contenido siguiente:

**"IMPEDIMENTO. DEBE CALIFICARSE DE LEGAL SI UN MAGISTRADO UNITARIO DE CIRCUITO INTERVINO CON ANTERIORIDAD EN UN ASUNTO Y EN OTRA INSTANCIA.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 444, del Código Federal de Procedimientos Penales, los magistrados y los jueces deben excusarse en los asuntos en que intervengan al concentrarse cualquiera de las causas de impedimento que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta última, en el precepto 82, fracción XVI, establece que: "Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: ... Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto en otra

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REGISTROS  
MAGISTRADO  
CIRCUITO  
LIPAS

*instancia o jurisdicción...". De todo lo anterior se infiere, que si un Magistrado Unitario de Circuito, intervino con anterioridad con el carácter de instructor en un asunto y en otra instancia, ello significa que está impedido para conocer de los recursos que hagan valer las partes, de tal manera que al darse este supuesto, debe calificarse de legal el impedimento planteado, conforme a lo dispuesto en los artículos antes mencionados."*

1163. Cabe indicar además, que para la práctica de experticiales, deberá preferirse la designación de peritos independientes, ya sea que pertenezcan a instituciones públicas o privadas.

1164. Así, por regla general, habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, a meros que los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideren pertinente la intervención de un perito de dicha institución.

1165. Por lo demás, ha quedado establecido que tanto el seguimiento de líneas de investigación, como la recaudación de pruebas, adolecieron de falta de rapidez, eficacia, independencia e imparcialidad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1166. Tales aspectos, dieron lugar a que este tribunal de amparo haya determinado la necesidad de crear la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)**.

1167. Pese a lo anterior, el Ministerio Público formará parte de dicha comisión, con lo que se observa el texto constitucional, en especial el artículo 21, que en su redacción aplicable al caso, señala que la investigación incumbe a dicha institución.

1168. Pues bien, debe quedar claro que en esta nueva fase, la institución ministerial debe actuar de manera inmediata, efectiva, independiente e imparcial.

1169. De lo contrario, de presentarse por parte del Ministerio Público algún retraso u obstáculo en el seguimiento de alguna línea de investigación, o en el desahogo de alguna prueba, propuestas por la representación de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal proceder lesivo del texto constitucional, podrá ser incluso considerado como un desacato a esta ejecutoria de amparo, con la consecuente responsabilidad penal que ello puede generar, en términos de los artículos 262, fracción V<sup>368</sup>, y 267

<sup>368</sup> "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el

de la Ley de Amparo<sup>369</sup>, y demás disposiciones penales aplicables.

1170. Por otro lado, no sobra señalar que si en un momento dado, se estimara pertinente el apoyo o colaboración de un equipo de trabajo independiente, como el que en su momento integró el GIEI, tal posibilidad no debe descartarse, sino por el contrario, debería incluso buscarse la participación de los mismos expertos independientes que anteriormente llevaron a cabo las indagaciones respectivas, a fin de aprovechar su amplio conocimiento del caso, y que además quedó demostrada su alta capacidad y profesionalismo.

1171. Más aun cuando la incorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como se dijo en diverso apartado, se suscitó a raíz de un acuerdo suscrito el doce de noviembre de dos mil

---

*juicio de amparo o en el incidente de suspensión.*

[ ]

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo

<sup>369</sup> **"Artículo 267.** Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir

II. Repita el acto reclamado,

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto, y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

catorce, entre representantes del Estado Mexicano, de las víctimas y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1172. Lo que implica que desde su origen, contó con la aprobación y consentimiento tanto del Estado, como de las propias víctimas; todo ello sumado a la intervención de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1173. En relación a la referida Comisión Interamericana, tal y como se desprende del artículo 1 de su Reglamento<sup>370</sup>, se integra por miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a título personal, por lo que no representan a sus países de origen o residencia; y tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región; lo que da cuenta de la independencia de su intervención.

1174. Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dejó constancia pública de sus investigaciones, las disciplinas

<sup>370</sup> "Artículo 1. Naturaleza y composición

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

2 La Comisión representa a todos los Estados miembros que integran la Organización.

3. La Comisión se compone de siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización, quienes deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos "

FEDERACION  
ESTADOS AMERICANOS

DIRECCION  
LEGISLACION  
RECUENTO  
AULIPAS

involucradas, la metodología empleada, las consideraciones y respaldo científico de cada una de sus conclusiones, lo que denota su profesionalismo

1175. Cabe decir que para nuestro país resulta más que conocida la referida organización internacional (EAAF), pues en el marco del **Caso González y otras ("Campo Algodonero") contra México**, el 1 de mayo de 2005, la Procuraduría de Chihuahua la contrató, con el fin de que prestara su asesoraría entre otros aspectos, en la identificación de restos humanos<sup>371</sup>.

1176. Por todo lo cual, ni en los miembros del GIEI ni en los del EAAF podría considerarse que se dé alguna hipótesis de impedimento legal, como sucede con los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, pues a diferencia de éstos, aquéllos han dejado constancia de una labor objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial.

1177. En otro aspecto, se considera destacar que tomando en consideración que ya han transcurrido casi cuatro años de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas y las dificultades que se han presentado en la investigación, a fin de dar cumplimiento al

---

<sup>371</sup> Párrafo 297 de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

artículo 17 constitucional, que consagra el derecho fundamental de acceso pronto y efectivo a la justicia, es necesario establecer que a los miembros de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), debe permitírseles el libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que consideren pertinente, en especial cuando haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense.

1178. Esta determinación se fundamenta en el artículo X, segundo párrafo, de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, que específicamente prevé tal situación, al señalar lo siguiente:

**"ARTICULO X.** *En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las*

ROOS  
GIADO  
INTO  
IPAS

personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las (sic) persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar." (Lo resaltado no es de origen).

1179. Por otra parte, no se desconoce que para el debido funcionamiento de la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iquala)**, será indispensable que el propio Estado mexicano le destine los recursos económicos necesarios.

1180. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>372</sup>, es

<sup>372</sup> "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

[ ]

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsiguientes Presupuestos de Egresos





implica que a través de la determinación de ésta, se persiga y castigue a todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos; como consecuencia de ello, se erradique la impunidad, y se sienta un precedente a manera de garantía de no repetición de la inobservancia de los derechos humanos.

1183. Al respecto, el 22 de septiembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el **Caso Anzualdo Castro contra Perú**, en el que se indicó lo siguiente:

*"179. El Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Por ello, el reconocimiento y el ejercicio del derecho a conocer la verdad en una situación concreta constituye un medio de reparación..."* (Lo resaltado no es de origen).

1184. Del mismo modo, el 14 de noviembre de 2014, la referida Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en el diverso **Caso Rodríguez Vera y otros**



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Desaparecidos del Palacio de Justicia)  
contra Colombia, en la que señaló:

"488. La Corte ha indicado que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares. Esto es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por esas situaciones. Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales -del Estado- como individuales -penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad." (Lo resaltado no es de origen).

LA FEDERACIÓN  
COLEGIO  
CIRCUITO  
AULIPAS

1185. Es importante señalar que dado el contexto de los hechos que nos ocupan, es necesario que la sociedad en general se concientice sobre

la extrema gravedad de las situaciones ocurridas a los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, a las seis personas que perdieron la vida, así como a quienes resultaron lesionados en mayor o menor grado; y a los familiares de todos ellos.

1186. En efecto, los ataques ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, no distinguieron edad, sexo, situación económica, etcétera.

1187. Como se señaló en otro momento, en dichos eventos resultaron afectados desde estudiantes que pretendían tomar autobuses para acudir a una manifestación; niños que viajaban en un camión, de regreso a casa después de haber participado en una gesta deportiva; el chofer que conducía a esos menores; una señora que tomó un taxi para visitar a un familiar, la esposa que decidió acompañar a su marido —un reportero que pretendía desarrollar su labor periodística—; los conductores y tripulantes de diversos automóviles que circulaban en la vía pública; entre otros

1188. En esta ocasión fueron ellos quienes resultaron afectados, pero en realidad, dada la magnitud de los ataques, las víctimas pudieron ser más personas, sin distingo alguno



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1189. Por ello resulta muy importante que la sociedad en general se interese e involucre en la legítima demanda de verdad y justicia, que incansablemente han exigido las víctimas.

1190. Especial reconocimiento merecen los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes a pesar de las dificultades que han afrontado, no han desfalecido en la extenuante búsqueda de los normalistas.

1191. Finalmente, es importante señalar, que para este Tribunal Colegiado, está claro que hasta en tanto no se tenga certeza de lo ocurrido a los estudiantes desaparecidos, sus familiares no verán colmados sus legítimos anhelos de verdad y justicia, pues sólo alcanzando esos extremos, podrán trabajar en la superación de la dolorosa y grave experiencia que han venido enfrentando desde entonces.

1192. Son todas estas razones, las que ameritan conceder la protección constitucional.

1193. En la inteligencia de que en el apartado siguiente se precisarán los efectos de la concesión, derivado de los diversos puntos en los que, como se ha explicado a lo largo de esta ejecutoria, se advirtió transgresión a derechos fundamentales.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
TRIBUNAL COLEGIADO  
DE CIRCUITO  
AMAUILIPAS

### **Sexto. Efectos del amparo.**

1194 La autoridad responsable Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas deberá hacer lo siguiente:

I) • Dejar insubsistente la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 323323-5, de su índice;

II) • Emitir otra en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, así como en los amparos en revisión 204 al 206/2017, relacionados con el presente:

• Ordene al Juez de Distrito reponga la fase de preinstrucción. Al efecto, deberá precisarle que la reposición del procedimiento implica:

III) a) Que respecto al quejoso [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], deberá declarar la insubsistencia del auto de formal prisión dictado el veintiuno de abril de dos mil quince, en los autos de la causa penal [REDACTED], y lo actuado en la fase de la preinstrucción, con posterioridad a la declaración preparatoria.

b) En el plazo de preinstrucción que le resta, **descontando las dos horas con cincuenta minutos**



PROCURADURÍA DE LA FEDERACIÓN

consumidas hasta la declaración preparatoria deberá hacer lo siguiente:

1) Suspender el referido plazo restante de la preinstrucción (máximo diez días naturales).

2) Reconocer la calidad de víctimas de las personas a quienes se reconoció ese carácter en la averiguación previa, o bien, en esta ejecutoria; y consecuentemente, ordenar su notificación, lo anterior, a fin de que estén en aptitud de ejercer los derechos que en su favor reconoce la Constitución, la legislación procesal penal federal, entre otros, designar asesor jurídico, se informados del estado que guarda la causa penal, ofrecer pruebas.

3) Ordenar al Titular o Encargado de la Procuraduría General de la República, que cese o dé por concluida la asignación encomendada a peritos de dicha dependencia, para que dictaminen a los inculpados relacionados con el presente caso.

4) Requerir al agente del Ministerio Público de la Federación, que presente dictámenes en materia médico psicológica, practicados por una institución independiente, conforme al Protocolo de Estambul, que cumplan cabalmente con las exigencias y lineamientos ahí establecidos, en los que deberá examinarse a [REDACTED]

[REDACTED] declarante 1)

(declarante 2), [REDACTED]



QUERDOS  
COLEGIADO  
CIRCUITO  
MAULIPAS



III)



En la inteligencia de que atendiendo al referido **Protocolo de Estambul**, los dictámenes deberán ser practicados por peritos que no pertenezcan a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías estatales, o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras).

Al respecto, también deberá **puntualizarse a la Fiscalía**, que la información requerida se está solicitando dentro de un término constitucional, y que se requiere que remita la respuesta correspondiente a





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

la mayor brevedad posible (dentro de un plazo no mayor a diez días naturales), máxime que el término para resolver la situación jurídica de [REDACTED]

[REDACTED], se reanudará hasta en tanto se cuente con el informe, y en su caso, los anexos respectivos.

5) Cabe precisar que el plazo máximo de la suspensión del término constitucional será de diez días naturales, contados a partir de que se notifique al Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito.

De modo que, si llegado ese momento, aún no se reciben los dictámenes requeridos a los citados organismos, el Juez de Distrito deberá levantar la suspensión del procedimiento, y reanudar el plazo constitucional por el término restante, es decir, por sesenta y nueve horas y cincuenta minutos, término en el que deberá resolver la situación jurídica de [REDACTED]

Lo anterior sin perjuicio de que se solicite la duplicidad del plazo constitucional, y ello resulte jurídicamente procedente.

Cabe precisar que, ante la abstención de allegar los dictámenes conforme al Protocolo de Estambul, atendiendo a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, deberá tomar en cuenta los siguientes indicios:

III)

LA FEDERACIÓN  
CUERPOS  
COLEGADO  
CIRCUITO  
JANULIP.

✓ Demora injustificada en la presentación o puesta a disposición.

✓ Múltiples lesiones en declarantes, al momento de la detención, durante y después de estar a disposición del ministerio público

Además de ser relevantes las siguientes circunstancias:

- La autoincriminación o imputación en contra de terceros, de manera "espontánea".
- El no haberse permitido a los detenidos, realizar una llamada telefónica a un familiar o abogado, previo a emitir sus declaraciones, sino hasta la finalización de éstas.

### III)

- En uno de los declarantes, diligencia de ampliación de declaración no solicitada por indiciado ni por defensa, y además, con abogado diverso al que nombró previamente.
- En algunos casos, conflicto de interés de defensores.
- Fallas manifiestas por parte de los defensores públicos, debido a la ausencia de argumentos para evidenciar posibles actos de tortura, así como para controvertir las retenciones decretadas una vez presentadas diversas personas.
- Múltiples inconsistencias en sus dichos, destacando la versión de una privación de la vida e



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

661

FORMA A 55 403

III)

incineración de los estudiantes, lo cual los peritos independientes de reconocimiento internacional, concluyeron que no era posible.

Hecho lo cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá concluir que existen indicios suficientes para presumir que dichos declarantes fueron torturados.

• Al estudiar el cuerpo del delito de delincuencia organizada, habrá de observarse lo siguiente:

a) Respecto a las declaraciones 1, 2 y 5, a cargo de [REDACTED]

[REDACTED] deberá tomar en cuenta:

IV)

1) Que su puesta a disposición se suscitó **once horas con treinta minutos** después de su detención; por lo que deberá analizarse si tal demora se encuentra justificada, sin dejar de atender si son creíbles las explicaciones dadas por los aprehensores para explicar el retardo ("ponchadura" de una llanta, que a los vehículos oficiales se les empezó a calentar el motor, y que había marchas en la Ciudad de México).

2) Que a pesar de que en el parte informativo no se narran situaciones de violencia, **los declarantes 1, 2 y 5**



ACUERDOS  
JUNAL COLEGIADO  
VENO CIRCUITO  
SA, TAMAULIPAS

**presentaron lesiones desde el primer dictamen médico que se les practicó apenas momentos posteriores a su puesta a disposición.**

Para ello, deberá tenerse en cuenta que el Estado es responsable de la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Todo lo cual deberá ser tomado en cuenta para determinar si las declaraciones se emitieron sin coacción ni violencia física o moral, como lo exige el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales.

**IV) b) En relación a las declaraciones 3 y 11, a cargo de Ramiro Ocampo Pineda alias "El Chango" y Rosario Manuel Borja, tome en cuenta que:**

**1) Son inexactas las referencias temporales en el sentido de que desde su detención a la puesta a disposición, transcurrió una hora y media.**

**2) Indebidamente, los agentes aprehensores, en lugar de poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, se trasladaron hacia un lugar, a efectuar labores investigativas, sin que estuviera presente ni existiera instrucción del Fiscal para ello.**

**3) En el primer dictamen médico que se le practicó a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 3), no presentó lesiones; sin embargo, con**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

posterioridad, no sólo presentó múltiples lesiones, sino que además, el propio médico que lo dictaminó, sugirió su valoración por un otorrinolaringólogo.

Al respecto, como [REDACTED] o [REDACTED] [REDACTED] (declarante 3) inicialmente presentaba un estado de salud normal, y después apareció con múltiples lesiones, deberá partirse de que es a la autoridad a quien corresponde dar una puntual explicación de tal circunstancia, en la inteligencia de que debe presumirse que la alteración a su salud fue ocasionada por la autoridad que lo tenía bajo su custodia.

IV)

4) Además, debe tomarse en cuenta que al emitir su declaración ministerial [REDACTED] (declarante 3), se le designó el mismo defensor que a la coimputada R [REDACTED] (declarante 11), la cual había hecho imputaciones en su contra, con lo cual se inobservó el derecho fundamental a una adecuada defensa.

c) En relación a las declaraciones de [REDACTED] (declarante 4) [REDACTED] (declarante 7), [REDACTED] (declarante 8), [REDACTED] (declarante 9), y [REDACTED] (declarante 10), debe partirse de la base de que se trata de actuaciones que obran en copia certificada de averiguaciones previas,



ACUERDOS  
AL COLEGIADO  
NO CIRCUITO  
TAMAULIPAS

por lo que, en su caso, deberá asignarles el valor que corresponde a las documentales.

Además, deberá precisarse de qué forma se constata si los declarantes estuvieron debidamente enterados de procedimiento, si su declaración fue voluntaria, sin coacción ni violencia física o moral y si existen datos que la hagan inverosímil

Asimismo, debe tomar en cuenta que el medio probatorio número 10, es decir, la declaración de Honorio Antunez Osorio, alias "El Patacho", se encuentra incompleta

IV) d) Deberá abstenerse de calificar como confesiones o confesiones calificadas divisibles las declaraciones de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 11).

e) Respecto a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 6), deberá analizarse:

1) Si el transcurso de cinco horas y media constituye o no un tiempo mayor al razonablemente necesario desde su localización hasta su presentación a las instalaciones ministeriales, máxime que no se trató de una detención en flagrancia, propiamente, sino del cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

presentación.

2) Que desde su puesta a disposición presentaba lesiones, y que existe una variación significativa en la explicación de su origen.

Todo lo cual deberá ser tomado en cuenta, para determinar si la declaración se emitió sin coacción ni violencia física o moral, como lo exige el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales.

f) Especifique la información que se obtiene de cada medio de prueba tocante a la organización criminal, como las referencias a los municipios o entidades en el que tiene presencia, así como las personas que la encabezan; y en especial, debe motivarse adecuadamente lo atinente al territorio en el que despliega su actuar la organización criminal "Guerreros Unidos", así como lo relativo a las personas que la lideran.

g) En relación al parte informativo relativo a la detención de [REDACTED] (medio de prueba 12), debe dejar de tomarse en cuenta lo supuestamente manifestado por esa persona a sus aprehensores.

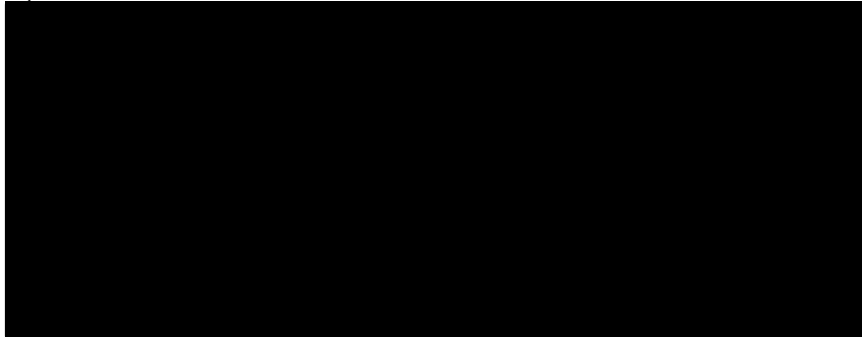
En la inteligencia de que en todo momento, deberán atenderse también los lineamientos establecidos en la parte considerativa de esta ejecutoria.



ACUERDOS  
AL COLEGIADO  
NO CIRCUITO  
TAMAULIPAS

• Al analizar la **probable responsabilidad**, se deberá:

a) Prescindir de valorar las declaraciones 14 a 21, a cargo de



██████████ ██████████ ██████████ como testimoniales, y en su lugar, deberá apreciar si reúnen los requisitos para ser considerados como **confesiones**, y por ende, poder asignarles el valor de indicios

V) b) Respecto a ██████████ ██████████ ██████████ (declarante 14-15), Jonathan Osorio Cortes alias "El Jona" o ██████████ (declarante 16), y ██████████ ██████████ ██████████ (declarante 19):

1. Tomar en cuenta que al cumplimentarse la orden de búsqueda, localización y presentación de dichas personas, **no fueron informadas de que contaban con la opción de no comparecer a rendir su declaración ministerial**; e incluso del propio parte informativo se desprende que los dos primeros, no tenían intención de hacerlo, pues se asentó que quisieron "darse a la fuga".

2. Debe analizarse si el transcurso de **seis horas con cuarenta minutos**, desde su localización hasta





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

su presentación, representa o no un tiempo mayor al razonablemente necesario, máxime que no se trató de una detención en flagrancia, propiamente, sino del cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y presentación.

3. Debe determinarse si se excedieron los efectos jurídicos para los que se emitió la orden de búsqueda, localización y presentación, pues ésta tenía por objeto recabar su declaración, pero en lugar de proceder a esa diligencia, se dictó un auto de retención, sin que tampoco mediara una orden de detención.

V)

4. Debe tomarse en cuenta que [REDACTED] (declarante 14-15), presentó lesiones desde un primer momento, que pretendieron justificarse sobre la base de que pretendió darse a la fuga, pero como se encontraba "tomado", se cayó. Sin embargo, la autoridad ministerial no le practicó un estudio de alcoholemia, sino sólo uno toxicológico, que resultó negativo; y además, el médico naval que lo examinó en un inicio, destacó que presentaba marcha normal y lenguaje coherente.

5. Además, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 14-15), presentó nuevas lesiones y éstas fueron incrementándose, cuando ya se encontraba a disposición de la autoridad ministerial.



ACUERDOS  
NAL COLEGIADO  
ENO CIRCUITO  
A, TAMAULIPAS

6. Del mismo modo, debe analizarse si al **recabar una ampliación de declaración de P [REDACTED] [REDACTED]** (declarante 14-15), sin que éste o su defensa lo hubiera solicitado, se violó su derecho a una adecuada defensa, máxime que se le asignó un diverso abogado para que lo asistiera, sin que quedara acreditada en autos la previa comunicación a su defensor original, ni su imposibilidad de comparecer a asistirlo.

c) En relación a [REDACTED]

(declarante 16), debe tenerse en cuenta que:

v)

1. En un primer momento no presentó lesiones; sin embargo, al día siguiente presentó múltiples lesiones, y éstas fueron incrementándose posteriormente.

2. Además, debe tomarse en cuenta que al emitir su declaración ministerial a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 16), se le designó el mismo defensor que a [REDACTED] (declarante 17), el cual había hecho imputaciones en su contra, con lo cual se inobservó su derecho fundamental a una adecuada defensa.

d) Respecto a [REDACTED] [REDACTED] Sánchez alias [REDACTED] [REDACTED] (declarante 19), tampoco presentó



POT. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

lesiones en un primer momento, pero sí posteriormente.

e) Respecto a [REDACTED]

(declarante 17), debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1) Al cumplimentarse la orden de búsqueda, localización y presentación, no fue informado de que contaba con la opción de no comparecer a rendir su declaración ministerial;

2) Debe analizarse si el transcurso de cinco horas con quince minutos, desde su localización hasta su presentación, representa o no un tiempo mayor al razonablemente necesario, sin dejar de atender a si son creíbles las explicaciones dadas para explicar el retardo (que había tráfico y marchas en la Ciudad de México), máxime que no se trató de una detención en flagrancia, propiamente, sino del cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y presentación.

3) Debe determinarse si se excedieron los efectos jurídicos para los que se emitió la orden de búsqueda, localización y presentación, pues ésta tenía por objeto recabar su declaración, pero en lugar de proceder a esa diligencia, se dictó un auto de retención, sin que tampoco mediara una orden de detención.

4) Debe tomarse en cuenta que en un primer momento, [REDACTED]

FEDERACIÓN  
COLEGIO  
O CIRCUITO  
AMULIPAS

(decl rante 17). no presentó alteraciones a su salud; sin embargo, al día siguiente presentó múltiples lesiones, y éstas fueron incrementándose posteriormente

f) Sobre [REDACTED] c [REDACTED] (declarante 18) y [REDACTED] [REDACTED] (declarante 21), debe tomarse en cuenta lo siguiente:

v) 1. Al cumplimentarse la orden de búsqueda, localización y presentación, **no fueron informados de que contaban con la opción de no comparecer a rendir su declaración ministerial**, e incluso del propio parte informativo se desprende, que no tenían intención de hacerlo, pues se asentó que "intentaron correr".

2. Debe analizarse si el **transcurso de nueve horas**, desde su localización hasta su presentación, representa o no un tiempo mayor al **razonablemente necesario**, sin dejar de atender a si son creíbles las explicaciones dadas para explicar el retardo (tráfico y marchas en la Ciudad de México). máxime que no se trató de una detención en flagrancia, propiamente, sino del cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y presentación

3. Debe determinarse si se **excedieron los efectos jurídicos para los que se emitió la orden de búsqueda, localización y presentación**, pues ésta tenía por objeto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

recabar su declaración, pero en lugar de proceder a esa diligencia, se dictó un auto de retención, sin que tampoco mediara una orden de detención.

4. Debe tomarse en cuenta que **presentaron lesiones desde un primer momento**, las que pretendieron justificarse sobre la base de que quisieron darse a la fuga, pero como se encontraba en estado de embriaguez, se cayeron; y que además, se iban golpeando en el camino.

V)

Sin embargo, la autoridad ministerial no les practicó un estudio de alcoholemia, sino sólo uno toxicológico, que resultó negativo.

Además, resulta ambigua la aseveración de que se iban golpeando, y en su caso, al estar bajo custodia de la autoridad, ésta es responsable de su integridad física.

También debe tomarse en cuenta que al emitir su declaración ministerial [REDACTED] (declarante 18), se le designó el mismo defensor que a [REDACTED] (declarante 21), el cual había hecho imputaciones en su contra, con lo cual se inobservó su derecho fundamental a una adecuada defensa.

g) En adición a lo anterior, respecto a [REDACTED] (declarante 21), debe analizarse que tan solo unas horas después de haber sido puesto a disposición de la autoridad ministerial, presentó

FEDERACIÓN  
COLEGIO  
CIRCUITO  
AMALIPAS

múltiples lesiones que no tenía a su arribo

h) En relación a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (declarante 20), debe analizarse:

1) Si se actualizó el supuesto de la **flagrancia**, tomando en cuenta además, la naturaleza del delito atribuido.

2) Que desde su arribo a las instalaciones ministeriales presentó lesiones.

v) i) En el mismo sentido, debe tomarse en cuenta el contenido del Segundo Informe emitido por el GIEI, de **Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas**, en especial el apartado de **"Investigación sobre trato a los detenidos e informes médicos"**, en el que se analiza lo atinente a integridad física, entre otros, de [REDACTED]

[REDACTED] (declarante 17) e Ignacio Aceves Rosales (declarante 20).

j) Tomarse en consideración el contenido del **Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa**, intitulado **"Doble injusticia"**, emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se consideró que existen **"fuertes**



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura" en los casos de [REDACTED]

(declarante 1),

(declarante 2),

(declarante 5),

(declarante 6) y

(declarante

9),

(declarante 14 y 15),

(declarante 16),

(declarante 17),

(declarante 18),

(declarante 20) y

(declarante

21).

k) Considere que en las declaraciones 19 a 21, a cargo de

ni siquiera se hace mención al quejoso.

Por tanto, de insistir en aludir a dichos medios de prueba, se deberá exponer por qué, a pesar de no hacerle imputaciones, son aptas para acreditar la probable responsabilidad de [REDACTED] a [REDACTED] o bien, a la persona con alias [REDACTED]".

l) Se tome en cuenta las múltiples

ACUERDOS  
AL COLEGIADO  
EN CIRCUITO  
TAMAULIPAS

inconsistencias advertidas en las declaraciones de [REDACTED]

[REDACTED] (declarante 14-15),

[REDACTED] (declarante 16),

o [REDACTED] (declarante 17),

[REDACTED] (declarante 18). respecto a lo sucedido a los normalistas desaparecidos, en cuanto:

1) El aviso o llamada para preparar su participación.

2) Traslado de los estudiantes al basurero de Cocula.

3) Privación de la vida de los normalistas.

4) Preparación del incendio en el basurero de Cocula.

m) Vinculado a lo anterior, deben apreciarse el contenido y conclusiones de los dictámenes periciales independientes de reconocimiento internacional (Doctor José L. Torero y Equipo Argentino de Antropología Forense).

n) Asimismo, deberá darse respuesta al planteamiento que formuló la defensa del quejoso, en el sentido de que sus coacusados únicamente aluden a una persona de apodo "Duva", pero no indican su nombre, salvo uno de ellos, quien lo menciona como [REDACTED] pero que el quejoso es una





PROF. JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

V)

persona distinta, de nombre [REDACTED]

o) En su caso, de estimar acreditada la probable responsabilidad del quejoso, precise que su participación o autoría se da en términos de la fracción II, y no III, del artículo 13 del Código Penal Federal.

En la inteligencia de que en todo momento, deberán atenderse también los lineamientos establecidos en la parte considerativa de esta ejecutoria.

VI)

a) En ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), al analizar las declaraciones de [REDACTED]

[REDACTED] (declarante 4),

[REDACTED] (declarante 7), [REDACTED]

[REDACTED] (declarante 8),

[REDACTED] (declarante 10),

[REDACTED] (declarante 11),

[REDACTED] (declarante 14-15),

[REDACTED] (declarante 16),

[REDACTED] (declarante 17), y

[REDACTED] (declarante

18); debe tomarse en cuenta que existen afirmaciones que carecen de soporte probatorio, tales como las relativas a que los normalistas, hoy desaparecidos:

1) Iban a boicotear o afectar un acto político de [REDACTED]

FEDERACIÓN  
DE JUECES  
ACUERDOS  
AL COLEGADO  
NO CIRCUITO  
TAMAULIPAS





PROCURADURÍA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

• En relación a la investigación correspondiente llevada a cabo en la etapa de la averiguación previa, siguiendo las consideraciones y lineamientos de esta ejecutoria:

a) Deberá integrarse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), que se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Federación.

b) En la inteligencia de que por parte del Ministerio Público de la Federación, los Fiscales y personal de la Procuraduría General de la República, que pasen a formar parte de la comisión investigadora, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el presente caso.

c) La comisión deberá quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales, lo que deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad.

d) Todo oficio o determinación que se emita, para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

e) Las líneas de investigación y pruebas a practicarse, será determinado

VII)

EL ATEL-PA  
DE MÉXICO  
E ADQUISICIÓN  
JUDICIAL COLEGIO  
VENECIRCUITO  
SA, TIRMAULIPAS

por la representación de las víctimas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las diligencias incluso podrán ser practicadas en las instalaciones de esta última.

f) El orden para examinar personas, será determinado por la representación de las víctimas.

g) Para la práctica de experticiales, deberá preferirse la designación de peritos independientes, ya sea que pertenezcan a instituciones públicas o privadas.

h) Por regla general, habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, a menos que los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideren pertinente la intervención de un perito de dicha institución.

i) Los miembros de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense.



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

VII)

j) Para las situaciones en que exista duda sobre el funcionamiento de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), deberá acudirse al Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como "Protocolo de Minnesota", adoptado en mil novecientos noventa y uno por la Organización de las Naciones Unidas, en especial, a las directrices que se prevén en el apartado D, de dicho documento.

En la inteligencia de que en todo momento, deberán atenderse también los lineamientos establecidos en la parte considerativa de esta ejecutoria.



ACUERDOS  
AL COLEGADO  
NO CIRCUITO  
TAMAULIPAS

1195. ► Debe precisarse que hasta que se lleve a cabo lo anterior, se tendrá por cumplido el fallo protector.

1196. Del mismo modo, cabe precisar que todas las autoridades, es decir, no sólo el tribunal unitario señalado como autoridad responsable, sino toda autoridad cuyas funciones estén relacionadas con el seguimiento del presente caso, deben realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo.

1197. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible

en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 172605, que señala:

**“AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.** *Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.*”

**Séptimo. Vista a distintas autoridades.**

1198. En el presente apartado se considera pertinente dar vista a las autoridades correspondientes, sobre diversas situaciones, máxime que algunas de ellas pudieran configurar responsabilidades de distinta índole.

1199. ► Como se estableció en el considerando sexto, la presencia de personal ministerial en las inmediaciones del río San Juan, el veintiocho de octubre de dos mil catorce, constituye una situación irregular, sobre todo por la circunstancia de que no se trató de una diligencia formal, además de que también se trasladó a uno de los inculpados, sin dejar constancia de ello en autos, y sin que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

encontrara presente su defensor; todo lo cual se hizo sin instrucción expresa ni presencia del Fiscal.

1200. Asimismo, deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia.

1201. Del mismo modo, si aún no se ha hecho, debe investigarse a los funcionarios que dieron lugar a que el quejoso [REDACTED] o [REDACTED] o [REDACTED], no haya sido puesto de manera inmediata a disposición del Juez de Distrito que había librado orden de aprehensión en su contra desde el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce.

1202. También debe investigarse la posible tortura sufrida por los diversos declarantes, e informar al Tercer Tribunal Unitario del decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, sobre los resultados de las investigaciones, y en su caso, las sanciones impuestas a los responsables.

1203. Relacionado con lo anterior, debe investigarse si el fallecimiento de Emmanuel [REDACTED]dro [REDACTED] [REDACTED], se dio como consecuencia de actos de tortura.



1204. Al respecto, con independencia del sentido del auto de término constitucional que se dicte, es decir, al margen de si se dicta un auto de formal prisión, o bien, un auto de libertad, en cualquiera de esos dos escenarios, deberá comunicarse al referido tribunal de amparo, sobre las responsabilidades de índole administrativo y penal impuestas a todos y cada uno de los responsables de todos esos hechos.

1205. En este orden de ideas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, **dese vista** al Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, **en suplencia del Procurador General de la República**<sup>375</sup>, para que proceda a la investigación de dicha situaciones, así como de los servidores públicos a quienes les resulte responsabilidad por tales motivos.

1206. ► Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Defensoría Pública, se considera pertinente dar vista al Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, evalúe el desempeño de los defensores adscritos a la Procuraduría General de la República, en especial a la

<sup>375</sup> <https://www.plmexico.gob.mx>





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Para tal efecto, remítasele copia certificada de la presente ejecutoria.

1207. ► Por otro lado, del contenido de los informes rendidos por el GIEI, se aprecia que en el contexto integral de los ataques, existen diversos señalamientos en el sentido de que no se prestó atención médica oportuna a diversas personas heridas, y más grave aún, que en algunos casos, la atención médica les fue negada.

1208. Tales aspectos constituyen situaciones de la más alta gravedad, dado que involucraría la inobservancia de derechos fundamentales, que de acuerdo al artículo 1 constitucional, toda autoridad debe salvaguardar, con mayor razón este tribunal colegiado, en su carácter de órgano de protección de derechos fundamentales.

1209. Al respecto, cabe decir que el derecho a la salud se encuentra previsto en el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución, que señala:

**"Artículo 4. [...]**

**[...]**

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de*

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA  
ACUERDOS  
AL COLEGIADO  
EN CIRCUITO  
TAMAULIPAS

*salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."*

1210. En adición a lo expuesto, México ha ratificado diversos instrumentos de derechos humanos que contemplan el derecho a la salud.

1211. Entre los instrumentos y documentos de fuente internacional más destacados en la materia del derecho a la salud, se encuentran los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>374</sup>; 10 del Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"<sup>375</sup>, y 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>376</sup>.

---

<sup>374</sup> "Artículo 12:

1 Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2 Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para

a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad."

<sup>375</sup> "Artículo 10

1 Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2 Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1212. Ahora, con relación al este tema, la Organización Mundial de la Salud, en su carácter de autoridad directiva y coordinadora de las acciones sanitarias en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido, entre otros aspectos, que el derecho a la salud incluye el de acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria; y que cuando en el ámbito de la salud, se aplica un enfoque de derechos humanos, es factible corregir desigualdades y prácticas discriminatorias y relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios, y para lograrlo, deben observarse los siguientes principios y normas rigurosos<sup>377</sup>:

FEDECO  
CUERPOS  
L. COLEGADO  
IO CIRCUITO  
TAMAILPAS

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas,

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud. y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables."

<sup>376</sup> "Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

(...)"

<sup>377</sup> Derecho a la Salud, Nota descriptiva no. 323, noviembre de 2013, OMS. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/>.

- **"No discriminación:** el principio de no discriminación procura garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social.

- **Disponibilidad:** se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

- **Accesibilidad:** los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

- **Aceptabilidad:** todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital.

- **Calidad:** los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- **Rendición de cuentas:** los Estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos.

- **Universalidad:** los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, deben poder ejercerlos."

1213. Cabe decir que en el ámbito nacional, destaca la Ley General de Salud, que de conformidad con su artículo 1<sup>378</sup>, ordenamiento de orden público e interés social, que reglamenta el derecho a la protección a la salud, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las autoridades locales en materia de salubridad general.

1214. Ahora, el artículo 5 de la referida Ley General de Salud<sup>379</sup>, dispone que el Sistema Nacional de Salud, está integrado por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas

<sup>378</sup> "Artículo 1. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social."

<sup>379</sup> "Artículo 5. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud."

LA FEDERACIÓN  
MEXICANA  
ACUERDOS  
NACIONALES  
EN EL CIRCUITO  
A. TAMAULIPAS

físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones.

1215. De modo similar, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el sistema de salud está constituido por todas las organizaciones, instituciones, recursos, infraestructura y personas cuyo propósito primario es mejorar la salud de las personas<sup>380</sup>

1216. Por otro lado, el artículo 34 de la Ley General de Salud, clasifica los servicios de salud **dependiendo del sector que los provea, entre los que destacan el público y el privado;** que el público es responsabilidad de los servicios de seguridad social que torga directamente el Estado, y los servicios de salud privados son los que prestan personas físicas o morales, sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles<sup>381</sup>.

<sup>380</sup> Organización Mundial de la Salud. Temas de Salud, Sistemas de Salud, disponible en [http://www.who.int/topics/health\\_systems/es/](http://www.who.int/topics/health_systems/es/)

<sup>381</sup> **"Artículo 34 - Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:**

**I. Servicios públicos a la población en general;**

**II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, prestan las mismas instituciones u otros grupos de usuarios;**

**III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y**

**IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.**

**"Artículo 38 - Son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales en las condiciones que converjan con los usuarios y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. En materia de tarifas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 43 de esta Ley.**

Estos servicios pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales o colectivos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1217. En ese sentido, también es importante destacar que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, establece en su artículo 19, fracción I<sup>382</sup>, que se debe de asegurar una oportuna atención médica, cuando el servicio sea requerido.

1218. De todo lo cual se sigue que los establecimientos para la atención médica deben cumplir con ciertas obligaciones al interior de sus instituciones, **sin importar que sean públicos o privados.**

1219. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, por lo que éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal<sup>383</sup>.

1220. Es por esto que el Estado debe regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad

<sup>382</sup> "Artículo 19.-Corresponde a los responsables a que hace mención el artículo anterior, llevar a cabo las siguientes funciones:

I. Establecer y vigilar el desarrollo de procedimientos para **asegurar la oportuna y eficiente prestación de los servicios** que el establecimiento ofrezca, así como para el **cabal cumplimiento de la Ley** y las demás disposiciones aplicables;

[...]

<sup>383</sup> Caso *Ximenes Lopes vs. Brasil*, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C No 149, Corte Interamericana de Derecho Humanos, párrafo 89.



que presta tales servicios es de carácter público o privado.

1221. **Por lo que la obligación de los Estados de regular cuestiones de salud no se agota en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier institución de salud.**

1222. Lo anterior tiene sustento en la tesis **1a. XXIII/2013 (10a.)**, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, con número de registro **2002501**, de contenido siguiente:

**"DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD.** El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano."



1223. En este orden de ideas, los servicios de salud, dependiendo del sector que los provea, pueden ser públicos y privados; sin embargo, en este último caso, el Estado conserva su potestad de supervisarlas.

1224. Cabe decir que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y

digno por parte de todo el personal involucrado

1225. Lo anterior, tiene sustento en la tesis P. **XVI/2011**, sustentada por el Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, con número de registro **161333**, de rubro siguiente.

**"DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN.**

*Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud."

1226. Así, se estima que las situaciones acaecidas en el presente caso, en las que presuntamente se negó el servicio médico a diversas personas que requerían ser atendidas pudieran generar responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, para diversas personas.

1227. Máxime que en adición a los tipos penales que prevé la codificación penal del Estado de Guerrero, el artículo 469 de la Ley General de Salud<sup>384</sup>, prevé un tipo penal en que incurren los profesionales, técnicos o auxiliares en la atención médica que, sin causa justificada, se nieguen a prestar asistencia a una persona, en caso de urgencia, poniendo en peligro su vida, el cual se sanciona entre seis meses a cinco años de prisión, multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente, y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años, sin embargo, si se produjere un daño por la falta de intervención, podrá imponerse la suspensión definitiva del ejercicio profesional.

1228. Ahora, dado el carácter concurrente de la materia de salud, se establece poner dichas situaciones en conocimiento de los titulares de las respectivas dependencias federal, estatal y municipal.

384 **Artículo 469.** *Atender con negligencia o auxiliar de la atención médica que, sin causa justificada, se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión, multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente, y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.*

*Si se produjere un daño por la falta de intervención, podrá imponerse además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad competente.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1229. En consecuencia, en el ámbito federal, se ordena dar vista de lo expuesto al Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud<sup>385</sup>.

1230. A nivel estatal, al Doctor Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del Estado de Guerrero<sup>386</sup>.

1231. Y en el sector municipal, al Doctor Mario Delgado Castañeda, Secretario de Salud Pública de Iguala, Guerrero<sup>387</sup>.

1232. Lo anterior, a fin de que de no haberlo hecho, actúen en el ámbito de sus competencias, pues la aseverada negación del servicio médico, pudiera desencadenar en responsabilidades, entre otras, de carácter administrativo.

1233. En el entendido de que el ámbito de la responsabilidad penal, también deberá ser investigado por la Procuraduría General de la República, por lo que la vista previamente indicada, también debe comprender lo atinente a la investigación de la conducta de los prestadores de los servicios de salud.

1234. En la inteligencia de que las referidas autoridades de salud, así como la Procuraduría General de la República,

<sup>385</sup> <https://www.gob.mx/salud>

<sup>386</sup> <http://guerrero.gob.mx/directorio/dependencias/salud-dependencias-y-entidades/>

<sup>387</sup> <http://www.transparenciaiguala.gob.mx/salud-municipal>

DE LA FEDERACIÓN  
DE ACUERDOS  
CON EL COLEGIO  
DE JUECES  
DE LA CIUDAD DE  
TAMAUPIPAS

deberán informar al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, el seguimiento a las presentes vistas, los procedimientos que se hayan emprendido, y en su caso, la aplicación de las respectivas consecuencias legales a los responsables.

1235. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la **jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.)**, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el **registro 2014917**, que es del contenido siguiente:

**“VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.** Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."*

**Octavo. Petición al Presidente de la República.**

1236. Como se vio en el considerando sexto, la integración de la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)** encuentra un claro sustento jurídico, diseminado en diversos instrumentos internacionales, protocolos, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso, por ser más favorable a las personas, resulta de observancia obligatoria, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal.

LA FEDERACIÓN  
ACUERDOS  
AL COLEGADO  
EN CIRCUITO  
TAMPULIPAS

1237. Sin embargo, pese a la abundante información con que se cuenta al respecto, se trata de una figura novedosa en nuestro país.
1238. Ahora, tomando en consideración que lo sucedido en Iguala, Guerrero, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, constituye un hecho sin precedentes, y ello da lugar a adoptar medidas y determinaciones que quizás tampoco encuentran antecedente en la historia moderna de nuestro país.
1239. Para este tribunal colegiado, está claro que el éxito de dicha Comisión, será también el éxito del propio Estado, y de sus instituciones, pero sobre todo, constituirá la materialización de la verdad y la justicia, en el marco del estado de derecho que debe prevalecer en todo país democrático, como el nuestro.
1240. Para ello, la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)**, seguramente requerirá el apoyo de diversas instituciones públicas del país.
1241. Por tal motivo, **de la manera más atenta y respetuosa**, se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las Secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el marco de sus respectivas





PODERANICIAL DE LA FEDERACIÓN

atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión, para el logro de su cometido.

1242. ► Por otra parte, una mención especial merece la situación por la que están atravesando las víctimas.

1243. Así es, tal y como lo apuntó el GIEI, en su Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas, los proyectos de vida de los familiares, y en especial de los padres de los estudiantes desaparecidos, han sido transformados, pues desde entonces, han dedicado prácticamente todo su tiempo y esfuerzos en una incansable búsqueda de sus hijos.

1244. Ahora, en el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha tomado conocimiento del caso, tan es así que en su momento dictó medidas cautelares.

1245. Dados los defectos que se suscitaron en la investigación, se considera que de no arribarse a una solución amistosa, se prosiga a una fase contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, y eventualmente, a una condena.

1246. No obstante, con independencia de lo anterior, se estima prudente tomar en cuenta

FEDERACIÓN  
FISCAL  
CUERDOS  
COLEGADO  
O CIRCUITO  
AMALIPAS

los parámetros interamericanos, y al efecto, por ejemplo, se tiene el **Caso Trujillo Oroza contra Bolivia**, en el que, mediante resolución de 26 de enero de 2000, la Corte Interamericana de Derechos humanos aceptó la admisión de los hechos y declaración de responsabilidad (sobre desaparición forzada de personas) de ese país.

1247. Es decir, que el allanamiento total, no libró a dicho Estado de la reparación pecuniaria, pues se estableció que Bolivia debía emitir diversos pagos por conceptos de daño material e inmaterial, que resultaron en más de \$100,000.00 (cien mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) para la familiar, en su condición de derechohabiente de la persona desaparecida.

1248. Por lo que tomando en consideración las necesidades que están padeciendo los familiares de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, en cuya afectación habrían intervenido diversas autoridades; sería un buen gesto del Estado Mexicano, anticipar una indemnización parcial a favor de los familiares de los estudiantes desaparecidos

1249. Así, tomando en cuenta los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pone a su atenta consideración



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que una indemnización pecuniaria parcial, podría ser del orden de los \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada una de las familias de los estudiantes desaparecidos.

1250. En el entendido de que lo anterior implicaría únicamente un adelanto parcial, para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares; e incluso, para afrontar los gastos que el propio litigio conlleva.

1251. Todo ello se considerará por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto de que el asunto se sometiera a su jurisdicción, y el Estado mexicano resultara condenado, como en el **Caso Trujillo Oroza contra Bolivia**.

1252. Además, el Estado no quedaría liberado de su deber de seguir enfocando todos los esfuerzos institucionales hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos, lograr el total esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de todos los responsables, y desde luego, la integral reparación de los daños a todas las víctimas.

LA FEDERACIÓN  
ACUERDOS  
NAL COLEGIO  
ENO CIRCUITO  
TAMPULPAS

1253. Sin embargo, en esta nueva fase de la investigación, se considera además, que dicha indemnización parcial, pudiera marcar la pauta, y un primer paso hacia un camino distinto, en el que eventualmente, puedan converger las víctimas y el Estado mexicano, en el camino y la consecución de la verdad y la justicia.

1254. Vinculado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que para el debido funcionamiento de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), se requiere que se destinen los recursos económicos necesarios, para que ésta pueda desplegar sus actividades sin obstáculos ni dificultades, pero sobre todo, para el logro de su cometido.

1255. En ese orden de ideas, respetuosa y atentamente, se destaca la importancia de que se destinen los recursos presupuestarios que sean necesarios, para el adecuado funcionamiento de dicha comisión.

1256. Por tal motivo, se le solicita de la manera más atenta y respetuosa, tome en consideración lo expuesto, y en el marco de sus atribuciones, adopte las medidas necesarias para que se destinen los recursos presupuestarios que se requiera.

1257. Dado que lo anterior involucra las facultades de la Cámara de Diputados del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Honorable Congreso de la Unión**, hágase lo anterior de su conocimiento, por conducto del Presidente de la Junta Directiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso I) de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión<sup>388</sup>, para que, en el marco de sus atribuciones, se sirva adoptar las medidas pertinentes, a fin de que dotar a la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)** de los recursos que requiera para su adecuado funcionamiento.

**Noveno. Relevancia de la sentencia.**

1258. Dada la naturaleza del contenido de esta resolución, este tribunal colegiado ordena se recopile y divulgue esta sentencia, en términos del Acuerdo 69/2004, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de noviembre de dos mil cuatro, que implementa la recopilación y sistematización de criterios novedosos de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en virtud de que se estima que esta ejecutoria reúne esas características.

<sup>388</sup> "Artículo 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

[...]

I) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario;

[...]"

1259. ► Así, en atención a las consideraciones expuestas, se desprenden los siguientes:

### **RESOLUTIVOS:**

**Primero.** Debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, respecto al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas.

**Segundo.** En la materia de la revisión, aunque por motivos diversos se confirma la sentencia recurrida

**Tercero.** La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, en el toca de apelación [REDACTED] de su índice, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria.

**Cuarto.** Se ordena dar vista con copia certificada de la presente ejecutoria, a las autoridades mencionadas en los considerandos séptimo y octavo, para los efectos ahí señalados.



PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

705

FORMA-A-55

**Quinto. Se ordena recopilar y divulgar esta sentencia, en términos del último considerando.**

Notifíquese, como corresponda; háganse las anotaciones pertinentes, con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados **Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Tánchez**, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta el día de hoy uno de junio de dos mil dieciocho, en que se terminó de engrosar. Doy fe.




ACUERDOS  
AL COLEGIADO  
NO CIRCUITO  
TAMAULIPAS

  
**Juan Antonio Trejo Espinoza**  
Magistrado presidente

  
**Mauricio Fernández de la Mora**  
Magistrado ponente

**Héctor Gálvez Tánchez**  
**Magistrado**

**Erasmó Rico Cázares**  
**Secretario de acuerdos**

  
Cotejó  
Jesús Desiderio Cavazos Elizondo



**Secuencia: 2418131**

**Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**

<b>Firmante</b>	<b>Nombre:</b>	ERASMO RICO CÁZARES	<b>Estado del certificado:</b>	OK	Vigente
	<b>CURP:</b>	RICE561214HTSCZR02			
<b>Firma</b>	<b>Serie del certificado del firmante:</b>	706a6620636a6600000000000000000000935e	<b>Revocación:</b>	OK	No Revocado
	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	06/02/2019T20:58:30Z / 06/02/2019T14:58:30-06:00	<b>Estatus de firma:</b>	OK	Valida
	<b>Algoritmo:</b>	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	<b>Cadena de firma:</b>	13 bc 57 e9 f2 55 2d 81 ae 4b 4c e0 12 27 b7 1f c6 a7 ed 70 ad e9 c3 30 f1 02 3a b3 b1 a7 9f 5a b7 8e 4a f3 e7 d7 b4 02 f9 ce 85 d4 85 58 48 3a 2f 1d 81 b8 e5 ad b4 1f 65 09 41 5e ac 99 a9 31 2e 91 b7 f8 8f bc 12 36 aa 39 80 23 23 90 27 c0 8c d6 58 e1 31 d1 51 48 6c 84 59 a9 0a ef 0d 44 69 a0 57 95 2e 59 c4 c4 71 04 dc 44 5f 16 c7 84 6e dd 17 27 bd 72 91 e9 77 68 e4 35 27 e1 7c 4e cb d9 d0 1f fb 4e 9e 29 4a 64 74 bc 4f e0 2d bc b2 2a cb b2 9a 7f 8a 04 bf 4e e2 44 f9 cd 68 17 52 b4 87 14 f1 62 b4 23 db ec 22 64 ac bc 6f 90 cc c8 d4 e6 9f 2f 02 ad b5 f3 c8 b7 2f 05 63 57 d4 d4 e2 35 2c 6d 9e b9 ab e0 36 1b 29 c5 79 a5 e5 92 99 68 c4 3c 14 30 7d c9 d5 ac 26 09 ca 8e 68 3f 0d aa 06 77 9f a9 4d 05 ba a7 72 2b 95 ca d8 81 b4 aa 88 c2 6a 6e 5a cb ae fe 33 dd c4 d6			
<b>Validación OCSP</b>	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	06/02/2019T20:58:30Z / 06/02/2019T14:58:30-06:00			
	<b>Nombre del emisor de la respuesta OCSP:</b>	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	<b>Emisor del certificado de OCSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	<b>Número de serie del certificado OCSP:</b>	706a6620636a66000000000000000000000000935e			
<b>Estampa TSP</b>	<b>Fecha: (UTC / Ciudad de México)</b>	06/02/2019T20:58:30Z / 06/02/2019T14:58:30-06:00			
	<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	<b>Emisor del certificado TSP:</b>	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	<b>Identificador de la secuencia:</b>	2421265			
	<b>Datos estampillados:</b>	13F5BD8EC681A83A5F38414309572B031AE2C293			